

**Índice de documentos solicitados por la Comisión de  
Postulación para elegir Magistrados de la Corte  
Suprema de Justicia de Guatemala  
Aspirante Héctor Ricardo Echeverría Méndez**



No.	DESCRIPCIÓN	FOLIO
1.	Formulario de solicitud de inscripción como postulante, con fotografía reciente tamaño cédula (puede recogerlo en la sede indicada o descargarlo en el sitio: comision-csj.umes.edu.gt).	1
2.	Certificado original de Nacimiento.	2
3.	Fotocopia completa debidamente legalizada del Documento Personal de Identificación.	3
4.	Constancia original de ser Colegiado activo.	4
5.	Constancia original del Colegio de Abogados donde se acredite los años de colegiado del postulante	5
6.	Constancia original de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.	6
7.	Constancia original de no haber sido sancionado por el órgano de disciplina correspondiente de las instituciones públicas en donde se encuentre laborando o de la última en donde hubiere laborado (esto aplica para las instituciones que cuenten con órgano disciplinario específico).	7 Al 9
8.	Constancia original de haber desempeñado un período completo o más como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunales colegiados que tengan la misma calidad (para los que corresponda)	10
9.	Declaración Jurada de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.	11
10.	Constancia original de carencia de antecedentes policiales.	12
11.	Constancia original de carencia de antecedentes penales.	13
12.	Declaración Jurada donde conste que el aspirante está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.	14
13.	Declaración Jurada donde conste que el aspirante no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos	15
14.	Declaración Jurada donde conste que el aspirante no se encuentra comprendido en los casos de impedimentos establecidos en el Artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos.	16

**Índice de documentos solicitados por la Comisión de  
Postulación para elegir Magistrados de la Corte  
Suprema de Justicia de Guatemala  
Aspirante Héctor Ricardo Echeverría Méndez**



15.	Declaración Jurada donde conste expresamente que el candidato no tiene parentesco con ningún miembro de la Comisión de Postulación para la selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación), que no es ministro religioso, ni ocupa cargos dirigenciales en partidos políticos o de representación asociaciones sindicales	17
16.	Constancia Transitoria original de inexistencia de reclamación de cargo de la Contraloría General de Cuentas (Finiquito).	18
17.	Constancia original del Tribunal Supremo Electoral de no estar afiliado a ningún partido político	19
18.	Constancia original del Tribunal Supremo Electoral, de no estar inhabilitado en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos	20 Al 21
19.	Constancia original del Tribunal Supremo Electoral, de no pertenecer a cargos directivos de entidades con fines políticos, miembros de los comités pro formación de cualquier organización de carácter político, ni directivo de dichas organizaciones	22
20.	Solvencia original de carencia de multas impuestas por la Corte de Constitucionalidad	23
21.	Curriculum vitae conforme a la guía aprobada por esta Comisión.	24 Al 108
22.	Resumen de la información relevante del Curriculum Vitae en un máximo de dos hojas	109
23.	Copia en formato digital (PDF) del expediente	110
24.	Los postulantes provenientes de la Carrera Judicial deberán presentar documento en el que conste su manifestación de interés en participar en el proceso de postulación.	

Guatemala, enero de 2020.





FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Comisión de Postulación para Magistrados de la  
Corte Suprema de Justicia 2019-2024

No. EXPEDIENTE



☒ Ejercicio profesional  
liberal

☐ Carrera Judicial

SELLO RECIBIDO

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_  
Revisor 1: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Revisor 2: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Revisor 3: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

PARA USO DE  
LA COMISION

DATOS GENERALES DEL POSTULANTE

Nombre y apellidos completos: **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**  
Dirección física para recibir notificaciones:  
**36 calle 24-30 zona 16, colonia HACIENDA REAL**  
Teléfono: **2445 5886** Celular: **5417 7917**  
Correo electrónico para recibir notificaciones: **hecheverria1@gmail.com**

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

- ☒ 1. Formulario de solicitud de inscripción como postulante, con fotografía reciente tamaño cédula (puede recogerlo en la sede indicada o descargarlo en el sitio: [comision-csj.umes.edu.gt](http://comision-csj.umes.edu.gt)).
- ☒ 2. Certificado original de Nacimiento.
- ☒ 3. Fotocopia completa debidamente legalizada del Documento Personal de Identificación.
- ☒ 4. Constancia original de ser Colegiado activo.
- ☒ 5. Constancia original del Colegio de Abogados donde se acredite los años de colegiado del postulante.
- ☒ 6. Constancia original de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
- ☒ 7. Constancia original de no haber sido sancionado por el órgano de disciplina correspondiente de las instituciones públicas en donde se encuentre laborando o de la última en donde hubiere laborado (esto aplica para las instituciones que cuenten con órgano disciplinario específico).
- ☒ 8. Constancia original de haber desempeñado un período completo o más como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunales colegiados que tengan la misma calidad (para los que corresponda).
- ☒ 9. Declaración Jurada de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
- ☒ 10. Constancia original de carencia de antecedentes policiales.
- ☒ 11. Constancia original de carencia de antecedentes penales.
- ☒ 12. Declaración Jurada donde conste que el aspirante está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- ☒ 13. Declaración Jurada donde conste que el aspirante no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.
- ☒ 14. Declaración Jurada donde conste que el aspirante no se encuentra comprendido en los casos de impedimentos establecidos en el Artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos.
- ☒ 15. Declaración Jurada donde conste expresamente que el candidato no tiene parentesco con ningún miembro de la Comisión de Postulación para la selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación), que no es ministro religioso, ni ocupa cargos dirigenciales en partidos políticos o de representación asociaciones sindicales.
- ☒ 16. Constancia Transitoria original de inexistencia de reclamación de cargo de la Contraloría General de Cuentas (Finiquito).
- ☒ 17. Constancia original del Tribunal Supremo Electoral de no estar afiliado a ningún partido político.
- ☒ 18. Constancia original del Tribunal Supremo Electoral, de no estar inhabilitado en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

sigue atrás →

- ☒ 19. Constancia original del Tribunal Supremo Electoral, de no pertenecer a cargos directivos de entidades con fines políticos, miembros de los comités pro formación de cualquier organización de carácter político, ni directivo de dichas organizaciones.
- ☒ 20. Solvencia original de carencia de multas impuestas por la Corte de Constitucionalidad.
- ☒ 21. Curriculum vitae conforme a la guía aprobada por esta Comisión.
- ☒ 22. Resumen de la información relevante del Curriculum Vitae en un máximo de dos hojas.
- ☒ 23. Copia en formato digital (PDF) del expediente.
- ☐ 24. Los postulantes provenientes de la Carrera Judicial deberán presentar documento en el que conste su manifestación de interés en participar en el proceso de postulación.

NOTA:

- Toda la documentación requerida aplica para todos los postulantes, ya sea en el ejercicio liberal de la profesión de abogado o de la Carrera Judicial y debe presentarse en el orden establecido, con índice, debidamente foliada y rubricada.
- Deben presentarse original y una fotocopia del expediente y una copia digital en formato PDF .
- Todos los documentos deben de haber sido expedidos con no más de seis meses de anticipación a la fecha de presentación; salvo que en la ley o en el propio documento se establezca un plazo distinto de vigencia.
- El expediente no debe presentar ninguna alteración, mancha o tachadura, y los documentos que se acompañen y no se exijan en original, deben presentarse en copia legalizada.
- La entrega del expediente deberá ser estrictamente personal.
- Los abogados en el ejercicio de la profesión liberal y miembros de la Carrera Judicial, deberán presentar expediente en original, una fotocopia del mismo y otra copia digital en formato PDF en la sede de la Comisión (40 calle 10-02 Zona 8, Ciudad de Guatemala).
- Los miembros de la Carrera Judicial que deseen participar en el proceso de selección, deberán acompañar al expediente que ingresen en la sede de esta comisión, el documento que acredite su manifestación de interés presentado ante el Consejo de la Carrera Judicial, órgano que deberá observar el cumplimiento de lo que establece el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial.
- Los aspirantes de la Carrera Judicial que no cumplan con presentar el documento que acredite la aludida manifestación de interés en el expediente de mérito, podrán participar únicamente como abogados en el ejercicio profesional.
- Consulte toda la información y descargue el formulario, así como la guía para elaborar el curriculum vitae en el sitio: [comision-csj.umes.edu.gt](http://comision-csj.umes.edu.gt).

Número de folios presentados:

110

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en caso contrario será causa de exclusión de la Postulación. Autorizo desde ya a la Comisión para que lleve a cabo la verificación de cualquiera de ellos y su publicación por cualquier medio.

FIRMA DEL POSTULANTE

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Guatemala, 09 de diciembre de 2019.

Dr. Félix Javier Serrano Ursúa  
Presidente

Lic.Mario Raúl García Morales  
Secretario



## Registro Civil de las Personas Certificado de Nacimiento

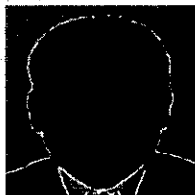
El Infrascrito Registrador Civil de las Personas del Registro Nacional de las Personas del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala,

### CERTIFICA

que con fecha nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, en la partida 5462, folio 30 del libro 357-1, del Registro Civil del Municipio de GUATEMALA, Departamento de GUATEMALA, quedó inscrito el Nacimiento de:

- Héctor Ricardo , Echeverría Méndez -

Nombres y Apellidos del Inscrito



### Datos del Inscrito

1605795890101

Documento de Identificación

Diez de agosto de mil novecientos sesenta y nueve

Fecha de Nacimiento

Guatemala, Guatemala, Guatemala

Lugar de Nacimiento

Masculino

Género

### Datos de la Madre

- Blanca Floridalma , Méndez Rodríguez -

Nombres y Apellidos de la Madre

Fecha de Nacimiento

Joyabaj, Quiché

Lugar de Origen

Fotografía  
no  
disponible

Fotografía  
no  
disponible

### Datos del Padre

- Luis Antonio , Echeverría Gómez -

Nombres y Apellidos del Padre

Fecha de Nacimiento

esta ciudad

Lugar de Origen



### Observaciones

"A" El inscrito contrajo matrimonio con Elida Yanina Orantes Solis, el 25 de agosto de 1989. Ver Tomo 269 folio 251 Mat. Not. Guatemala 12 de septiembre de 1989.

"B" Según sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Familia del Departamento de Guatemala del dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y tres declaró el divorcio entres los señores Hector Ricardo Echeverría Mendez y Elida Yanina Orantes Solis, ver folio 152 y 153 tomo 170-A de documentos. Guatemala 13 Mayo de 1996.

"C" El inscrito contrajo matrimonio con Hilda Marina Girón Pineda, el 22 de julio de 1,996. Ver folio 173 Pda. 176 L. 236 de Mat. Not. Guate. 17 de marzo del 2,000.

El Infrascrito Registrador Civil de las Personas del municipio Guatemala, departamento de Guatemala, hace constar que de conformidad con la información proporcionada por la Dirección de Procesos, el inscrito en la partida de fondo se enroló con fecha 26/10/2010, por lo que corresponde el Código Único de Identificación - CUI - 1605795890101

Extendida el día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve por el Registrador Civil de las Personas, la cual es auténtica por ser una copia fiel de su original.

-----ULTIMA LÍNEA-----

Doy fe



Licda. Jessica Anaí , Castañeda Salazar

REGISTRADOR CIVIL DE LAS PERSONAS EN FUNCIONES



Este certificado fue impreso en papel bond el día diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve y tiene vigencia de seis meses o tres verificaciones del código QR. Para los usos que al interesado convenga deberá de verificar su autenticidad a través del link: <https://www.renap.gob.gt/verificacion-de-certificado> o bien llamando al 1516.



U

LUGAR DE NACIMIENTO:  
GUATEMALA  
GUATEMALA  
GUATEMALA

VECINDAD:  
GUATEMALA  
GUATEMALA

NÚMERO DE CÉDULA  
A-1781530

NÚMERO DE SERIE  
0080605229678

RESIDENCIA EN  
GUATEMALA  
GUATEMALA

ESTADO CIVIL:  
CASADO

FECHA DE VENCIMIENTO:  
01NOV2020

NACIONALIDAD:  
L-38741E-30-P-5462

IDGTM16057958980101C0101<<<001  
6908108M2011013GTM<<1031010195  
ECHEVERRIA<<HECTOR<<<<<<<<<<<

En la ciudad de Guatemala, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, como Notario, DOY FE: Que la presente fotocopia impresa en el anverso es **AUTENTICA**, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia, directamente del documento original y que reproduce el documento personal de identificación - DPI- con código único de identificación -CUI- mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), emitido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, a nombre de **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**. En fe de lo cual firmo y sello la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

*Gilberto Gómez Morán*  
ABOGADO Y NOTARIO





4



Nº 263804

*Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala*

**CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO**

El infrascrito secretario (a) de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, HACE  
CONSTAR: Que en los registros de este Colegio Profesional aparece inscrito (a) el (la) Licenciado (a):

HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ

Colegiado (a): 8149

Con el Título de: ABOGADO Y NOTARIO

desde 14/12/1999 Con cuotas canceladas al 31/12/2020 con Calidad  
de Colegiado ACTIVO al 31/03/2021

Revisó:

Confrontó:

**Válido en original**

Gerente



Secretario (a) de la Junta Directiva

Lic. Gerardo Alejandro Castillo Oajar

26/12/2019

Fecha:



5

## *Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala*

El Infrascrito Prosecretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,

### **HACE CONSTAR:**

Que el Abogado y Notario **HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ**, colegiado seis mil ciento cuarenta y nueve (6149), tiene registrada fecha de graduación: **veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve** y fecha de colegiación: **catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve**. Tiene veinte años de colegiado. A solicitud del Licenciado HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, el dieciseis de diciembre de dos mil diecinueve.



**Lic. Ricardo Anibal Masaya Gamboa**  
Prosecretario Junta Directiva

Elaborado por: Israel Toc





*Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala*


07782

**EL INFRASCRITO VOCAL TERCERO DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL  
COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA: -----**

**----- HACE CONSTAR: -----**

Que de conformidad con los registros existentes, lo cual está sujeto a la confrontación con el sistema matriz, a la fecha de emisión de la presente constancia, al Abogado y Notario **HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ (Colegiado 6,149)**, no le aparece sanción emitida en su contra por este órgano colegiado.-----

Y para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente constancia el diez de diciembre del año dos mil diecinueve.-----

  
**LIC. MIGUEL ANGEL PORTILLO ORELLANA**  
**VOCAL TERCERO**  
**TRIBUNAL DE HONOR**

Confrontó y revisó la base:

  
**Lic. Hernan Soberanis Gatica**  
**Secretario Ejecutivo**





**GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**  
**UNIDAD DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**  
**DEL ORGANISMO JUDICIAL**

No. 1707-2019 URD-NMCA-iycdec

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO JUDICIAL,


**HACE CONSTAR :**

Que tuvo a la vista el Sistema Informático de denuncias de la Unidad de Régimen Disciplinario de la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial, **a partir del año dos mil, cuando fue creada la Unidad, a la fecha, el (la) solicitante HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ, (código 15018), no reporta expedientes disciplinarios tramitados en su contra.**

Y a solicitud del (la) interesado(a) y para los usos legales que al mismo convengan, se extiende la presente constancia en la ciudad de Guatemala, el doce de diciembre de dos mil diecinueve. **TARIFA: Q.50.00 Artículo 1 literal b) del Acuerdo 48-2015 de la Corte Suprema de Justicia. Recibo No. 2946190.**

  
Irma Yolanda Cabrera de Cazali  
Secretaria, Unidad de Régimen Disciplinario

Vo. Bo.

  
Licda. Nydia Maria Corzantes Arévalo  
Coordinadora III, Unidad de Régimen Disciplinario







GUATEMALA, C.A.

OFICIO No. \_\_\_\_\_  
REFERENCIA No. \_\_\_\_\_

**LA SECRETARIA DE LA  
JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL  
CERTIFICA:**

*Que según la base de datos de la Junta de Disciplina Judicial, órgano disciplinario que inició funciones el veintiuno de agosto del año dos mil, a la presente fecha, el Abogado **HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ; NO TIENE NINGUNA SANCION DISCIPLINARIA VIGENTE**, en la Junta de Disciplina Judicial.*-----

*La presente se extiende de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial, Artículo 33,..." En las certificaciones que extiendan los órganos disciplinarios o el Consejo de la Carrera Judicial no se harán constar aquellas quejas declaradas con lugar después de cinco años de haber sido ejecutoriada la sanción...; Artículo 59 "...La Junta podrá brindar los informes que le sean requeridos con relación a determinado funcionario judicial, excluyendo las denuncias que hayan sido desestimadas o declaradas sin lugar, por no constituir antecedente."; Artículo 59 "...La Junta podrá brindar los informes que le sean requeridos con relación a determinado funcionario judicial, excluyendo las denuncias que hayan sido desestimadas o declaradas sin lugar, por no constituir antecedente."; Artículo 66, "Certificaciones. La Junta de Disciplina Judicial podrá extender las certificaciones que le requieran..."*-----

*A solicitud del interesado, para los usos legales que convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.*-----

*Sandra Eleonora González Cuevas*  
**Secretaria**



*Vb. Bo. Gabriel Estuardo García Luna*  
**Presidente, Junta de Disciplina Judicial**



9

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE CARRERA DE LA FACULTAD DE  
CIENCIAS JURÍDICAS Y DE LA JUSTICIA DE LA UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA. -----

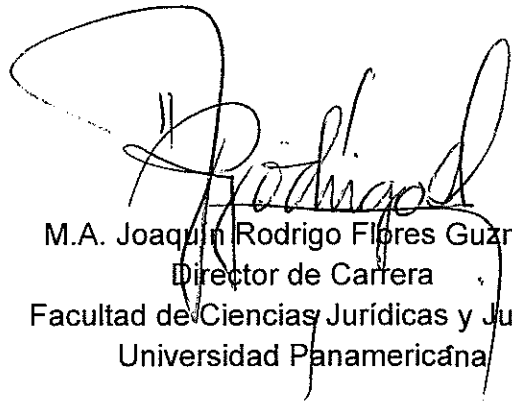
### HACE CONSTAR

Que el Licenciado HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ, quien se identifica con Documento Personal de Identificación número 1605 79589 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), por prestar sus servicios profesionales en esta Casa de Estudios Superiores, no se encuentra sujeto a régimen disciplinario alguno.

Y para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente;



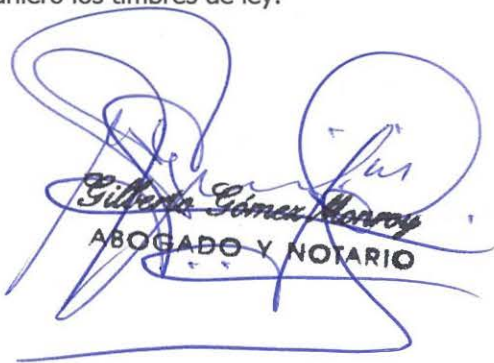
M.A. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán  
Director de Carrera  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia  
Universidad Panamericana





En la ciudad de Guatemala, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, como Notario, DOY FE: Que la presente fotocopia impresa en el anverso es **AUTENTICA**, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia, directamente del documento original y que reproduce: Constancia extendida por el Infrascrito Director de Carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia de la Universidad Panamericana, de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, a favor de **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, quien se identifica con el documento personal de identificación número mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), haciendo constar que dicha persona presta sus servicios profesionales en esa Casa de Estudios Superiores y no se encuentra sujeto a régimen disciplinario alguno. En fe de lo cual firmo y sello la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

  
Gilberto Gómez Morán  
ABOGADO Y NOTARIO



10  
8

*Secretaría de la Corte Suprema de Justicia*  
*Guatemala, C.A.*

**LA INFRASCRIPTA SECRETARIA  
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**HACE CONSTAR:**

Que de conformidad con los registros del Sistema de Recursos Humanos, el abogado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, desempeñó un periodo constitucional completo dos mil nueve guion dos mil catorce (2009-2014):

Designación a partir del 14/10/2009 al 24/11/2014, como **Magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente**, según Acuerdo número 27-2009 de la Corte Suprema de Justicia de fecha trece de octubre de dos mil nueve.

Y para los usos legales que al abogado Héctor Ricardo Echeverría Méndez convenga, se extiende la presente constancia en una hoja de papel membretado, en la ciudad de Guatemala, el doce de diciembre de dos mil diecinueve.



  
**M.A. DORA LIZETT NÁJERA FLORES**  
**Secretaria de la Corte Suprema de Justicia**

11  
18

*única hoja*

*Gilberto Gómez Monroy*  
ABOGADO Y NOTARIO

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, siendo las **siete** horas, Yo, **GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ MONROY**, Notario, colegiado activo número siete mil setecientos treinta y uno (7731), me encuentro constituido en la oficina profesional ubicada en la quince (15) calle "A", nueve - cincuenta y siete (9-57), zona uno (1) de esta ciudad capital, a requerimiento del Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación -DPI- con código único de identificación -CUI- mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, me asegura ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere mis servicios notariales para que mediante la presente acta notarial haga constar su **DECLARACIÓN JURADA** la cual hace de conformidad con los puntos siguientes. **PRIMERO: (DEL JURAMENTO)**. Como notario procedo a tomar juramento al Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, a quien le solicito expresarse con la verdad, advirtiéndole sobre las penas relativas al delito de perjurio, a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta quedar enterado, por lo que procedo a dirigirle la siguiente fórmula legal: "Promete usted bajo juramento solemne decir la verdad en todas las declaraciones que realice en la presente acta notarial", a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta: "Si prometo decir la verdad". **SEGUNDO: (DE LA DECLARACIÓN JURADA)**. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, declara bajo juramento solemne que ha ejercido la profesión de Abogado por más de diez años. **TERCERO: (DE LA ACEPTACIÓN)**. Quedando enterado por advertencia que le realiza el Notario autorizante de las responsabilidades en que incurre si lo manifestado no fuere cierto, manifiesta el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, que acepta íntegramente el contenido





*[Faint, illegible text]*

de la presente acta notarial. Habiendo concluido el objeto para lo cual fui requerido se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las **siete** horas con **veinte** minutos, la cual queda comprendida en una hoja de papel bond tamaño oficio impresa en ambos lados, a la que se le adhieren los timbres de ley; y procedo a dar lectura íntegra de la presente acta al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma con el Notario que da fe.

Firma: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**ANTE MI:**

*[Handwritten signature]*  
**Gilberto Gomez Manroy**  
**ABOGADO Y NOTARIO**

12  
P

BOLETA No. **6982479**

FORMA MG-DGPNC-SCC-S-V  
SERIE B

DIRECCION GENERAL  
POLICIA NACIONAL CIVIL

Comprobante No. **39317050 - 6982479**

CERTIFICA

Que de conformidad a los registros de Archivos de la Policía Nacional Civil de Guatemala:

**Héctor Ricardo Echeverría Méndez**

Código Verificación

**19cc79e0**

<http://antercedentes.pnc.gob.gt>

Numero de Documento de Identificación

**1605795890101**

**NO**

TIENE ANTECEDENTES POLICIALES

Y para los usos legales que al interesado (a) convengan, se extiende la presente certificación, en la ciudad de Guatemala, el  
**17 de Diciembre del 2019**

Valido por seis meses

Fecha/Hora Recepción: **2019-12-17 07:58:52-06**  
Fecha /Hora Emisión: **2019-12-17 07:58:52-06**



ana.lopez  
Área Metropolitana



AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. B181475 CLAS. 1106-20003-S-15-2009 DEL 16-11-2009



ORGANISMO JUDICIAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
GUATEMALA, C. A.

Boleta Electrónica No.  
D2019-1087525

13

EL INFRASCRITO TITULAR DE LA UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES HACE CONSTAR QUE  
CONFORME LOS REGISTROS RESPECTIVOS A:



Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido
HÉCTOR RICARDO	ECHEVERRÍA	MÉNDEZ

QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO SIGUIENTE:

DPI NUMERO 1605 79589 0101

\*\*\* NO LE APARECEN ANTECEDENTES PENALES \*\*\*

Fecha de Emisión: 17/12/2019  
Vigencia: Válida hasta 16/06/2020  
Fecha de Nacimiento: 10/08/1969  
Lugar de Nacimiento: GUATEMALA, GUATEMALA

DIRECTOR

Unidad de Antecedentes Penales  
cvtgro0kWKk2ZKaXSz/iQ==

Operador: SMRIVERA  
D566ECE922C8F2E00D47256A656CF27C

Llave: 20191201041040

Los datos de esta boleta deben ser verificados en:  
<https://cape.oj.gob.gt>

Solicitud No.S2019-1449998  
Solicitante: HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ



Este documento tiene un límite de 4  
validaciones.

Acuerdo de la Corte Suprema de  
Justicia. No. 27-2018

Guatemala, 17 de diciembre del 2019

\*\*\*\*\* Ultima línea \*\*\*\*\*

Digitally signed by  
ORGANISMO  
JUDICIAL  
Date: 2019.12.17  
08:09:48 CST  
Reason: Constancia  
de Carencia de  
Antecedentes  
Penales  
Electrónicos (CAPE)  
Location:  
<https://www.cape.oj.gob.gt>





14

Única hija

*Gilberto Gómez Monroy*  
ABOGADO Y NOTARIO



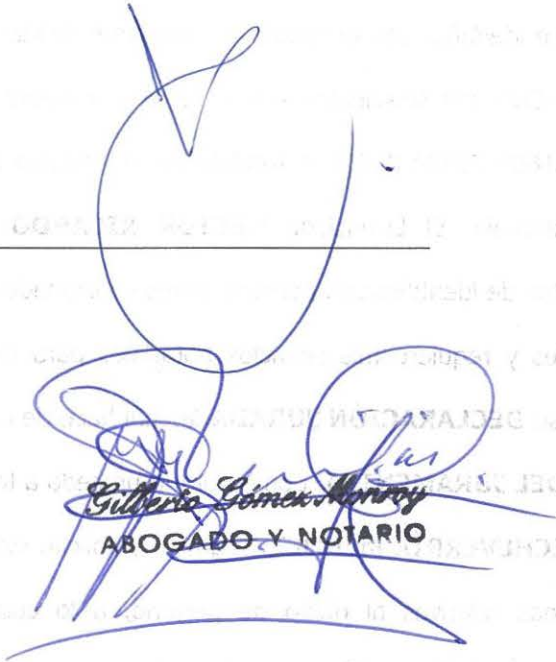
En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, siendo las **ocho** horas, Yo, **GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ MONROY**, Notario, colegiado activo número siete mil setecientos treinta y uno (7731), me encuentro constituido en la oficina profesional ubicada en la quince (15) calle "A", nueve - cincuenta y siete (9-57), zona uno (1) de esta ciudad capital, a requerimiento del Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación -DPI- con código único de identificación -CUI- mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, me asegura ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere mis servicios notariales para que mediante la presente acta notarial haga constar su **DECLARACIÓN JURADA** la cual hace de conformidad con los puntos siguientes. **PRIMERO: (DEL JURAMENTO)**. Como notario procedo a tomar juramento al Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, a quien le solicito expresarse con la verdad, advirtiéndole sobre las penas relativas al delito de perjurio, a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta quedar enterado, por lo que procedo a dirigirle la siguiente fórmula legal: "Promete usted bajo juramento solemne decir la verdad en todas las declaraciones que realice en la presente acta notarial", a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta: "Si prometo decir la verdad". **SEGUNDO: (DE LA DECLARACIÓN JURADA)**. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, declara bajo juramento solemne que está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. **TERCERO: (DE LA ACEPTACIÓN)**. Quedando enterado por advertencia que le realiza el Notario autorizante de las responsabilidades en que incurre si lo manifestado no fuere cierto, manifiesta el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, que acepta íntegramente el contenido

Y...  
O...

de la presente acta notarial. Habiendo concluido el objeto para lo cual fui requerido se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las **ocho** horas con **veinte** minutos, la cual queda comprendida en una hoja de papel bond tamaño oficio impresa en ambos lados, a la que se le adhieren los timbres de ley; y procedo a dar lectura íntegra de la presente acta al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma con el Notario que da fe.

Firma:

ANTE MI:



Guillermo Gómez Morán  
ABOGADO Y NOTARIO



15

única hoja

*Gilberto Gómez Monroy*  
ABOGADO Y NOTARIO

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, siendo las **nueve** horas, Yo, **GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ MONROY**, Notario, colegiado activo número **siete mil setecientos treinta y uno (7731)**, me encuentro constituido en la oficina profesional ubicada en la quince (15) calle "A", nueve - cincuenta y siete (9-57), zona uno (1) de esta ciudad capital, a requerimiento del Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación -DPI- con código único de identificación -CUI- mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, me asegura ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere mis servicios notariales para que mediante la presente acta notarial haga constar su **DECLARACIÓN JURADA** la cual hace de conformidad con los puntos siguientes. **PRIMERO: (DEL JURAMENTO)**. Como notario procedo a tomar juramento al Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, a quien le solicito expresarse con la verdad, advirtiéndole sobre las penas relativas al delito de perjurio, a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta quedar enterado, por lo que procedo a dirigirle la siguiente fórmula legal: "Promete usted bajo juramento solemne decir la verdad en todas las declaraciones que realice en la presente acta notarial", a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta: "Si prometo decir la verdad". **SEGUNDO: (DE LA DECLARACIÓN JURADA)**. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, declara bajo juramento solemne que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos. **TERCERO: (DE LA ACEPTACIÓN)**. Quedando enterado por advertencia que le realiza el Notario autorizante de las responsabilidades en que incurre si lo manifestado no fuere cierto, manifiesta el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, que acepta íntegramente el contenido





*Roberto Gómez Marín*  
ABOGADO Y NOTARIO

de la presente acta notarial. Habiendo concluido el objeto para lo cual fui requerido se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las **nueve** horas con **veinte** minutos, la cual queda comprendida en una hoja de papel bond tamaño oficio impresa en ambos lados, a la que se le adhieren los timbres de ley; y procedo a dar lectura íntegra de la presente acta al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma con el Notario que da fe.

Firma: \_\_\_\_\_

**ANTE MI:**

*Roberto Gómez Marín*  
ABOGADO Y NOTARIO

16.

única hoja.

*Gilberto Gómez Monroy*  
**Gilberto Gómez Monroy**  
**ABOGADO Y NOTARIO**

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, siendo las **diez** horas, Yo, **GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ MONROY**, Notario, colegiado activo número siete mil setecientos treinta y uno (7731), me encuentro constituido en la oficina profesional ubicada en la quince (15) calle "A", nueve - cincuenta y siete (9-57), zona uno (1) de esta ciudad capital, a requerimiento del Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación -DPI- con código único de identificación -CUI- mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, me asegura ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere mis servicios notariales para que mediante la presente acta notarial haga constar su **DECLARACIÓN JURADA** la cual hace de conformidad con los puntos siguientes. **PRIMERO: (DEL JURAMENTO)**. Como notario procedo a tomar juramento al Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, a quien le solicito expresarse con la verdad, advirtiéndole sobre las penas relativas al delito de perjurio, a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta quedar enterado, por lo que procedo a dirigirle la siguiente fórmula legal: "Promete usted bajo juramento solemne decir la verdad en todas las declaraciones que realice en la presente acta notarial", a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta: "Si prometo decir la verdad". **SEGUNDO: (DE LA DECLARACIÓN JURADA)**. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, declara bajo juramento solemne no se encuentra comprendido en los casos de impedimentos establecidos en el artículo dieciséis de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. **TERCERO: (DE LA ACEPTACIÓN)**. Quedando enterado por advertencia que le realiza el Notario autorizante de las responsabilidades en que incurre si lo manifestado no fuere cierto, manifiesta el Licenciado

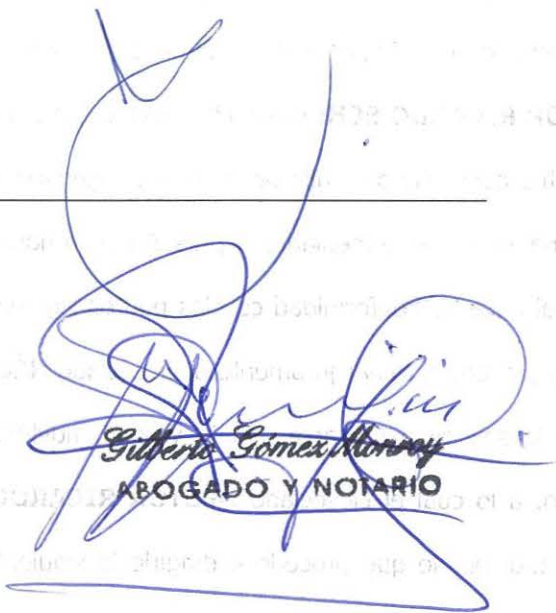


Notario  
CANTON - OTAVO

**HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, que acepta íntegramente el contenido de la presente acta notarial. Habiendo concluido el objeto para lo cual fui requerido se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las **diez** horas con **veinte** minutos, la cual queda comprendida en una hoja de papel bond tamaño oficio impresa en ambos lados, a la que se le adhieren los timbres de ley; y procedo a dar lectura íntegra de la presente acta al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma con el Notario que da fe.

Firma: \_\_\_\_\_

ANTE MI:

  
**Guillermo Gómez Montoya**  
ABOGADO Y NOTARIO



17

única hoja

*Gilberto Gómez Monroy*  
ABOGADO Y NOTARIO

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, siendo las **once** horas, Yo, **GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ MONROY**, Notario, colegiado activo número **siete mil setecientos treinta y uno (7731)**, me encuentro constituido en la oficina profesional ubicada en la quince (15) calle "A", nueve - cincuenta y siete (9-57), zona uno (1) de esta ciudad capital, a requerimiento del Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación -DPI- con código único de identificación -CUI- mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, me asegura ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere mis servicios notariales para que mediante la presente acta notarial haga constar su **DECLARACIÓN JURADA** la cual hace de conformidad con los puntos siguientes. **PRIMERO: (DEL JURAMENTO)**. Como notario procedo a tomar juramento al Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, a quien le solicito expresarse con la verdad, advirtiéndole sobre las penas relativas al delito de perjurio, a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta quedar enterado, por lo que procedo a dirigirle la siguiente fórmula legal: "Promete usted bajo juramento solemne decir la verdad en todas las declaraciones que realice en la presente acta notarial", a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta: "Si prometo decir la verdad". **SEGUNDO: (DE LA DECLARACIÓN JURADA)**. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, declara bajo juramento solemne lo siguiente: **a)** Que no tiene parentesco por afinidad o consanguinidad dentro de los grados de ley con ningún miembro de la Comisión de Postulación para la Selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación); **b)** Que no es ministro religioso; **c)** Que no ocupa cargos directivos

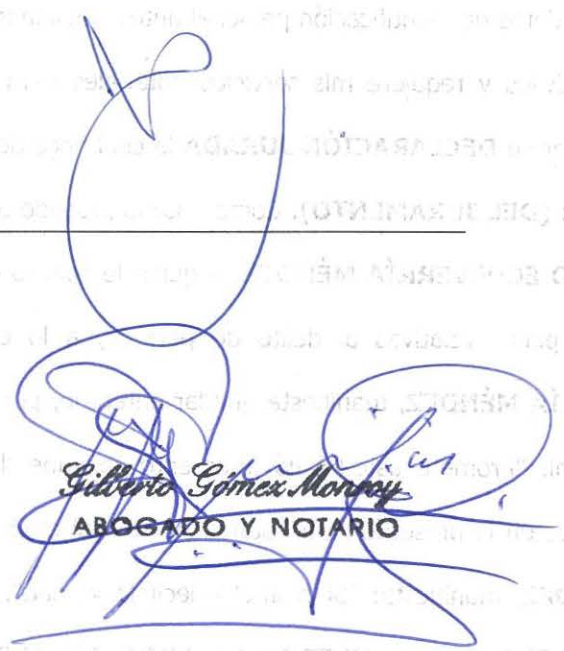


ABOGADO Y NOTARIO

en partidos políticos o de representación en asociaciones sindicales. **TERCERO: (DE LA ACEPTACIÓN).** Quedando enterado por advertencia que le realiza el Notario autorizante de las responsabilidades en que incurre si lo manifestado no fuere cierto, manifiesta el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, que acepta íntegramente el contenido de la presente acta notarial. Habiendo concluido el objeto para lo cual fui requerido se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las **once** horas con **veinte** minutos, la cual queda comprendida en una hoja de papel bond tamaño oficio impresa en ambos lados, a la que se le adhieren los timbres de ley; y procedo a dar lectura íntegra de la presente acta al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma con el Notario que da fe.

Firma:

ANTE MI:

  
**ABOGADO Y NOTARIO**



CGC



Contraloría General de Cuentas  
GUATEMALA, C.A.

No. Gestion: 421602

Correlativo: 239780

Correlativo:

No. **239780**

## CONSTANCIA TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE RECLAMACIÓN DE CARGOS

NIT:

684850-8

NOMBRE:

HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ

DPI:

1605 79589 0101

GUATEMALA

Extendida en

La Contraloría General de Cuentas, luego de haber realizado las consultas correspondientes al Sistema Integrado de Información; el cual refleja las acciones legales y administrativas derivado de los distintos Informes de Auditoría, Probidad, Registro de Información Gubernamental, Jurídico y Secretaría General, y en atención a lo establecido en el Artículo 30 del Decreto número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. **HACE CONSTAR:** que el titular del presente documento a la fecha no tiene reclamaciones o juicios pendientes, como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente.

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Guatemala,

a los 11 días del mes de Diciembre de 2019

Base Legal: "La constancia o finiquito extendido no exime de responsabilidad a la persona a cuyo favor se extendió, si con posterioridad se descubre que existió responsabilidad administrativa, civil y/o penal en el ejercicio de su función pública, en cuyo caso el mismo quedara sin efecto."; de conformidad con la literal c), numeral uno, segundo párrafo, del artículo 33 del Acuerdo Gubernativo número 613-2005 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Licda. Claudia Cáceres Arraza  
SubSecretaría General  
Contraloría General de Cuentas



89940-ECBGAC--411806

Control Electrónico

Lic. Mario Francisco Xocoy Buch  
Subcontralor de Probidad  
Contraloría General de Cuentas







19  
X

## *Tribunal Supremo Electoral*

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL REGISTRO DE  
CIUDADANOS

### CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el Archivo Maestro de Ciudadanos Empadronados donde aparece la Inscripción **No. 2923618** a nombre de **HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ** con documento personal de identificación número **1605795890101**, cuya situación es **VIGENTE Y QUE A LA FECHA DE ESTA CERTIFICACION, NO SE ENCUENTRA AFILIADO(A) A PARTIDO POLITICO ALGUNO.**

A solicitud del (a) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, el **diez de diciembre de dos mil diecinueve.**



Lic. Omar Gerreda Franco  
Secretario  
Registro de Ciudadanos



gf

COD: 14640

Fecha: 10/12/2019 Hora: 07:10:36 a. m.



20

## *Tribunal Supremo Electoral*

### EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL REGISTRO DE CIUDADANOS

#### CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el Archivo Maestro de Ciudadanos Empadronados donde aparece la Inscripción **No. 2923618** a nombre de **HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ** con documento personal de identificación **1605795890101** cuya situación es **VIGENTE** y en pleno goce de sus derechos **POLITICOS**.

A solicitud del (a) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, el **diez de diciembre de dos mil diecinueve**.

  
Lic. Omar Gereda Franco  
Secretario  
Registro de Ciudadanos



21

Mario Rubén Pérez Aguirre  
ABOGADO Y NOTARIO  
AC-0308994  
Q. 100.000 QUETZALES  
TIMBRE NOTARIAL

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, siendo las **doce** horas, Yo, **MARIO RUBÉN PÉREZ AGUIRRE**, Notario, colegiado activo número dieciséis mil ochocientos quince (16815), me encuentro constituido en la oficina profesional ubicada en la quince (15) calle "A", nueve – cincuenta y siete (9-57), zona uno (1) de esta ciudad capital, a requerimiento del Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación -DPI- con código único de identificación -CUI- mil seiscientos cinco, setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, cero ciento uno (1605 79589 0101), extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, me asegura ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere mis servicios notariales para que mediante la presente acta notarial haga constar su **DECLARACIÓN JURADA** la cual hace de conformidad con los puntos siguientes. **PRIMERO: (DEL JURAMENTO)**. Como notario procedo a tomar juramento al Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, a quien le solicito expresarse con la verdad, advirtiéndole sobre las penas relativas al delito de perjurio, a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta quedar enterado, por lo que procedo a dirigirle la siguiente fórmula legal: "Promete usted bajo juramento solemne decir la verdad en todas las declaraciones que realice en la presente acta notarial", a lo cual el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, manifiesta: "Si prometo decir la verdad". **SEGUNDO: (DE LA DECLARACIÓN JURADA)**. El Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, declara bajo juramento solemne que no está inhabilitado en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. **TERCERO: (DE LA ACEPTACIÓN)**. Quedando enterado por advertencia que le realiza el Notario autorizante de las responsabilidades en que incurre si lo manifestado no fuere cierto, manifiesta el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, que acepta íntegramente el contenido de la

única hoja



presente acta notarial. Habiendo concluido el objeto para lo cual fui requerido se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las **doce** horas con **veinte** minutos, la cual queda comprendida en una hoja de papel bond tamaño oficio impresa en ambos lados, a la que se le adhieren los timbres de ley; y procedo a dar lectura íntegra de la presente acta al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma con el Notario que da fe.

Firma: \_\_\_\_\_

**ANTE MI:**



**Mario Rubén Pérez Aguirre**  
**ABOGADO Y NOTARIO**

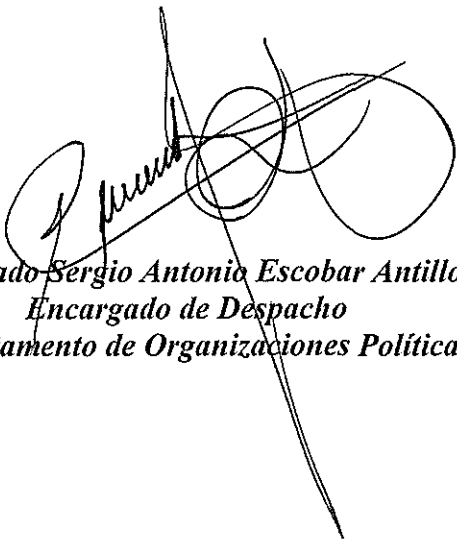


# *Tribunal Supremo Electoral*

u  
f

*El infrascrito hace constar que **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ**, con Documento Personal de Identificación **DPI 1605795890101** y número de empadronamiento **2923618** **NO APARECE INSCRITO(A) COMO DIRECTIVO(A), MANDATARIO(A) O REPRESENTANTE LEGAL DE PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, U ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN FORMACIÓN.***

*A solicitud y para los usos legales que le convengan, extendiendo la presenta en la ciudad de Guatemala, a los once días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve*

  
**Licenciado Sergio Antonio Escobar Antillón**  
**Encargado de Despacho**  
**Departamento de Organizaciones Políticas**





No. 1721-2019

23  
J

## CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD REPUBLICA DE GUATEMALA

EL INFRAESCRITO TITULAR DE LA UNIDAD DE COBROS DE LA DIRECCION  
FINANCIERA, HACE CONSTAR QUE:

**HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ**

SE ENCUENTRA SOLVENTE DE MULTAS IMPUESTAS POR ESTA CORTE, A LA PRESENTE  
FECHA, SEGÚN EL REGISTRO EN EL SISTEMA, SALVO AQUELLAS MULTAS QUE ESTAN EN  
TRAMITE Y QUE AUN NO HAN SIDO NOTIFICADAS POR SECRETARIA GENERAL.

## SOLVENCIA

GUATEMALA, 17 DE DICIEMBRE DE 2019

  
Licda. Diana Lissette de León Rodas  
Jefe de Cobros de Multas  
Dirección Financiera  
Corte de Constitucionalidad



24  
P

**CURRICULUM VITAE**

**1. DATOS PERSONALES:**

<b>Nombres y apellidos completos:</b>	Héctor Ricardo Echeverría Méndez
<b>Edad:</b>	50 años
<b>Sexo:</b>	Masculino
<b>Profesión:</b>	Abogado y Notario
<b>No. de Colegiado:</b>	6149
<b>Años de ejercicio profesional:</b>	20 años
<b>Documento de Identificación (DPI):</b>	1605 79589 0101
<b>Nacionalidad:</b>	Guatemalteco
<b>Teléfonos para comunicación:</b>	54177917/24455886
<b>Correo electrónico:</b>	hecheverria1@gmail.com
<b>Lugar y fecha de nacimiento:</b>	Guatemala, 10 de agosto de 1969

## 2. MÉRITOS ACADÉMICOS:

- **Títulos académicos:**

AÑO:	CONTENIDO:
	Doctorado en Derecho ( <b>Pensum cerrado</b> ) Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Escuela de Estudios de Post Grado

AÑO:	CONTENIDO:
2013	Maestría en Gestión Jurisdiccional Universidad San Pablo de Guatemala y Universidad Rural de Guatemala Grado Académico: Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional
2011	Maestría en Derecho Penal Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Escuela de Estudios de Post Grado Grado Académico: Maestro en Derecho Penal

AÑO:	CONTENIDO:
1999	Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Títulos de Abogado y Notario

- **Docencia universitaria:**

a. Universidad Panamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia del año 2003 al 2019:

NIVEL ACADÉMICO:	CURSO IMPARTIDO
Maestría en Derecho Procesal	Derecho Procesal Penal Profesor Titular
Programa de Actualización y Cierre Académico (ACA)	Clínicas de Derecho Procesal Penal Profesor Titular

Licenciatura	Derecho Procesal Penal I Profesor Titular
Licenciatura	Derecho Procesal Penal II Profesor Titular
Licenciatura	Derecho Procesal Constitucional Profesor Titular
Programa de Actualización y Cierre Académico (ACA)	Derecho Penal Profesor Titular
Maestría en Derecho Procesal	Derecho Probatorio Penal Profesor Titular
Diplomado de Derechos Humanos	Instituciones de Derechos Humanos en Guatemala Profesor Titular
Licenciatura	Clínica de Derecho Procesal Penal Profesor Titular
Programa de Actualización y Cierre Académico (ACA)	Derecho Procesal Penal Profesor Titular
Licenciatura	Clínica de Derecho Procesal Penal Profesor Titular
Licenciatura (Tutorial)	Derecho Procesal Penal I Profesor Titular
Maestría en Derecho Procesal	Oratoria Forense y Argumentación Jurídica Profesor Titular
Programa de Equivalencia Integradas (PEI)	Derecho Penal Profesor Titular
Programa de Equivalencia Integradas (PEI)	Derecho Procesal Penal Profesor Titular Segundo Semestre 2019

**b. Universidad de Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del 2000 a 2004:**

NIVEL ACADÉMICO	CURSO IMPARTIDO
Licenciatura	Lógica Jurídica Profesor Titular
Licenciatura	Teoría General del Proceso Profesor Titular
Licenciatura	Derecho Mercantil III Profesor Titular
Licenciatura	Teoría General del Estado Profesor Titular
Licenciatura	Derecho Civil VI Profesor Titular
Licenciatura	Derecho Penal II Profesor Titular



27

*[Handwritten signature]*

Licenciatura	Derecho Constitucional Guatemalteco Profesor Titular
Licenciatura	Derecho Procesal Penal I Profesor Titular
Licenciatura	Derecho Procesal Penal II Profesor Titular

• **Producción doctrinaria:**

PUBLICACIÓN:	CONTENIDO:
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia. Universidad Panamericana. Advocatus Ius	Junio 2014, número 2, título artículo “DERECHO PENAL, SOCIEDAD E INDIVIDUO”. Página 29 a la 36.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia. Universidad Panamericana. Advocatus Ius	Diciembre 2013, número 1, título artículo “ESTADO Y DERECHO PENAL”. Página 17 a la 32.
Revista Jurídica “Tercera Instancia”	Octubre 2006, número 3, título artículo “TRATADO VERSUS CONVENCIÓN”. Página 62 a la 68.
Revista Jurídica “Tercera Instancia”	Julio 2006, número 2, título artículo “EFICACIA DEL AMPARO EN LOS DERECHOS HUMANOS SOCIALES”. Página 76 a la 80.
Revista Jurídica “Tercera Instancia”	Enero 2006, número 1, título artículo “BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS EN EL CÓDIGO PENAL Y EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO”. Página 57 a la 63.

• **Participación en eventos académicos:**

AÑO:	CONTENIDO:
2016	Participación en el curso “Actualización sobre Derechos de la Niñez (Interés Superior del Niño)” Escuela de Estudios Judiciales Unidad de Capacitación Institucional Diploma
2016	Participación en el curso “La utilización de la prueba científica en la investigación del delito y en el proceso penal” Programa Regional para el Fortalecimiento de la Capacitación Forense en América Central Colegio de Abogados de los Estados Unidos ABAROLI

2015	Participación en el "Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias Interinstitucionales sobre Extinción de Dominio" Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto Italo-Latino Americano, Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y Embajada de Italia en Guatemala
2014	Participación en la conferencia sobre Lavado de Activos "Experiencias y Métodos en Investigación de Estructuras Dedicadas a este Tipo de Delitos" y Extinción de Dominio "Diseño de Investigaciones Especializadas en Identificar Patrimonios Ilícitos y Experiencias Exitosas" Escuela de Estudios Judiciales, Unidad de Capacitación Institucional
2013	Participación en capacitación "Teoría Jurídica del Delito y Aspectos de la Criminalidad Organizada y Narcotráfico" Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia Diploma

• **Méritos obtenidos:**

AÑO:	CONTENIDO:
2013	<b>Mención Honorífica Cum Laude por Defensa de Tesis</b> de graduación previo a obtener el Título de Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional
2013	Diploma otorgado por la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, por destacado aporte como Juez Docente dentro del XII Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Paz en la modalidad b-learning 2013.
2013	Diploma otorgado por la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, por destacado aporte como Juez Docente dentro del IX Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Primera Instancia en la modalidad b-learning 2012-2013.
2011	Diploma de reconocimiento otorgado por la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, por destacado aporte como Juez Docente dentro del XI Programa de Formación Inicial para Aspirantes de Jueces de Paz, en la Modalidad semipresencial b-learning 2011.
2011	Diploma de reconocimiento otorgado por el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones, por contribución en el Despacho Judicial y Defensa de la Independencia Judicial.

29  
P

2009	Diploma de reconocimiento otorgado por Universidad Panamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Justicia, por formación universitaria
2006	Diploma de reconocimiento otorgado por Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala.
2004	Diploma de reconocimiento otorgado por la Primera Promoción de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, Extensión Antigua Guatemala, Sección "A"

• **Cargos de dirección:**

**a. Organización de eventos académicos en el campo del Derecho:**

2000	Diploma de honor por meritoria labor en la <b>Organización</b> del Quinto Encuentro Social, Cultural y Deportivo de los Centros Universitarios de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
------	--

**b. Conferencias realizadas en el campo del Derecho:**

AÑO:	LUGAR:	TEMA:
2016	Universidad del Istmo y la Facultad de Derecho	Derecho Procesal Penal III
2013	Universidad del Istmo, Facultad de Derecho	"La Inconstitucionalidad en materia penal", impartida a los estudiantes del tercer año de la Licenciatura de Derecho Diploma
2009	Universidad del Istmo, Facultad de Derecho	"Apelación especial en materia penal", impartida a los estudiantes del curso de Derecho Procesal Penal III de la Licenciatura en Derecho Diploma



c. Participación en actividades académicas como moderador:

AÑO:	CONTENIDO:
2006	Participación como <b>Moderador</b> en los cursos “El proceso penal. Los Modelos procesales penales” y “La oralidad en el Proceso Penal”, de la X Escuela Judicial para Centroamérica y el Caribe “Juan Carlos I” 2006 en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y República Dominicana, El Consejo General del Poder Judicial de España y La Agencia Española de Cooperación Internacionales (AECI). Diploma

3. MÉRITOS PROFESIONALES:

• Experiencia Judicial:

LABOR DESEMPEÑADA	INSTITUCIÓN	DEL	A
Letrado	Corte Suprema de Justicia	16/01/2019	Vigente
Letrado	Corte Suprema de Justicia	16/01/2015	18/01/2018
Magistrado de Sala de Corte de Apelaciones	Organismo Judicial	14/10/2009	24/11/2014
Letrado	Corte Suprema de Justicia	02/11/2001	15/02/2008 RETIRO POR RENUNCIA
Asistente Profesional de Magistratura	Corte Suprema de Justicia	17/04/2000	15/05/2000
Oficial III	Corte Suprema de Justicia	11/08/1997	17/04/2000

• Experiencia Profesional:

LABOR DESEMPEÑADA	INSTITUCIÓN	DEL	A
Servicios Profesionales	Organismo Judicial	1/01/2001	31/10/2001

31  
P

• **Experiencia Administrativa:**

LABOR DESEMPEÑADA	INSTITUCIÓN	DEL	A
Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal	Instituto de la Defensa Pública Penal	2016	2019
Coordinación de la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público	Organismo Judicial	Enero 2018	Abril 2018
Subsecretario de la Presidencia del Organismo Judicial	Organismo Judicial	18/01/2018	15/10/2018

**4. MÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA:**

- **Vocación de servicio: Fortalecimiento de la administración de justicia:**

AÑO:	ORGANISMO JUDICIAL:
2014	Cumplir cinco años de labor en este organismo, contribuyendo al fortalecimiento de la administración de justicia de Guatemala.

- **Vocación de liderazgo: Participación en la promoción y defensa de los Derechos Humanos:**

32

AÑO:	UNIVERSIDAD:
2000	Organización y conducción del Foro: La pena de muerte y la legislación guatemalteca. Universidad Mariano Gálvez.

Guatemala, enero de 2020.

Héctor Ricardo Echeverría Méndez  
Abogado y Notario



33  
P



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA  
Edificio de Recursos Educativos - Ciudad Universitaria, Zona 12 - Guatemala, Centroamérica  
Horas de oficina: de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 - Teléfono 2418-8000



No. **13719**

**CICLO ACADÉMICO**

Constancia para inscripción de estudiantes que han cerrado currícula y están pendientes de exámenes Generales (Privado o Público, Ejercicio Profesional Supervisado EPS, o Examen Especial).

Estudiante: ECHEVERRIA MENDEZ, HECTOR RICARDO Carné No.: 100009133

Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Carrera: DOCTORADO EN DERECHO

La Secretaría de esta Unidad Académica autoriza la inscripción del estudiante nombrado quién cerró currícula con

fecha 30 de NOVIEMBRE de 2006

Realizo su Exámen General Privado (o Ejercicio Profesional Supervisado EPS) con fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ y pendiente el Exámen.

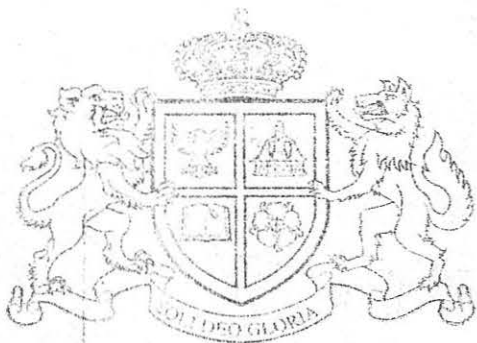


Guatemala, 02 de ABRIL de 2019

(SELLO)

DIRECTOR





UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

34

Universidad San Pablo de Guatemala

y

Universidad Rural de Guatemala

Por cuanto

Héctor Ricardo Echeverría Méndez

ha llenado los requisitos administrativos y académicos establecidos por la

Facultad de Derecho y Justicia

y

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

para optar al grado de

Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional

Le extienden el presente Diploma  
con sus correspondientes privilegios, derechos y obligaciones.

Dado en la ciudad de Guatemala, el veintiséis de abril de dos mil trece



UNIVERSIDAD  
SAN PABLO  
GUATEMALA  
RECTORIA

Rector  
Universidad San Pablo de Guatemala

UNIVERSIDAD  
SAN PABLO  
GUATEMALA  
Facultad de Derecho y Justicia  
DECANO

Decano

Secretario General

Rector  
Universidad Rural de Guatemala



Decano

Secretario General

ABOGADO Y NOTARIO



9424956  
2019

1 DE 6 HOJAS

Superintendencia de Administración Tributaria  
Gerencia Regional Central  
Agencia Tributaria Zona 9.

Nº del Solicitante: 084850-8 Impuesto Cancelado Q. 100.00  
Ejemplo: Agropecuaria SAT-100 4 No. 700758  
Fecha de Pago: 20-03-2014  
Fecha: 20-03-2014

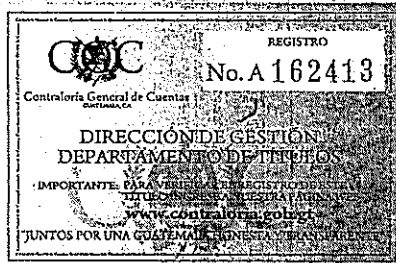
Firma y Sello del Técnico

Universidad San Pablo de Guatemala

REGISTRO ACADÉMICO

Inscrito bajo el No. -275-  
del Registro de Títulos respectivo.

Guatemala, 26 de 04 del año 2013



UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA  
TRAMITE AUTORIZADO

Carné número: 10-00-1068

Fecha: 26/04/2013

UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA  
CONSEJO ACADÉMICO

TÍTULO REGISTRADO NÚMERO:  
1947

Fecha: 26/04/2013

Serie B No. 001

Título # 1947

Control # 2658



# La Universidad de San Carlos de Guatemala



Por cuanto:

El Licenciado

**Hector Ricardo Echeverría Méndez**

Miembro de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

cumplió con los requisitos que las leyes universitarias establecen  
para obtener el grado académico de

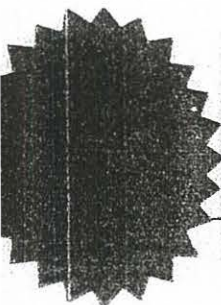
**Maestro en Derecho Penal**

Por tanto:

le extiende el presente Diploma y le concede el derecho de gozar de los  
honores y preeminencias debidos.



Dado en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de junio  
del año dos mil once.

0532 - 04 - 2011



  
Rector



  
Secretario de la Universidad  
  
Gilberto Gómez Morrey  
ABOGADO Y NOTARIO



2 DE 6 HOJAS

6806  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA  
TRÁMITE AUTORIZADO  
No. de Carné 100009133  
21 SEP 2011  
LICENCIADO RÓDOLFO ARMANDO GUZMÁN TIJOL  
SUBJEFE  
Razón: firma como Jefe en ausencia del titular

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA  
TÍTULO REGISTRADO  
No. de Registro: 142107  
25 OCT 2011  
LICENCIADO RÓDOLFO ARMANDO GUZMÁN TIJOL  
SUBJEFE

Superintendencia de Administración Tributaria  
Intendencia de Recaudación y Gestión  
Oficina/Agencia Tributaria: San Rafael  
Nº del Solicitante: 684950-8 Impuesto Cancelado Q. 100.00  
Banco: DE DESARROLLO RURAL SAT-100 4 No. 0385253  
Fecha de pago: 14-02-2012  
Fecha: 14-02-2012  
Sello y firma del Técnico en Recaudación

CONTABILIDAD  
GENERAL DE CUENTAS  
Registro  
No. A 47682  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTO  
DE TÍTULOS  
AUTENTADO POR: MONTSE ALVARADO  
FOLIO: 00000000000000000000  
www.contabilidad.gov.gt

AUTORIZACIÓN DE  
LIBROS Y DOCUMENTOS  
Verencia Original Centro  
de Recaudación Tributaria

36

# La Universidad de San Carlos de Guatemala



Por cuanto:

El Señor

**Hector Ricardo Echeverría Méndez**

ha llenado los requisitos de ley para optar al grado de

**Licenciado en Ciencias Jurídicas  
y Sociales**

Por tanto:

le expide el presente Diploma que lo acredita como miembro de la  
**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**  
y le concede el derecho a gozar de los honores y preeminencias  
debidos a su grado.

Dado en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de octubre  
del año de mil novecientos noventa y nueve.

0067 - 04 - 2000

Rector

Secretario de la Universidad

Decano



3 DE 6

HOJAS

Gilberto Gómez Moroy  
ABOGADO Y NOTARIO

19  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



TRAMITE AUTORIZADO

No. DE CARNET: 9112299  
FECHA: - 7 ABR 2000

Dr. Cosme Leonardo Monsilla S.  
SUB JEFE DEL DEPTO. DE INGRESOS Y ESTADISTICA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y ESTADISTICA  
TITULO REGISTRADO



69630  
28 ABR 2000  
Tobias Alejandro Grajeda Tobar  
JEFE DEPTO. DE INGRESOS Y ESTADISTICA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
OFICINA TRIBUTARIA GUATEMALA  
UNIDAD DE GESTION Y RECAUDACION

Impuesto del Timbro de G. 100.-  
Impresión: COPY Caja: 10  
De fecha: 9-5-2000  
Decreto: 37-92  
Guatemala, 9-5-2000

EL PRESENTE DOCUMENTO CIERCA REGISTRADO EN LA  
CONTRALORIA DE CUENTAS CON EL No. 12502629  
Guatemala, 09 de mayo del 2000  
CONTRALORIA DE CUENTAS Y FISCALIA  
GUATEMALA, G.  
Ejecutado  
JACOB MARCELO RODAS DE LICON  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



37  
P

# La Universidad de San Carlos de Guatemala



Por cuanto:

El Señor

**Hector Ricardo Echeverría Méndez**

ha llenado los requisitos de ley para optar al título universitario de

## A b o g a d o

Por tanto:

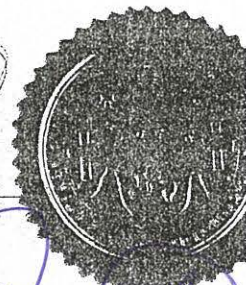
le expide el presente Diploma que lo acredita como miembro de la  
**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**  
y lo autoriza para el ejercicio de la profesión correspondiente con  
los honores y preeminencias debidos.

Dado en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de octubre  
del año de mil novecientos noventa y nueve.

8867 - 04 - 2000

Rector

Secretario de la Universidad



DE

6

HOJAS

Gilberto Gómez Morrey  
ABOGADO Y NOTARIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

TRAMITE AUTORIZADO



No. DE CARNET: 9112299

FECHA: - 7 ABR 2000

*Dr. Celso Leonidas Mansilla S.*  
SUB JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO Y ESTADISTICA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA  
TITULO REGISTRAL



No. DE REGISTRO: 64631

FECHA: 20 ABR 2000

*Dr. Rolando Grajeda Tobar*  
JEFE DEPTO. DE REGISTRO Y ESTADISTICA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
OFICINA TRIBUTARIA GUATEMALA  
UNIDAD DE GESTION Y RECAUDACION

Impuesto del Timbre de O. 00.-

Impresión: 444 Cnts: 10

De fecha: 9-5-2000

Decreto: 35-93

Guatemala, 9-5-2000

EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDA REGISTRADO EN LA  
CONTADORIA DE CUENTAS CON EL NO. 12508 L-29  
Guatemala, 09 de mayo de 2000

*José Amílcar Rivas de León*  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

38  
p

# La Universidad de San Carlos de Guatemala



Por cuanto:

El Señor

**Hector Ricardo Echeverría Méndez**

ha llenado los requisitos de ley para optar al título universitario de

## Notario

Por tanto:

le expide el presente Diploma que lo acredita como miembro de la  
**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**  
y lo autoriza para el ejercicio de la profesión correspondiente con  
los honores y preeminencias debidas.

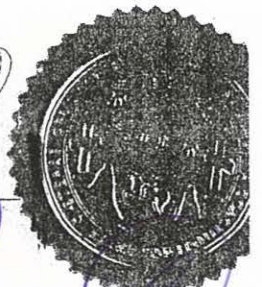
Hecho en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de octubre  
del año de mil novecientos noventa y nueve.

0067 - 04 - 2000

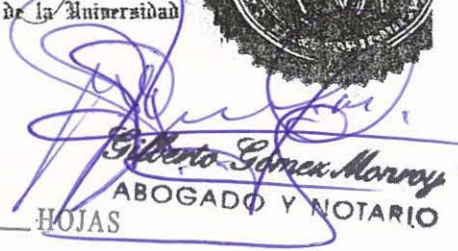
  
Rector

  
Decano

  
Secretario de la Universidad



5 DE 6 HOJAS

  
ABOGADO Y NOTARIO



219

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

TRAMITE AUTORIZADO



No. DE CARNET: 9112299  
FECHA: -7 ABR 2000

Dr. Carlos Casariego Manilla S.  
Sub-Jefe del Dpto. de Registro y Estadística

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA



TÍTULO REGISTRADO

64632

26 ABR 2000

Ing. Rolando Gracida Tober  
Jefe Dpto. de Registro y Estadística

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
OFICINA TRIBUTARIA GUATEMALA  
UNIDAD DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

Impuesto del Timbre de 100.-  
Impresión: CHN Caja: 10  
De fecha: 2-5-2000  
Decreto: 33-9-97  
Guatemala, 9-5-2000

EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDA REGISTRADO EN LA  
CONTRALORIA DE CUENTAS CON EL NO. 125011-29  
Guatemala, 09 de Mayo del 2000

Contraloría de Cuentas  
JEPACU  
GUATEMALA, G.

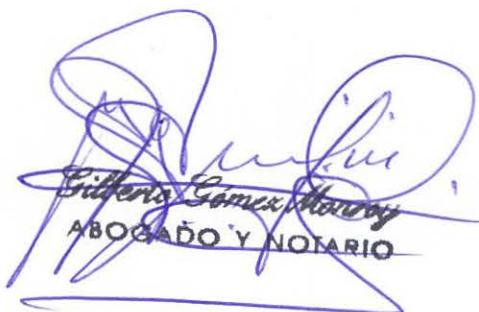
firmado  
JACOB ALFREDO RODAS DE LEON  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que las cinco fotocopias que anteceden impresas en ambos lados son **AUTENTICAS**, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, directamente de los documentos originales y que reproducen lo siguiente: **a)** Diploma de Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional, otorgado por la Universidad San Pablo de Guatemala y Universidad Rural de Guatemala, Facultad de Derecho y Justicia y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a favor de HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ, con fecha veintiséis de abril de dos mil trece; **b)** Diploma de Maestro en Derecho Penal, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a favor de HECTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ, con fecha veintiocho de junio de dos mil once; **c)** Diploma de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a favor de HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MÉNDEZ, con fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve; **d)** Título de Abogado, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a favor de HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MÉNDEZ, con fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve; **e)** Título de Notario, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a favor de HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MÉNDEZ, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. En fe de lo cual numero, firmo y sello las cinco hojas que anteceden y la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

6 DE 6 HOJAS

  
Silferio Gómez Marroquín  
ABOGADO Y NOTARIO

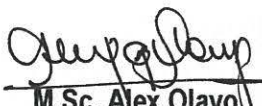


A quien interese:

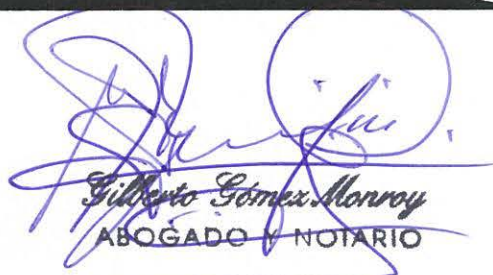
Por este medio hacemos constar que el **M.A. Héctor Ricardo Echeverría Méndez**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación –DPI- bajo el Código Único de Identificación –CUI- número mil seiscientos cinco (1605) setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve (79589) cero ciento uno (0101) debidamente extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, ha prestado los servicios profesionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia brindado lo siguientes servicios a partir del año 2003 al año 2019.

1. Docente de Maestría en Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia impartiendo los cursos de: Derecho Procesal Penal, Derecho Probatorio Penal, Oratoria Forense y Argumentación Jurídica.
2. Docente de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia impartiendo los cursos de: Derecho Procesal Penal I, Derecho Procesal Penal II, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal I, Clínica de Derecho Procesal Penal.
3. Docente del Programa de Actualización y Cierre Académico (ACCA) y Programa de Equivalencias Integrales (PEI) en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia impartiendo los cursos de: Clínica de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
4. Docente de Diplomado en Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia impartiendo el curso de: Instituciones de Derechos Humanos en Guatemala.
5. Integrante de temas de exámenes técnicos profesionales en Campus Central y sedes departamentales.
6. Asesor y Revisor de Tesis.

Y para los usos que al interesado convengan, extendemos, firmamos y sellamos la presente a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

  
**M.Sc. Alex Olayo**  
Director de Recursos Humanos



  
**Guillermo Gómez Morán**  
ABOGADO Y NOTARIO





41



# Universidad Mariano Gálvez de Guatemala


## Jefatura de Personal


Campus Central: 3a. Avenida 9-00 Zona 2, Interior Finca El Zapote. Guatemala, Guatemala, C. A.  
PBX: 2411-1800

El Infrascrito Jefe de Personal de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, hace CONSTAR: Que el Licenciado **HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ**, laborò en esta Casa de Estudios Superiores, desempeñando el cargo de **CATEDRATICO TITULAR**, ingreso el 01 de Febrero de 2000 al 30 de Noviembre de 2004. Impartio los siguientes cursos:

LOGICA JURIDICA  
TEORIA GENERAL DEL PROCESO  
DERECHO MERCANTIL III  
TEORIA GENERAL DEL ESTADO  
DERECHO CIVIL VI  
DERECHO PENAL II  
DERECHO CONSTITUCIONAL GUATEMALTECA  
TEORIA GENERAL DEL ESTADO  
DERECHO PROCESAL PENAL I  
DERECHO PROCESAL PENAL II

Y para los usos legales que a la parte interesada convengan, extendiendo firma y sello la presente constancia en la Ciudad de Guatemala, a los diecisiete días del mes de Agosto del dos mil nueve.


  
**LUIS ANGEL DEL VALLE BARRIOS**  
**JEFE DE PERSONAL**



"Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres"



2 DE 3 HOJAS

  
**ABOGADO Y NOTARIO**

42  
P

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que las dos hojas de fotocopia que anteceden impresas únicamente en el anverso son **AUTENTICAS**, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, directamente de los documentos originales y que reproducen: **a)** Constancia emitida a favor del Magister Artium Héctor Ricardo Echeverría Méndez, por el Director de Recursos Humanos de la Universidad Panamericana, con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; **b)** Constancia emitida a favor del Licenciado HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ, por el Jefe de Personal de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con fecha diecisiete de agosto de dos mil nueve. En fe de lo cual numero, firmo y sello las dos hojas que anteceden y la presente acta de legalización, adhiriendo los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

3 DE 3 HOJAS

  
**Guillermo Gómez Menroy**  
ABOGADO Y NOTARIO





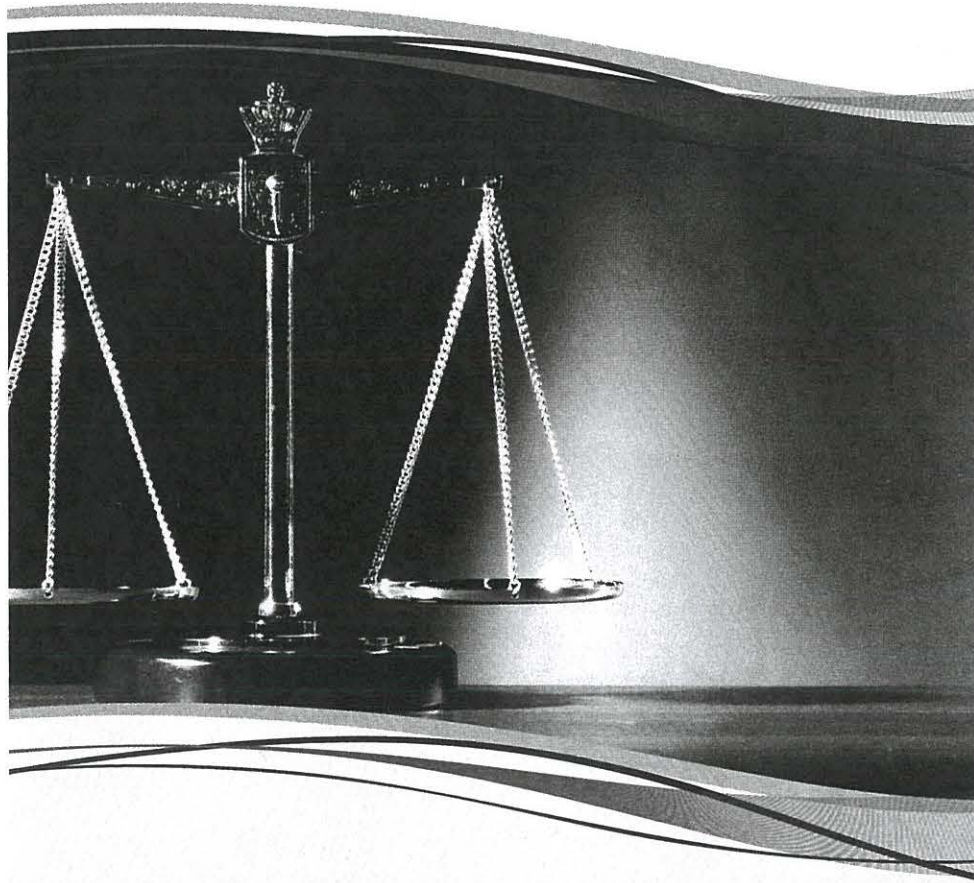
43



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA

# ADVOCATUS IUS

AÑO 2. NO. 2 • JUNIO 2014



UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

*[Handwritten signature]*  
Gustavo Gómez Marroquín  
ABOGADO Y NOTARIO

1 DE 35 HOIAS





Diagonal 34, 31-43 zona 16. Ciudad de Guatemala  
Teléfono PBX: 23901200.  
© Guatemala, Junio de 2014.

Título de la revista: **ADVOCATUS IUS**  
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia  
Universidad Panamericana

**Autoridades de la Universidad Panamericana**  
Rector: Mgtr. Mynor Herrera  
Vice rectora académica: Dra. Alba de González  
Vicerrector administrativo: Mgtr. César Custodio  
Secretario General: Mgtr. Adolfo Noguera  
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia: Mgtr. Otto González

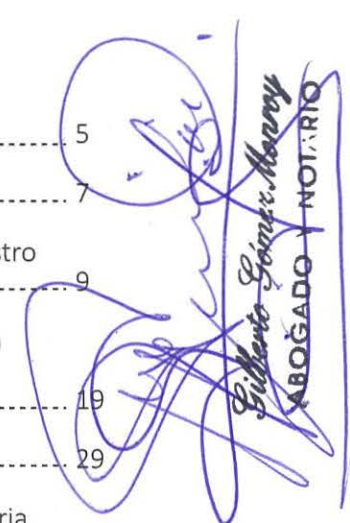
**Consejo Editorial**  
Mgtr. Otto González  
Mgtr. Joaquín Flores  
Mgtr. Mario Jo  
Mgtr. José Luis Samayoa  
Mgtr. Jorge Cabrera

**Editor**  
Dr. Carlos Interiano

Diseño y diagramación: Duglas Aguilar  
Impreso en Sonibel, Tel.: (502) 2442-2324. E-mail: info@sonibel.info

# INDICE

Presentación.....	5
Editorial.....	7
La condición resolutoria expresa y su inoperancia en el Registro General de la Propiedad.....	9
Ejes de la Política Nacional de Prevención: Oportunidad para establecer las bases de unificación de acciones a nivel de estado de Guatemala.....	19
Derecho penal, sociedad e individuo.....	29
Fuero militar: Una prerrogativa o una obligación contradictoria irrenunciable dentro del ordenamiento jurídico penal guatemalteco.....	37
Sistema dualista: Derecho maya - Derecho oficial.....	49
El principio de oficiosidad en el proceso contencioso administrativo.....	61
Trámite del proceso de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos.....	77
La categoría de género y su importancia dentro del ámbito jurídico.....	91
La concepción garantista del proceso.....	105
Las garantías constitucionales de jueces y magistrados, en el ordenamiento jurídico guatemalteco.....	115
La prueba en el proceso penal.....	126

  
Guillermo Gómez Marro  
ABOGADO - NOTARIO

2 DE 35 HOJAS







# DERECHO PENAL, SOCIEDAD E INDIVIDUO

M.Sc. Héctor Ricardo Echeverría Méndez

## Resumen

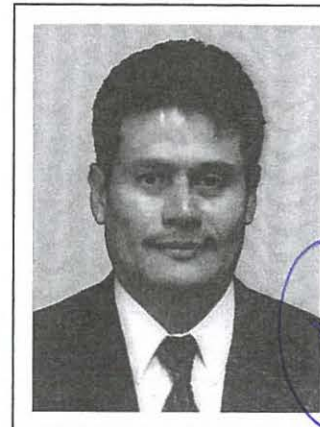
Los siguientes apuntes, hacen referencia a las éticas que deben fundamentar el Derecho Penal propio de los valores humanos, partiendo del reconocimiento de la dignidad humana del hombre y de sus derechos, resaltando la dignidad de la persona como valor intrínseco de todo ser humano de la cual surgen los restantes derechos.

## Introducción

El Derecho Penal, por naturaleza, es control de personas, siendo básico que tenga un conjunto de conductas dañinas y relevantes para la sociedad, pero dicha potestad de crear y juzgar, se encuentra limitada a derechos fundamentales, entre ellos la dignidad del ser humano.

### Palabras clave:

Derecho Penal.  
Sociedad.  
Individuo.  
Dignidad.



## Estado, sociedad y Derecho Penal

La idea de que el Derecho Penal es un instrumento de control social, conlleva inevitablemente la concurrencia de dos conceptos: Estado y Sociedad. Ello es así, debido a que la noción de control lleva implícito la participación de quién controla y a quién se controla.

En ese orden, el Estado es el que tiene la potestad de controlar, porque es el que ostenta el poder y controla precisamente a la sociedad o, particularmente, a quienes la integran: el hombre, persona o individuo.

Conocido es que el Derecho Penal es dictado por el Estado, en atención a que es el titular del poder público. Formalmente, en virtud del principio de legalidad, no puede existir un Derecho Penal si no es dictado

*Héctor Ricardo Echeverría Méndez*  
ABOGADO Y NOTARIO

3 DE 35 HOJAS







mediante uno de los tres organismos que conforman el poder público. El Derecho Penal objetivo tiene como fuente la ley decretada por el Congreso de la República.

Es decir, la ley penal únicamente puede ser creación del Estado y nadie más puede arrogarse ese derecho. En efecto, el *ius puniendi* o derecho de castigar le corresponde al Estado.

El Estado que crea el Derecho Penal objetivo también ostenta el Derecho Penal subjetivo, que es el derecho que tiene de penalizar las conductas humanas que ha considerado lesivas a la convivencia social.

Hombre, sociedad y Estado se interrelacionan lógicamente. No puede haber Estado, si no existe sociedad y naturalmente no puede hablarse de sociedad, si esta no está conformada por un conglomerado de hombres o personas. El Derecho Penal es el instrumento de control social que se encuentra a disposición del Estado, que lo crea y lo aplica, mediante los poderes constituidos: el Legislativo y Judicial.

Partiendo del órgano del Poder Público del Estado que tenga la potestad de dictar la ley penal, surge el principio de legalidad, pues solamente pueden ser considerados como delitos aquellos comportamientos humanos que estén calificados o definidos como tales en una norma

penal creada por el Organismo Legislativo.

Asimismo, del Poder a quien se ha asignado la potestad de aplicar la ley penal, surge el principio al juez natural, el cual propicia el derecho de todo sindicado a ser sometido a proceso penal por el juez previamente establecido por el Congreso de la República.

Ahora bien, ciertos autores no comparten el criterio que el *ius puniendi* sea un derecho, ya que consideran que es una potestad del Estado.

Cobo y Vives manifiestan:

De modo que el poder punitivo no puede configurarse como derecho subjetivo. Es un poder que el derecho objetivo concede para su propia realización, y como poder correspondiente a un órgano investido de auctoritas, debe definirse más exactamente como potestad. Ello no implica, obviamente, que se trate de un poder ilimitado. Al contrario, en la propia idea de poder de realización del derecho objetivo reside un fundamento profundamente limitativo, que el pensamiento del *ius puniendi* no puede proporcionar. En resumen, el Derecho Penal en sentido subjetivo puede definirse como la potestad atribuida a determinados órganos del Estado para imponer las penas y medidas de seguridad determinadas en las leyes cuando concurren los presupuestos establecidos en ellas. (1999:64)

Aunque, el Estado sea quien goce del derecho de penalizar o de la potestad de castigar, ello no significa que el

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Derecho Penal esté a su servicio arbitrariamente. Por el contrario, el Derecho Penal debe estar como cualquier otro Derecho al servicio de determinados valores éticos: convivencia social pacífica, justicia, bien común.

La persona no vive aisladamente, sino por el contrario, convive con otros seres de su mismo género e inevitablemente, en las relaciones sociales de convivencia surgen comportamientos lesivos de determinados bienes considerados por la sociedad debiendo ser resguardados mediante el Derecho Penal, siendo la sociedad la que valora la importancia de los bienes a proteger mediante la norma penal. Así, se encuentra que la vida es un valor que se encuentra tutelado en la ley penal, la cual castiga a quien diere muerte a otra persona.

Véscovi sostiene:

El Estado es quien dicta el derecho y en cierto modo lo monopoliza, en la época moderna no solo establece las sanciones para quien no cumpla con las normas de conducta estatuidas (derecho objetivo) y desconozca las facultades de otro miembro de la sociedad (derecho subjetivo), sino que, también, debe establecer los mecanismos para imponerlas. (1984:3)

De tal manera que el Estado se vale de la ley penal para prohibir y sancionar conductas humanas que han sido consideradas socialmente dañinas.

Es precisamente en la sociedad donde surgen los comportamientos atentatorios de los bienes de quienes la integran. Pero, se insiste, no toda conducta del individuo es penalmen-

te castigada, sino solamente aquellas lesivas de bienes considerados dignos de protección penal. El Estado interviene en los conflictos sociales, porque está llamado a mantener la convivencia pacífica entre los hombres, función que pretende cumplir con instrumentos de control social como el Derecho Penal, por el cual señala las conductas que constituyen delitos y las penas que corresponde aplicar.

Lo importante es advertir que sociológicamente el delito no existe, porque aunque existan comportamientos humanos que resulten absolutamente detestables, inaceptables y dañinos de la convivencia pacífica, no pueden ser sancionados si el Estado previamente no los ha prohibido.

El delito es una construcción jurídica, que, en principio, debiera definir sólo aquellas acciones humanas que los propios miembros de la sociedad consideren dañinas para sus bienes jurídicos.

Sin embargo, Zaffaroni hace la siguiente reflexión:

...acciones conflictivas de muy diferente gravedad y significado social se resuelven por la vía punitiva institucionalizada, pero no todos los que las realizan sufren esa solución, sino únicamente una minoría ínfima de ellos, después de un proceso de selección que casi siempre selecciona a los más pobres; otras acciones conflictivas se resuelven por otras vías institucionalizadas y otras carecen de solución institucional. (1991:21)

La reflexión de Zaffaroni confirma la necesidad de que el Estado y el Dere-

**M.Sc. Héctor Ricardo Echeverría Méndez**  
Abogado y Notario, Maestro en Derecho Penal, Magister en Gestión Jurisdiccional, Magistrado de Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Profesor del curso de Derecho Procesal Penal en Universidad Panamericana.

4 DE 35 HOJAS

*Eduardo Gómez Marroig*  
ABOGADO Y NOTARIO





cho Penal se fundamenten sobre bases éticas, entre otras: la dignidad humana, la igualdad.

El Estado por medio del Derecho Penal, debe seleccionar comportamientos y no personas. Pero, no debe seleccionar cualquier conducta, sino sólo aquellas que sean relevantes, sólo aquellas que sean valoradas negativamente. Ello da lugar a lo que se denomina Derecho Penal de acto.

El Derecho Penal en Guatemala debe estar fundamentado en un Derecho Penal encaminado a la penalización de la acción u omisión como formas del comportamiento humano, sin tomar en cuenta a su autor (Derecho Penal de autor).

## Ética, humanismo y Derecho Penal

### Ética y Derecho Penal

Según Muñoz y García (1998), el Derecho Penal es un instrumento de control social que no debe estar al servicio del Estado, sino de los valores humanos, lo cual conlleva inevitablemente a admitir que debe tener bases éticas o valores superiores. Dicho en otras palabras, el Derecho Penal cuenta con su propia moral, en virtud que es un instrumento normativo de valores.

Precisamente, el Derecho Penal define como delitos a determinadas conductas que desvaloriza.

Nieto afirma:

...el Derecho es, al menos y en todo caso, un sistema de declaraciones de reconocimiento de valores instrumentales —un 'camino' en su significación etimológica originaria— enderezado a la consecución de otros valores superiores como Justicia, Orden, Paz, Progreso y semejantes asumidos por el Poder Político o por la sociedad en cada momento histórico y en cada situación concreta. Detrás de cada ley —e incluso detrás de cada uno de sus artículos— hay un valor que se reconoce y protege o un desvalor que se rechaza. (2007:42)

Es elemental, entonces, referirse a las bases éticas en las que se fundamenta el Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho, conociéndolas puede controlarse y criticarse la creación de una ley penal contraria a los valores fundamentales o superiores que rigen en dicha forma de Estado.

La principal base ética o valor superior del Estado Social y Democrático de Derecho y del Derecho Penal, es la dignidad del hombre.

Un Derecho Penal que no reconozca la dignidad del individuo, no es propio de un Estado Social y Democrático de Derecho. La dignidad humana es de tal trascendencia que de ella parte el reconocimiento de los derechos humanos.

Este punto es importante, ya que un Derecho Penal sin reconocimiento de dignidad, carece de fundamentos éticos.

Aludiendo a las bases éticas del Estado de Derecho, Robbers, indica:

La retrospectiva histórica habla a las claras de la vitalidad del principio. Si nos abstraemos del concepto de Estado de derecho y preguntamos por lo que representa, debemos remontarnos hasta los primeros albores del pensamiento jurídico occidental para encontrar sus raíces. En efecto, uno de los principales puntos de referencia es la doctrina de Aristóteles sobre la constitución mixta, que debe contrarrestar la desnaturalización del gobierno. El pensamiento de Cicerón sobre la moderación, la razón práctica, la vocación republicana, tiende el arco hacia la escolástica medieval. El género literario de los Espejos de Príncipes al que recurrieron Santo Tomás de Aquino y muchos otros, nos trasmite la enseñanza de la mesura del gobierno y su sujeción a la ética y al debido Derecho. Las raíces de las tradiciones cristianas se manifiestan en aquellos aspectos en los que el principio del Estado de Derecho se sustenta en la garantía de los derechos fundamentales, esencialmente en la garantía de la dignidad humana. La semejanza del hombre con Dios fundamenta su dignidad, constituyéndose de este modo en un límite infranqueable para el poder. No podemos imaginar la idea de la personalidad del hombre sin el trasfondo cristiano. (1999:33)

El reconocimiento de la dignidad humana y el respecto de los derechos del hombre, son parte de los valores éticos en el Estado de Derecho. Por consiguiente, el reconocimiento de la dignidad del individuo y los derechos que le son inherentes, son contenidos que informan al Derecho Penal propio de un Estado de Derecho.

Por supuesto existen otros contenidos éticos del Estado de Derecho que siguen siendo actuales, como el referente a que todos los tribunales y organismos públicos quedan sujetos a la ley y al Derecho; el de la prioridad jurídica y política del poder legislativo

determinante de la primacía de la ley sobre los restantes actos del Estado; así como el de que ninguna actuación de las autoridades o de los tribunales debe contravenir la ley dictada por el parlamento o ser inconstitucional. De esos contenidos éticos parte el principio de legalidad, que limita la potestad punitiva del Estado efectivizada en los tribunales. El delito y la pena solo existen si el Organismo Legislativo los ha definido y determinado como tales en una ley previa.

La persona es el núcleo de un Estado Democrático, quien por esa razón goza de derechos fundamentales y a quien el Estado se los debe garantizar.

Ferrajoli es claro en su tesis a favor de los derechos del hombre como persona:

Comparto enteramente —y yo mismo he sostenido en otras ocasiones— la tesis de Vitale de que todos los derechos fundamentales deberían estar anclados en la condición de persona y/o de capaz de obrar, y no ya en la ciudadanía: una categoría que un constitucionalismo global debería dejar atrás junto con la de soberanía estatal. (2006:120)

Para Ferrajoli los derechos fundamentales están ligados a la persona por su condición humana y no porque se le considere ciudadano. En ese sentido, en un Estado democrático todo ciudadano o extranjero gozan de derechos fundamentales por su condición de personas. Es decir, partiendo de la tesis de Ferrajoli, la Constitución debiera reconocer por igual a sus ciudadanos y a los extranjeros casi todos los derechos fundamentales, por su condición de persona, sin ver el

5 DE 35  
HOJAS  
ABOGADO Y NOTARIO





estatus que tengan en el país. Claro, hay ciertos derechos políticos que lógicamente sólo pueden otorgarse a los ciudadanos y no a los extranjeros, como el derecho al voto.

Ferrajoli en su crítica a la noción de ciudadanía manifiesta:

Todo esto no priva de fundamento a la crítica externa, de tipo ético-político, de nuestras actuales democracias constitucionales. Ante todo porque en ellas la ciudadanía, en contraste con su papel originario de factor de igualdad e inclusión, opera como factor de exclusión en relación con los millones de inmigrantes que presionan nuestras fronteras y que, cuando consiguen traspasarlas, quedan relegados... a la condición de 'súbditos', porque carecen de derechos políticos, o peor aún de 'siervos' en el caso de que se vean forzados a caer en la clandestinidad. (2006: pág. 120)

Sobre el tema del que habla Ferrajoli, es oportuno citar el caso de los migrantes, a quienes en varios Estados occidentales, verbigracia los Estados Unidos de América, no reconocen los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente de los guatemaltecos.

De todos es conocido, el caso de los guatemaltecos migrantes que en Estados Unidos fueron encarcelados y procesados en juicios sumarios, tal como lo señaló Camayd-Freixas (2009), a quienes no se les garantizó sus derechos fundamentales que las leyes procesales sí reconocen a sus ciudadanos.

De ahí que tenga razón Ferrajoli, cuando afirma que en la realidad hay contradicción, porque en las constitu-

ciones sí se reconocen esos derechos fundamentales a los extranjeros migrantes, pero mediante otras leyes se desconocen.

Por ello, es importante delimitar la verdadera democracia de la democracia formal. La primera es aquella en la que sí se hacen efectivos los derechos fundamentales de los habitantes del Estado; la segunda es aquella en la que el reconocimiento de aquellos derechos sólo se encuentra en papel, en teoría.

El contenido fundamental del Estado de Derecho Material, según Robbers (1999), en primer lugar aparece la garantía de los derechos fundamentales: la libertad y la igualdad, la dignidad humana y su manifestación en las diversas garantías de los derechos humanos, son tradicionalmente los elementos esenciales del principio del Estado de Derecho. Agrega el principio de la proporcionalidad, según el cual toda medida del Estado debe ser en última instancia adecuada y asimilable por el afectado, pues de este modo se reconoce a todo individuo su dignidad individual; no se exige de él someterse de antemano y sin más, a un agente colectivo. Frente a los legítimos intereses del conjunto de la sociedad, también se asume como legítimo su interés individual.

Llama la atención el principio de proporcionalidad aludido por Robbers, especialmente si se contrasta con los cuerpos normativos y los procedimientos que responden a la concepción del Derecho Penal del Enemigo.

La crítica hacia la teoría del Derecho Penal del Enemigo, se concreta en que la misma deja por un lado la dignidad del hombre, la igualdad, la libertad y la proporcionalidad.

Las ideas formuladas por Robbers (1999), en cuanto a que un mandato ético esencial es el reconocimiento del otro como sujeto; la condición de persona es requisito de toda comunicación ética y jurídica; para que los hombres puedan convivir es necesario que admitan que sus prójimos también poseen derechos.

## Humanismo y Derecho Penal

La principal vulneración que la crítica atribuye al Derecho Penal del Enemigo, es su desconocimiento de la dignidad humana en quien recaiga la calificación de enemigo.

El Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho debe fundamentarse precisamente en el reconocimiento de la dignidad del hombre, ya que de ese reconocimiento parten los demás derechos fundamentales.

Suárez (1998) dice que mientras en el Estado de Derecho la dignidad inherente al ser humano es un fin, cuya realización se logra mediante la concreción de los demás derechos fundamentales; en el Estado Social y Democrático de Derecho, la dignidad humana es presupuesto para la realización de tales derechos, porque se considera que de nada sirve consagrar derechos y garantías que tengan por destinatario al hombre, cuya

dignidad le es desconocida.

La dignidad de la persona como valor intrínseco de todo ser humano, es el fundamento de todos los derechos del hombre, es el primero de los derechos sobre el que descansan los restantes, al punto que si un determinado Estado no reconoce la dignidad de la persona no podría afirmar que reconoce los demás, como la libertad y la igualdad. La dignidad humana está reconocida tanto en la legislación interna como en la internacional, partiendo desde la Constitución Política de la República de Guatemala, hasta los tratados sobre derechos humanos.

El razonamiento es lógico. Si a un sujeto no se le considera persona, simplemente no se le reconocerán sus derechos humanos, porque los mismos necesariamente dimanarían de la dignidad humana.

Suárez, refiriéndose a los derechos del hombre, manifiesta

Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por la racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente. De ahí que se le reconozca una dignidad —la dignidad humana— que lo coloca en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve y por ello es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los cuales ésta se vería discriminada, enervada y aun suprimida. Son los derechos fundamentales que le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión, y pensamiento;

Gilberto Gómez Morán  
ABOGADO Y NOTARIO





salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo a la educación y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre asociación y a formar sindicatos.(1998:127)

La humanización del Derecho Penal parte del reconocimiento de la dignidad del hombre y de sus derechos fundamentales.

## Conclusiones

El Derecho Penal debe de observar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala.

El Derecho Penal del Enemigo lesiona la dignidad humana.

## Referencias

### Libros

- Camayd-Freixas, E. (2009). Postville: La criminalización de los migrantes. Guatemala, Guatemala: F&G Editores.
- Ferrajoli, L. (2006). Garantismo, una discusión sobre derecho y democracia. Madrid, España: Trotta.
- Manuel Cobo del Rosal y Tomás S. Vives Antón. (1999). Derecho Penal, Parte General. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
- Nieto, A. (2007). Crítica de la Razón Jurídica. Madrid, España: Trotta.
- Robbers, G. (1999). El Estado de Derecho y sus bases éticas en Estado de Derecho y Democracia. Buenos Aires, Argentina: Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano.
- Suárez Sánchez, A. (1998). El Debido Proceso Penal. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Vescovi, E. (1984). Teoría General del Proceso. Bogotá, Colombia: Temis.
- Zaffaroni, E. R. (1991). Manual de Derecho Penal, Parte General. México: Cárdenas Editor y Distribuidor.

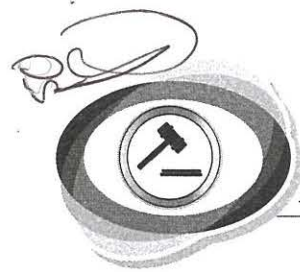
### Legislación

- Constitución Política de la República de Guatemala.
- Código Penal de la República de Guatemala.

*Gilberto Gómez Morán*  
ABOGADO Y NOTARIO

7 DE 35 HOJAS





REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA

# ADVOCATUS IUS

AÑO 1. NO. 1 • DICIEMBRE 2013



UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

*Gilberto Gómez Morán*  
ABOGADO Y NOTARIO

8 DE 35 HOJAS





51



Diagonal 34, 31-43 zona 16. Ciudad de Guatemala  
Teléfono PBX: 39901200.  
© Guatemala, Diciembre 2013.

**Autoridades de la Universidad Panamericana**  
Rector: Mgtr. Mynor Herrera  
Vice rectora académica: Dra. Alba de González  
Vice rector administrativo: Mgtr. César Custodio  
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia: Mgtr. Otto González

**Consejo Editorial**  
Mgtr. Otto González  
Mgtr. Joaquín Flores  
Mgtr. Mario Jo  
Dr. José Luis Samayoa  
Lic. Jorge Cabrera

**Editor**  
Dr. Carlos Interiano

Diseño y diagramación: Duglas Aguilar  
Impreso en Sonibel. 2442-2324

# INDICE

Presentación.....	5
Editorial .....	7
Prevención: Perspectiva indispensable en la búsqueda de mecanismos de disminución de la violencia en Guatemala. Edgar Estuardo Melchor Solórzano .....	9
Estado y Derecho Penal. Héctor Ricardo Echeverría Méndez .....	17
El Principio de Igualdad como garantía constitucional: ineficacia de la rebeldía del demandante en el proceso ordinario laboral. José Israel Jiatz Chali .....	33
El derecho urbano y la ordenación territorial. José Luis Samayoa P. ....	41
El Decálogo y el bien jurídico tutelado. José Antonio Pineda Barales .....	55
La protección de los Derechos Humanos de las mujeres en el sistema jurídico guatemalteco. Juana Solís Rosales .....	63
Rendición de cuentas de los administradores de sociedades mercantiles. Mario Efraín López García .....	75
El Litigio Interamericano en resguardo de los Derechos Humanos. Nydia de Corzantes .....	87
El comercio compensatorio internacional. Silvia Patricia Valdes Quezada .....	97
La Dactiloscopia. Vitalina Orellana y Orellana .....	107
Discurso de Graduación 2013 MGTR Mynor Herrera .....	117

*[Handwritten signature]*  
ABOGADO Y NOTARIO

7 DE 35 HOJAS







# ESTADO Y DERECHO PENAL

Héctor Ricardo Echeverría Méndez

## Resumen

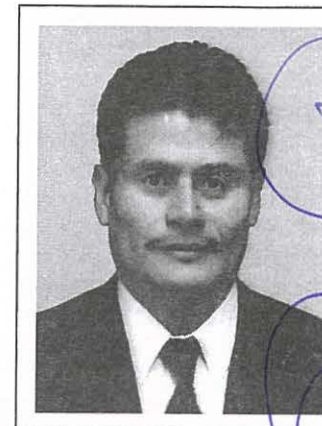
El presente trabajo inicia con una explicación del Derecho Positivo, así como la integración del Derecho Penal al mismo, comprendiendo ambos derechos como parte de un todo, concatenado e integrado, cumpliendo una función de control social en el Estado.

En segundo momento, se desarrolla la relación que tiene el Estado con el Derecho Penal, desde la perspectiva de los distintos tipos de Estado, acentuando la reflexión en la función de la pena.

## Introducción

Se analiza el Derecho Penal Positivo que ha existido en el Estado Liberal de Derecho hasta el Estado Social y Democrático de Derecho, concluyendo que es en este último tipo estatal en el cual se configuran los principios que resguardan la dignidad de la persona.

Abogado y Notario, Maestro en Derecho Penal, Magister en Gestión Jurisdiccional, Magistrado de Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Profesor del curso de Derecho Procesal Penal en Universidad Panamericana.



Es necesaria la reflexión de los tipos de Estado, ya que ello es la nota esencial para determinar la finalidad de la sanción que se imponga a través del Derecho Penal.

## 1.1 Derecho Positivo y Derecho Penal

El Derecho Positivo entendido como el conjunto de normas jurídicas vigentes en una sociedad con el objeto de regular determinadas conductas sociales, tiene como una de sus diversas ramas al Derecho Penal, constituyendo éste, según el criterio mayoritario, uno de los mecanismos de los que se sirve el Estado para el control social.

El Derecho Penal es parte del Derecho Positivo, pues está formado por un conjunto de normas también jurídicas, pero su contenido está dirigido a definir delitos y a determinar las penas y/o las medidas de seguridad que deben imponerse a quienes cometan aquellos delitos.

10 DE 31 HOJAS

*Héctor Ricardo Echeverría Méndez*  
ABOGADO Y NOTARIO







Lo que diferencia esencialmente al Derecho Penal de las otras ramas del Derecho es precisamente la naturaleza de sus consecuencias jurídicas: las penas y las medidas de seguridad. Por eso el Derecho Penal es un Derecho que conlleva violencia, en virtud que violentas son las sanciones de las que se vale para castigar aquellas conductas desviadas de las expectativas del ordenamiento jurídico.

El Derecho Penal, por consiguiente, es parte del ordenamiento jurídico positivo y uno de los medios de control social más violentos, diferenciándose de los demás por su carácter netamente formal. Se vale dentro de sus consecuencias jurídicas principales de la privación de la libertad y de la multa, para sancionar al autor de una conducta que contraría la expectativa contenida en el ordenamiento jurídico y en algunos países, como Guatemala, se apoya incluso en la pena de muerte como evidente respuesta violenta del Estado.

Por eso, Bacigalupo acertadamente ha sostenido:

*Exteriormente considerado, el derecho penal procura alcanzar sus fines declarando ciertos comportamientos como indeseables y amenazando su realización con sanciones de rigor considerable: sus sanciones son las más rigurosas que se conocen en el sistema social y los comportamientos a los que éstas se conectan son —en principio— los más intolerables para el sistema social. (Bacigalupo, 1989:1)*

### Palabras clave:

Derecho.  
Control.  
Estado.  
Dignidad.

Como se observa, el Derecho Penal selecciona determinadas conductas que son para la sociedad, así como le asigna una sanción.

Muñoz y García, afirman:

*El Derecho penal, tanto en los casos que sanciona, como en la forma de sancionarlos, es, pues, violencia; pero no toda la violencia es Derecho penal. La violencia es una característica de todas las instituciones sociales creadas para la defensa o protección de determinados intereses, legítimos o ilegítimos. La violencia es, por tanto, consustancial a todo sistema de control social. Lo que diferencia al Derecho penal de otras instituciones de control social es simplemente la formalización del control, liberándolo, dentro de lo posible, de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de la subjetividad propia de otros sistemas de control social. El control social jurídico-penal es, además, un control normativo, es decir, se ejerce a través de un conjunto de normas creadas previamente para el efecto. (Muñoz y García, 1998:31)*

De tal manera que, el límite del Derecho Penal como instrumento del poder punitivo del Estado, es su carácter meramente formal, lo cual constituye a la vez una garantía de que sólo las conductas previamente señaladas en la ley penal como criminales, pueden ser objeto de una sanción también previamente prevista en la legislación. En ese sentido, el Derecho Penal, se manifiesta objetivamente en la ley penal. Esta es su única fuente formal.

Ahora bien, las normas, la sanción y el proceso a seguir, varían de acuerdo a la función que el Estado históricamente tenga asignada.

Debe considerarse que el Derecho Penal como instrumento de control social será utilizado de manera distinta, según el tipo de Estado existente. No será igual el Derecho Penal de un Estado Liberal al de un Estado Totalitario, toda vez que la función que cada uno está llamado a cumplir es diferente.

Por eso es indiscutible que la función del Derecho Penal tiene íntima vinculación con la política, partiendo de la función del Estado, así también será la función asignada a la pena como el instrumento principal y caracterizador, con los que cuenta el Estado para resguardar la vigencia de sus normas jurídicas.

En ese orden de ideas, es importante que el tema sobre la función del Derecho Penal en cada una de las formas de Estado, se aborde partiendo de la función de la pena, porque es mediante la sanción que el Estado protege la vigencia de las normas jurídico-penales.

Mir, expresa:

*La función de la pena constituye un tema inevitablemente valorativo, opinable, pues, y sustraído a la posibilidad de una respuesta independiente del punto de vista que se adopte ante la cuestión de la función a atribuir al Estado. La pena es, en efecto, uno de los instrumentos más característicos con que cuenta el Estado para imponer sus*

*normas jurídicas, y su función depende de la que se asigne al Estado. Pero precisamente creo que la primera condición para resolver el problema es reconocer abiertamente la vinculación axiológica expresada entre la función de la pena y la función del Estado. En discusión sólo podrá discurrir sobre cauces racionales si no se ocultan las premisas políticas de que depende. (Mir, 1982:15)*

El Derecho Penal regula determinados comportamientos individuales en la vida social como cualquier Derecho Positivo, pero es relevante tener presente que la forma en que legislará las conductas humanas tiene una fuerte dosis política, en atención a la función asignada al Estado dentro de un determinado contexto social.

Así, como se verá adelante, es diferente la función del Derecho Penal Positivo como mecanismo de control social dentro del Estado Totalitario y la que cumple dentro del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por eso es necesario examinar la función de la pena en los tipos de Estado con sus respectivos derechos penales objetivos.

## 1.2 Tipos de Estado y Derecho Penal

### 1.2.1 Estado Liberal de Derecho y Derecho Penal

Zaffaroni al referirse al Derecho Penal del Estado Liberal hace las siguientes consideraciones:





*Debe quedar claro que el derecho penal del Estado de Derecho o derecho penal de Derechos Humanos ('derecho penal liberal' en sentido técnico), tiene entre sus principales características el respeto a la autonomía ética, la delimitación bastante precisa del poder público, la selección racional de los bienes jurídicos penalmente tutelados, la previsibilidad de las soluciones, la racionalidad, humanidad y legalidad de las penas, etc. (Zaffaroni, 1991:284)*

Generalmente cuando se habla de la función de la pena se hace referencia a una función retributiva, una preventiva general y una preventiva especial. La retributiva se apoya en una finalidad de realización de la justicia mediante el castigo. La preventiva general tiene como fin evitar la comisión de nuevos delitos por parte de la generalidad de la población. La función especial se apoya en la finalidad de evitar la comisión de nuevos delitos por parte del autor.

En principio, se dice que en el Estado Liberal de Derecho, la función de la pena tuvo tanto una función preventiva como retributiva. La primera, de prevención de los delitos como medio de protección de la sociedad, castigando a los responsables de los ilícitos. La segunda como castigo directo a quienes han causado el mal.

Mir ha manifestado:

*La fundamentación del Estado y del Derecho liberales en el contrato social, concebido como pacto que los hombres suscriben por razones de utilidad, conducía a asignar a la pena la función utilitaria de protección de la sociedad a*

*través de la prevención de los delitos, cuya esencia se veía, en un principio, en constituir un 'daño social'. Pero tanta o, acaso, mayor importancia tuvo en éste la concepción retributiva de la pena. (Mir, 1982:25)*

La función preventiva de la pena es parte de la concepción relativa de la pena; y la función retributiva o de justicia de la pena corresponde a las teorías absolutas.

Sobre la realización de la justicia como ideal de la pena, Cobo y Vives toman la siguiente postura:

*La función de la pena no es la realización de la Justicia por medio del castigo. El orden jurídico ha de adaptarse, desde luego, a determinadas exigencias de Justicia, pero ni puede ni debe pretender realizar la Justicia en la tierra. La realización de la justicia es un cometido de la Moral, no del Derecho. Este debe limitarse a ordenar la convivencia externa de los ciudadanos del modo menos gravoso posible para sus derechos y libertades. Un ordenamiento jurídico que intentase realizar la Justicia representaría una insoportable injerencia en la libertad de los ciudadanos. (Cobo y Vives, 1999:800)*

Es válido el criterio de los autores citados, la función de la pena no puede ser retributiva o, lo que es lo mismo, no puede ser la de esperar la realización de la justicia. La función de la pena debe de ser la de protección de la sociedad mediante la prevención de los delitos.

Bacigalupo, refiriéndose a las concepciones absolutistas explica:

*La pena será legítima, según ellas, si es la retribución de una lesión cometida culpablemente. La lesión del orden jurídico cometida libremente importa un abuso de la libertad que es reprochable y, por lo tanto, culpable. El fundamento de la pena será exclusivamente la justicia o la necesidad moral. Las teorías absolutas, en consecuencia, legitiman la pena si ésta es justa. La pena necesaria, para estas teorías, será aquella que produzca al autor un mal (una disminución de sus derechos) que compense el mal que él ha causado libremente. (Bacigalupo, 1989:12)*

La retribución de la pena tiene, pues, un fundamento moral, el cual en el pensamiento liberal de sus autores, es un mal necesario a imponer al que incurre en la comisión de un delito, precisamente por el mal que ha causado. Desde ese punto de vista consideran la pena, justa. Es decir, es justa porque se le impone a quien se ha hecho merecedor de ella y de esa manera, se hace justicia.

A la idea de la pena retributiva, se puede censurar que carece de un fundamento empírico, así como que la supresión del mal causado por el delito, mediante la aplicación de una pena, es puramente ficticia, porque en realidad, el mal de la pena se suma al mal del delito.

Sobre la noción del hombre empírico y del hombre ideal, Mir, refiere:

*Mientras que los utilitaristas pensaban en el hombre empírico, el idealismo alemán giraba en torno a un hombre*

*ideal. De ahí que, mientras los primeros exigían de la pena que protegiese a los ciudadanos en sus bienes reales, los filósofos alemanes se preocupaban de que sirviera de testimonio y confirmación de los valores ideales del hombre-razón (desde su dignidad como ser racional autónomo, hasta la exigencia de justicia, también derivada de la razón humana). Una vez abandonado el planteamiento idealista del retribucionismo liberal, quedaría en pie la posibilidad de trazar un límite a la pena que impidiese castigar al delincuente más allá de la gravedad del hecho cometido. (Mir, 1982:27)*

En realidad, la función de la pena desde la teoría absoluta de la retribución conlleva el riesgo que de sancionar al autor más allá del mal causado por el delito, precisamente porque se basa en un ideal, en un valor, sin apoyarse en lo fáctico: el hecho ilícito concretamente cometido. De tal manera que por esa razón, no sea aceptable, la retribución como función de la pena.

De ahí, si las teorías absolutas pretenden legitimar la pena fundamentándose en la justicia, en el hombre ideal, las teorías relativas lo hacen mediante la obtención de o la tendencia a obtener su utilidad.

Esa utilidad se logra más o menos, por medio de la prevención, es decir, la pena será útil, en la medida en que a través de ella se pueda intimidar a la sociedad a que no cometa los delitos contemplados en la ley penal. Es decir, en el grado en que la pena logre que se cometan menos delitos, así será que podrá calificársela de útil.







La prevención puede ser general o especial. La primera está referida a la colectividad de personas y, la segunda, a la persona que ha cometido el hecho delictivo.

Bacigalupo lo explica claramente:

*Si este fin consiste en la intimidación de la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados, se tratará de una 'teoría' preventivo-general de la pena. Si por el contrario, el fin consiste en obrar sobre el autor del delito cometido para que no reitere su hecho, estaremos ante una 'teoría' preventivo-especial o individual de la pena. (Bacigalupo, 1989:13)*

Las teorías relativas de la pena justifican el castigo atendiendo a su utilidad, es decir, a la prevención que se espera obtener mediante la amenaza de la pena.

Para las teorías de la prevención general, la utilidad de la pena deriva de su aptitud como mecanismo de prevención general, la cual para Cobo y Vives (1999) se realiza tanto a través de la amenaza de la pena, como por medio de su efectiva ejecución y para las teorías de la prevención especial, dichos autores citan a Von, según el cual la pena correcta o justa es la pena necesaria; necesaria es la pena-fin o pena defensa, orientada a la tutela de bienes jurídicos. Asimismo, la necesidad de la pena se mide por Von con criterios de prevención especial, según los cuales han de imponerse para resocializar a los delincuentes necesitados y susceptibles de reeducación, para

intimidar a aquellos en que no concurra dicha necesidad y para neutralizar a los incorregibles.

### 1.2.2 Estado Social de Derecho y Derecho Penal

Como se afirma, el Derecho Penal del Estado Liberal permitió atribuir a la pena tanto una función preventiva como retributiva. Habiendo prevalecido las concepciones retribucionistas durante su permanencia.

En el Derecho Penal Social o Intervencionista, se asigna a la pena una función preventiva. Ello es así porque el Estado Social desde el momento en que decide tener una intervención activa en la vida de la sociedad, es lógico que también, intervenga dentro del sistema penal de control social, combatiendo o luchando contra el delito en protección de la colectividad.

En el Estado Social, refiere Mir:

*No se trataba sólo de realizar una justicia ideal exigida por la razón, sino de combatir eficazmente, en el terreno de los hechos, una criminalidad que iba en aumento a lo largo del siglo XIX, en especial como consecuencia de las dificultades de adaptación de amplias capas de la población a la nueva situación que determinaron el capitalismo, el maquinismo industrial y la aparición del proletariado. (Mir, 1982:28)*

Es decir, en el Estado Social, en principio, toma una posición preferente la prevención de los delitos en lugar de la retribución del mal cometido, sin embargo, en

algunos países totalitarios, el fin de la prevención como medio de protección de la sociedad, fue desnaturalizado como verá adelante, en virtud de que en ellos el fin era proteger al Estado mismo.

Sobre el Derecho Penal en el Estado de bienestar Zaffaroni ha expresado:

*En Europa fue gestándose más lentamente el llamado 'Estado de bienestar' (WelfareState) o 'Estado providente', que garantiza a todos un mínimo de seguridad social y su incorporación al sistema de producción industrial mediante la adaptación a ciertas pautas de conducta. Este Estado necesita controlar la producción y el consumo, porque se basa en un permanente aumento de producción que requiere pautas de consumo constantes y crecientes. Es un sistema que se retroalimenta y que requiere la llamada 'sociedad de consumo': no puede haber 'Estado de bienestar' sin 'sociedad de consumo'. Esto lleva a que el control social se oriente a quienes no responden a las pautas de consumo y de producción ('disidentes occidentales', como pueden ser los 'hippies', las 'contra-culturas', las 'sectas' auto-suficientes, etc.). Todas estas suelen ser consideradas manifestaciones patológicas. (Zaffaroni, 1991:266)*

Como se observa, según la explicación que desarrolla Zaffaroni, en el Estado Social de Europa se presentan ideologías sobre el tratamiento al delincuente partiendo de un análisis psicopatológico del fenómeno criminal.

La ideología del tratamiento de la que se

valió el Estado intervencionista en Europa fue parte, pues, de una tendencia terapéutica que terminó fracasando.

### 1.2.3 Estado Totalitario y Derecho Penal

Ahora bien, como lo expresa Mir, el principio intervencionista, como rector del Estado Social, condujo en algunos países a un Derecho Penal preocupado por la eficacia de sí mismo, es decir, del propio Estado, que por servir a todos los ciudadanos.

En algunas naciones que adoptaron el modelo de Estado intervencionista la función de la pena se desnaturalizó, se transformó en una pena que buscaba el terror como medio de garantizar la eficacia del Estado mismo, la pena ya no consistía en un medio para proteger a la sociedad mediante su fin preventivo, sino fue aplicada directamente como arma contra ella. Esto sucedió en los estados totalitarios.

Es decir, en los estados relativamente totalitarios, la función del Derecho Penal y por consiguiente, de la pena, estuvo al servicio de la tutela o protección del Estado y no de la comunidad.

El Derecho Penal totalitario del nazismo, se desarrolló en varias leyes promulgadas. Sobre ello, Zaffaroni explica:

*Por ley de 1933 se penó el mero 'proyecto' de varios delitos, extendiéndose la punibilidad más allá de los actos preparatorios. En 1935 se otorgó a los jefes del partido la misma protección que a los del gobierno (la ley de 1933*

*Gilberto Sandoval Marín*  
ABOGADO Y NOTARIO

HOJAS

DE

13

35







penaba con muerte 'proyectar' su homicidio). En 1936 se penó con confiscación al alemán que sacase bienes de Alemania o las mantuviese afuera. Se penaron las relaciones sexuales de ario con judío y las violaciones de las prescripciones minuciosas para contraer matrimonio con 'medio judíos' [...] En 1933 se introdujo la esterilización como 'medida de seguridad', y en el mismo año la castración para ciertos delitos sexuales. (Zaffaroni, 1991:288)

#### 1.2.4 Estado Social y Democrático de Derecho y Derecho Penal

Lo manifestado con anterioridad, debe ser superado en el Estado Social y Democrático de Derecho, ya que no puede concebirse un Estado que, preocupado por su propia eficacia, utilice la pena como medio de terror para protegerse a sí mismo o a un determinado grupo social, mediante la segregación de los demás. El Derecho Penal a través de la pena debe tener la función de protección de los individuos que conforman la sociedad. Dicho en otras palabras, la pena debe emplearla el Estado en beneficio de la sociedad, resguardándola de los delitos, en virtud que ello es parte de la función preventiva de la pena. No debe utilizarla contra la población, porque así, su función preventiva se pierde y se convierte en terror.

Mir, concretamente efectúa el siguiente planteamiento:

*El Derecho Penal de un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que*

*debe conducirla por y para los ciudadanos. Ello podría concretarse del siguiente modo: 1º El Derecho penal de un Estado social y democrático debe asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado social), entendidos como aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañinos para sus bienes jurídicos, 'bienes' no en un sentido naturalista ni ético-individual, sino como posibilidades de participación en los sistemas sociales fundamentales, y en la medida en que los mismos ciudadanos consideren graves tales hechos (Estado democrático). Un tal Derecho Penal debe, pues, orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y culpabilidad. (Mir, 1982:29)*

La función de la pena en un Estado Social y Democrático de Derecho debe cumplir una función preventiva de los delitos, pero partiendo de considerar como tales aquellas conductas lesivas de lo que la propia sociedad ha determinado como sus bienes jurídicos. Es decir, no lo que el Estado considere dañino, sino lo que la Sociedad estime perjudicial gravoso para sus bienes jurídicos. Entendiendo como bienes jurídicos aquellos presupuestos necesarios para el desarrollo y autorrealización del individuo en la vida social: vida, libertad, seguridad, salud, alimentación, patrimonio, libertad.

Por ello, el Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho, debe ser fruto o producto del consenso social, es decir, de los individuos a quienes va dirigido y no producto de una mera y simple intimidación del Estado. Bajo esa premisa, debe fundamentarse la prevención general como función de la pena. El Derecho Penal no puede ser una simple creación del Estado, menos aún una creación estatal dirigida contra la sociedad. Por el contrario, el Derecho Penal debe ser fruto de lo que la colectividad valorativamente considere lesivo para su convivencia pacífica, que impida su desarrollo y autorrealización en la vida social; por ello, su fin dentro de un Estado Social y Democrático va encaminado a la protección de la población, mediante la prevención de los delitos.

Mir, aclara con toda propiedad lo manifestado con anterioridad:

*Por lo que la prevención general no puede perseguirse a través de la mera intimidación que supone la amenaza de la pena para los posibles delinquentes, sino que ha de tener lugar satisfaciendo la conciencia jurídica general mediante la afirmación de las valoraciones de la sociedad. La fuerza de convicción de un Derecho Penal democrático se basa en el hecho de que sólo usa de la intimidación de la pena en la medida en que con ella afirme a la vez las convicciones jurídicas fundamentales de la mayoría y respete en lo posible las de las minorías. Un Derecho penal democrático ha de prevenir no sólo con el miedo al castigo, sino poniendo la pena al servicio del sentimiento jurídico del pueblo. (Mir, 1982:31)*

De lo explicado por Mir, dos son los aspectos que debe adoptar la prevención general en el Derecho Penal de un Estado Social y Democrático de Derecho: junto al aspecto de prevención intimidatoria debe concurrir el de una prevención general estabilizadora o integradora.

Por eso, Muñoz y García, bien han dicho:

*El Derecho penal como conjunto normativo cumple una función de mantenimiento y protección de un sistema de convivencia y sólo dentro del sistema y desde ese sistema puede explicarse. La función de la norma penal, como la de cualquier institución, sólo puede comprenderse, pues, en referencia a un sistema social de convivencia. (Muñoz y García, 1998:63)*

De ahí que, si el Derecho Penal lleva a cabo una función de mantenimiento y de protección de la convivencia social, no debe ser creado para ser utilizado contra la sociedad, como sucede en los estados totalitarios, empleado como instrumento de terror, sino a favor de la colectividad a efecto de mantener su convivencia pacífica. Esto depende y tiene íntima relación, como se ha manifestado al inicio del presente capítulo, con la ideología política del Estado. En eso coinciden los autores en mención y Mir, pues de acuerdo a la función que tenga asignado el Estado, así será la función del Derecho Penal y por ende, de la pena.

La pena no puede convertirse en un mecanismo de terror para la sociedad, por el contrario, debe ser un medio de





calma para sus miembros, por cuanto mediante su función preventiva se busca la protección de su convivencia social.

Siguiendo la tesis planteada por Mir, el Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho debe fundamentarse en la proporcionalidad de las penas.

Cobo y Vives, indican:

*El principio de prohibición de exceso o de proporcionalidad (en sentido amplio) aparece como un límite al poder de policía, para luego generalizarse hasta convertirse en un principio general del Derecho público, que rige el establecimiento y aplicación de toda suerte de medidas restrictivas de los derechos y libertades. (Cobo y Vives, 1999:81)*

Los citados autores afirman que el fundamento de dicho principio se ha situado por algunos autores en el derecho natural, mientras que otros lo vinculan a normas de carácter positivo, bien sean ordinarias o constitucionales.

Constitucionalmente el fundamento de este principio limitativo del Derecho del Estado, se encuentra previsto en los artículos 2o, 18, 19 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, normas que si bien no lo reconocen como medio de restricción de penas excesivas, de manera indirecta prohíben la desproporcionalidad punitiva. En el artículo 2o, porque se establece como deber del Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad y la justicia. En la medida en que

una pena no guarde proporción con el delito cometido, puede incidir en la vida y en la libertad de las personas, verbigracia, la pena de muerte o las penas de prisión con larga duración para sancionar hechos con mínima repercusión social.

En el artículo 18 constitucional, también el constituyente tuvo el cuidado de prever como límite del poder punitivo del Estado, la prohibición de aplicar la pena de muerte en los siguientes casos: con fundamento en presunciones, a mujeres, a quienes sean mayores de sesenta años, a los reos de delitos políticos y comunes, conexos con los políticos y a los reos cuya extradición haya sido concedida, bajo la condición de no imponer la pena de muerte en caso de condena.

También en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, se establece como norma mínima del Sistema Penitenciario para lograr la readaptación social y la reeducación de los reclusos, la prohibición de no infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerlas víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos.

Por último, debe incluirse el principio de proporcionalidad en el artículo 46 constitucional, en la medida que la norma establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno, pues el

principio de prohibición de exceso ha sido reconocido en convenciones que igualmente prohíben penas degradantes o inhumanas, tales como las convenciones sobre la prohibición de torturas y tratos crueles.

El principio de proporcionalidad con relación a las penas, consecuencias jurídicas del delito, debe ser tomado en cuenta en una doble vertiente, pues no sólo le corresponde al juez observarlo cuando individualiza la pena decidida a imponer al justiciable, sino también, y aquí es muy importante su consideración, cuando el legislador establece la sanción en el tipo penal. Esto último, tiene suma relevancia por cuanto de nada serviría exigir al juez la observancia de dicho principio, si en la ley se encuentra la pena mínima desproporcionadamente alta. Es decir, en el sistema guatemalteco opera el sistema del límite mínimo y máximo de la pena, pero si en un delito determinado el legislador dejó establecido el mínimo excesivamente elevado, no podría exigírsele al juzgador la observancia del principio de proporcionalidad, pues la ley sería la desproporcional.

De esa cuenta, si las leyes prevén penas draconianas, la observación judicial del principio de proporcionalidad al momento de su individualización en un caso concreto, resulta ilusoria.

Muñoz y García, refiriéndose al principio de proporcionalidad, exponen:

*El primer criterio que se debe utilizar para determinar la gravedad de la pena que se debe imponer a un determinado*

*delito es, desde luego, la importancia del bien jurídico, dado que éste es el principal fundamento de la intervención del Derecho Penal. De ahí, por ejemplo, que los delitos contra la vida, sean los que se castiguen más severamente en los Códigos Penales. La gravedad de la pena depende, además, de la forma de ataque al bien jurídico. Así, por ejemplo, un ataque doloso a la vida es mucho más severamente castigado (por ej., como asesinato), que uno o varios ataques imprudentes al mismo bien jurídico (por ej., diez homicidios por imprudencia a consecuencia de un accidente de tráfico). La diferenciación no se hace en estos casos cuantitativa, sino cualitativamente, es decir, en función del desvalor ético-social del comportamiento realizado. (Muñoz y García, 1998:93)*

De ahí la importancia de controlar en la creación o en la reforma de los tipos penales que la proporcionalidad de la sanción con la gravedad del bien jurídico protegido que se lesiona, a efecto de no atentar contra la propia función de la pena en el Estado Social y Democrático: la protección tanto de las mayorías como de las minorías. Un Derecho Penal que castigue la lesión a bienes jurídicos con penas que no guarden proporción con la importancia de los mismos no cumple realmente su cometido, en lugar de ser preventivo y re socializador, se transforma en retributivo o en un Derecho que impone el terror con penas excesivas, impidiendo la reeducación y resocialización del autor.

15 DE 35 HOJAS

Silvia Gómez Morán  
ABOGADO Y NOTARIO





Mir señala como segundo aspecto necesario en el Derecho Penal de corte democrático, el siguiente:

*...2º Un Derecho penal democrático de Derecho debe desarrollarse con estricta sujeción a los límites propios del principio de legalidad, tanto en su vertiente formal -sólo pueden establecer delitos y penas, disposiciones dotadas de rango de ley (que ahora debe ser orgánica) anteriores al hecho enjuiciado, como en su realización material 'exigencia de determinación'- de las proposiciones jurídico-penales. (Mir, 1982:33)*

El principio de legalidad constituye como, lo ha señalado Mir, un freno al poder de punición que tiene el Estado. El Estado Social y Democrático debe velar efectivamente porque su Derecho Penal objetivo emane del Congreso de la República, porque los hechos que se castiguen estén previamente establecidos, así como sus respectivas penas.

Su base jurídica se la dio Feuerbach, quien también le dio su formulación latina *nullum crimen, nullapoena sine lege*.

No puede concebirse la prevención de los delitos mediante la respectiva amenaza penal, si previamente el Estado mediante el Organismo Legislativo no ha definido, fruto del consenso social, cuáles son las conductas prohibidas y cuáles son sus consecuencias jurídico-penales.

Es decir, interpretando en su sentido integral el principio de legalidad, el

Derecho Penal objetivo o positivo no sólo debe ser una creación previa del Congreso de la República, sino también producto de lo que la sociedad considera valorativamente dañino para sus bienes jurídicos.

Por eso, coincido con Mir, en que el Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho debe tener como principio rector, al de legalidad.

Muñoz y García, abordan el estudio de este principio, al que denominan principio de intervención legalizada:

*La gravedad de los medios que el Estado emplea en la represión del delito, la drástica intervención en los derechos más elementales y, por eso mismo, fundamentales de las personas y el carácter de última ratio que esta intervención tiene imponen necesariamente la búsqueda de un principio que controle el poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o ejercen ese poder punitivo. Este principio, tradicionalmente designado con el nombre de «principio de legalidad», establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el «imperio de la ley», entendida ésta como expresión de la «voluntad general». (Muñoz y García, 1998:94)*

El principio de legalidad encuentra su apoyo legal y constitucional en el artículo 1o del Código Penal y 17 de la Constitución Política de la República de

Guatemala, a la vez que forma sustento del principio de seguridad jurídica, desde el momento en que conforme él únicamente constituye delito o falta la conducta prevista como tal por una ley anterior a su perpetración. En efecto, la seguridad jurídica sólo puede alcanzarse en la medida en que el Estado haga saber, previamente, a sus habitantes, mediante las leyes penales, las conductas delictivas estimadas contrarias a la convivencia pacífica de la sociedad y las penas respectivas a imponer.

Se comprende así la estrecha relación entre principio de legalidad, seguridad jurídica y prevención general.

En ese sentido, sólo se puede calificar como delito lo que la ley previamente ha calificado como tal y sólo se puede imponer una pena que esté fijada con anterioridad por la ley para el delito cometido.

De esa cuenta, todas las leyes penales que no sean creadas por este procedimiento infringen el espíritu del principio de legalidad.

Muñoz y García, expresan:

*La segunda de las características del Estado de Derecho: la división de poderes, sirve de base técnica al principio de intervención legalizada. Esta división de poderes garantiza el principio de legalidad penal, repartiendo el poder punitivo estatal entre el legislativo, que se encarga de determinar los delitos y las penas a través de un proceso democrático en el que participan los representantes del pueblo, y el judicial,*

*que se encarga de su aplicación en el caso concreto. (Muñoz y García, 1998:98)*

Se puede advertir con lo expresado, que el principio de legalidad en el Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho coadyuva con la función de protección de la sociedad.

Finalmente, Mir señala como tercer aspecto necesario que debe observar el Derecho Penal propio de un Estado Social y Democrático de Derecho, el siguiente:

*El planteamiento democrático no sólo debe servir a la mayoría, sino también respetar y atender a toda minoría y todo ciudadano, en la medida en que ello sea compatible con la paz social. Desde esta perspectiva el Derecho penal no sólo debe defender de los delincuentes a la mayoría, sino que ha de respetar la dignidad del delincuente e intentar ofrecerle alternativas a su comportamiento criminal. Lo primero impide la imposición de penas incompatibles con la sensibilidad de nuestro momento histórico: torturas, muerte (art. 15 de la Constitución española). Lo segundo obliga a ofrecer al condenado posibilidades para su resocialización y reinserción social (art. 25 de la Constitución española). (Mir, 1982:33)*

El planteamiento de Mir, es acorde a lo que se espera del Derecho Penal dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, pues propone como apoyo a su función, que sirva no solo para defender a la sociedad de los delincuentes, sino también a que los condenados



*Silvia Gómez Marín*  
ABOGADO Y NOTARIO

14 DE 35 HOJAS





tengan una expectativa de resocialización mediante una pena adecuada para su readaptación social. Tal resocialización debe buscarse no solo al momento de determinarla el legislador, conforme a lo dicho sobre la proporcionalidad, sino también en la ejecución de la condena.

La tesis formulada por Mir, favorece a lo que se puede estimar Derecho Penal de un Estado Social y Democrático de Derecho, con la función principal de proteger a los ciudadanos de la comisión de los delitos y tutelar también al delincuente al aplicarle la pena. Protección que se espera mediante la prevención de los delitos, cuya función es de la pena. Pero, como lo ha expresado Mir, lo que interesa y posibilita que la función de la pena cumpla con proteger a la sociedad mediante la prevención de los delitos, es precisamente su orientación con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad.

Si no se orientara con arreglo a dichos principios, en nada se diferenciaría del Estado Totalitario, pues en éstos también se busca la prevención de los delitos.

Esos principios se convierten a la vez en límites de la facultad punitiva del Estado y gracias a su observancia, es que el Estado Social y Democrático de Derecho se diferencia de un Estado Totalitario.

Mir puntualiza:

*En el Estado social y democrático de Derecho sancionado en el artículo 1º, 1, de la Constitución, el ejercicio del poder y, por tanto, del poder penal sólo pueden concebirse como exigencias de una política social al servicio de los ciudadanos: El Derecho Penal sólo puede intervenir cuando resulte absolutamente necesario para proteger a los ciudadanos. (Mir, 1982:37)*

La función de la pena dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, está orientada a la prevención de los delitos. La prevención, tanto general como especial de la pena, tiene como finalidad evitar delitos como forma de protección de la comunidad.

## Conclusiones

El Derecho Penal es un medio institucionalizado de control social, el cual debe enfocarse al mantenimiento y protección de la sociedad.

El Estado debe perseguir la prevención de los comportamientos que dañen gravemente a la sociedad, así como la readaptación y rehabilitación de los agresores, observando su dignidad como seres humanos.

## Referencias

### Libros

- Bacigalupo, Enrique (1989). *Manual de Derecho Penal*, Parte General. Bogotá, Colombia: Temis.
- Cobo del Rosal, Manuel y otro (1999). *Derecho Penal*, Parte General. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
- Mir Puig, Santiago (1982). *Función de la Pena y Teoría del Delito en el Estado Social y Democrático de Derecho*. Barcelona, España: Bosch.

- Muñoz Conde, Francisco y otro (1998). *Derecho Penal*, Parte General. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
- Zaffaroni, Eugenio (1991). *Manual de Derecho Penal*, Parte General. México: Cárdenas Editor y Distribuidor.

### Legislación

Constitución Política de la República de Guatemala.  
Código Penal de la República de Guatemala.

17 DE 35 HOJAS

*Silvia Gómez Marro*  
ABOGADO Y NOTARIO

60  
r

3

# TERCERA INSTANCIA



18 DE 35 HOJAS

  
Gilberto Gómez Moroy  
ABOGADO Y NOTARIO





61

Octubre 2006

TERCERA INSTANCIA

Número 3

## ÍNDICE

Orígenes de las Desapariciones Forzadas en Guatemala .....	5
Un acercamiento al Sistema Jurídico Japonés .....	2
Derechos Humanos de las Víctimas de la Delincuencia Común .....	2
Acerca de los Límites al Poder Punitivo del Estado .....	27
Segmentos de Historia de la Integración Centroamericana .....	36
Inexistencia del Acto Jurídico .....	46
Control Constitucional de las Leyes y el Bloque de Constitucionalidad .....	54
Tratado versus Convención .....	62
Ley de Educación Nacional: lo que no se dice .....	69
La Relación Jurídica .....	77
Requisitos y Trámite para obtener la autorización para la Constitución de Bancos Privados Nacionales .....	85
Pandillas Juveniles y Seguridad Humana con Énfasis en Seguridad Ciudadana: Una Propuesta desde la Sociedad Civil .....	91
Perspectivas del Matrimonio Musulmán .....	99
El Estado Guatemalteco y las Principales Políticas Antimonopólicas .....	107

Consejo Editorial: Marco Antonio Cornejo Marroquín / Marco Vinicio Mejía Davila / Marvin Rabanales García. Edición: talleres graficos de Publicidad Impresa / La Antigua Guatemala / Guatemala, Latinoamérica. Tirada: 250 ejemplares



*Liberto Gómez Marroquín*  
ABOGADO Y NOTARIO

35 DE 19 HOJAS

# TRATADO VERSUS CONVENCION

Héctor Ricardo Echeverría Méndez

## NOCIÓN PREVIA.

El Derecho Internacional se puede decir que es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los Estados, y otros sujetos de derecho internacional. El derecho en mención se encuentra integrado, verbigracia, por tratados o convenios internacionales, a través de los cuales los Estados adquieren derechos y contraen obligaciones. Resulta oportuno acotar que el artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 define al tratado como "un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular"<sup>1</sup>. Ahora bien, la convención internacional es un "acuerdo entre dos o más Estados para resolver y regular la ejecución y desarrollo de sus relaciones sobre materias de interés recíproco"<sup>2</sup>. De ambas definiciones se puede concluir que ambas persiguen un acuerdo entre Estados que tienen como finalidad la de regular y desarrollar temas de interés recíproco.

Debido a la interdependencia cada vez mayor que guardan los países, ha proliferado los tratados y convenciones internacionales, instrumentos jurídicos que como bien se señaló, se pueden asimilar a los contratos, ya que se originan de la voluntad y consentimiento, teniendo como finalidad el alcanzar objetivos comunes de cada uno. En esa línea de lograr objetivos, se suscribió el Tratado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre cumplimiento de sentencias penales; y, posteriormente, la suscripción de la Con-

<sup>1</sup> Larios Ochaíta, Carlos "Derecho Internacional Público", Volumen 1, Editorial Llerena, Quinta Edición, 1998, página 87.

<sup>2</sup> Ossorio, Manuel "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales", Editorial Heliasta, 1981, página 175.

vención Interamericana para el cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero. Esa doble suscripción entre ambos Estados ha generado discusión jurídica sobre los alcances y aplicabilidad de cada una de ellas.

## DELITO, PROCESO, PENA Y EJECUCIÓN.

El Derecho Penal como conjunto normativo, según Muñoz Conde y García Arán, cumple una función de mantenimiento y protección de un sistema de convivencia social<sup>3</sup>. La norma penal la crea el Estado para garantizar a sus habitantes la paz, siendo en ese sentido delito la conducta que el Estado a través del legislador sanciona con una pena. Cuando un habitante realiza la conducta sancionada por el legislador, el Estado lo juzga e impone una pena, la cual deberá ser cumplida. Dicha sanción es la primera y principal consecuencia jurídica del delito, desde el punto de vista de Mapelli Caffarena y Terradillos Basoco<sup>4</sup>.

Eugenio Cuello Calón, citado por Gerardo Landrove Díaz señala que la pena puede ser caracterizada como "la privación o restricción de bienes jurídicos impuestos conforme a la ley, por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracción penal"<sup>5</sup>.

Los fines de la pena se fundamentan en las siguientes teorías, según el autor Landrove Díaz<sup>6</sup>:

- a) **Teorías Absolutas:** señalan que la esencia de la pena es la compensación, concebida como reparación o retribución.
- b) **Teorías Relativas:** aceptan que la pena es esencialmente un mal, pero indican que resultaría absurdo e inhumano aplicar una pena sin perseguir otras finalidades, siendo así la prevención general para la colectividad y la prevención especial, la incidencia en el delincuente.
- c) **La Nueva Defensa Social:** 1) al delincuente no se le somete a la justicia penal con un fin de expiación, venganza o retribución (no represivo); 2) la política criminal está orientada al tratamiento del delincuente, con la finalidad de devolverlo a una vida social libre y consciente; 3) busca alcanzar la resocialización del delincuente. 4) reorganización del sistema penal actual.

Ahora bien ya habiendo sido impuesta la pena y conociendo sus fines, esta debe ser cumplida, para lo que es necesario el Derecho Penal Ejecutivo, enten-

<sup>3</sup> Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes "Derecho Penal, Parte General", Editorial Tirant lo Blanch, Tercera Edición, 1998, página 34.

<sup>4</sup> Mapelli Caffarena, Borja y Terradillos Basoco, Juan "Las Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Civitas, Tercera Edición, 1996, página 29.

<sup>5</sup> Landrove Díaz, Gerardo "Las Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Tecnos, Tercera Edición, 1991, página 19.

<sup>6</sup> Landrove Díaz, Gerardo "Las Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Tecnos, Tercera Edición, 1991, páginas 20 y siguientes.





32 diéndose en nuestro medio como el Sistema Penitenciario, el cual es definido por los autores Muñoz Conde y García Arán como "el conjunto de normas que regulan el funcionamiento interno de las prisiones, orientadas a una determinada concepción sobre los fines que debe lograr la privación de libertad"<sup>7</sup>.

Resulta extraño hablar del derecho penal dentro de un tema de derecho internacional, pero de verdad no lo es, ya que para posibilitar la aplicación tanto del tratado o de la convención, en su caso, es necesario que se encuentre una persona cumpliendo una condena proveniente de la comisión de una acción que revisó caracteres de delito en uno de los estados partes.

### ORDENAMIENTOS INTERNOS.

#### GUATEMALA:

La Constitución de la República, contempla en sus artículos 12, 19, 46 y 203 que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Asimismo, regula que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, correspondiendo a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado; el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos.

El Código Procesal Penal, establece en sus artículos 51, 492, 493, 494, 495 y 498 que el juez de ejecución tendrá a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione, debiendo al momento de recibir la sentencia condenatoria firme, revisar el computo practicado en la sentencia que impuso una pena de privación de libertad, estableciendo el computo definitivo de cumplimiento, el cual mandará a notificarlo al Ministerio Público, Condenado y Defensor, concediéndoles el plazo de tres días para que manifiesten su oposición, con o sin ella resuelve en definitiva. El Ministerio Público, el condenado y su defensor, podrán plantear incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena, los cuales serán resueltos por el juez de ejecución.

En la actualidad no se cuenta en Guatemala con una Ley del Sistema de Penitenciario, para el control de todas las personas que se encuentren privadas de libertad, tanto preventiva como de cumplimiento de condena, siendo la Dirección General del Sistema Penitenciario, la encargada de velar por el cuidado y protección de dichas personas que por alguna causa son aprehendidas e ingresadas a los centros designados. Regulándose dichos centros a través de Acuerdos Gubernativos.

<sup>7</sup> Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes "Derecho Penal, Parte General", Editorial Tirant lo Blanch, Tercera Edición, 1998, página 607.

#### MÉXICO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en sus artículos 17 y 18 que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, garantizándose la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. También se contempla que los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren cumpliendo penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de trabajo, capacitación y la educación como medios para la readaptación social del mismo, así también los reos de nacionalidades extranjeras sentenciados por delitos del orden federal en toda la República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de origen o residencia, sujetándose a los Tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Dicho traslado se realizará sólo podrá efectuarse con el consentimiento expreso del reo.

El Código Federal de Procedimientos Penales señala en su artículo 5 que el procedimiento de ejecución, el Poder Ejecutivo, por conducto de del órgano que la ley determine, ejecutará las penas y medidas de seguridad decretadas en las sentencias de los tribunales hasta su extinción; y el Ministerio Público cuidará de que se cumplan debidamente las sentencias judiciales.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, contempla en sus artículos 2 y 55 que se resolverán los conflictos internos a través del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz.

El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco señala en su artículo 8 que corresponde a los tribunales del Estado de Tabasco, según la organización y competencia prevista por la ley, resolver sobre los delitos del orden común cometidos en esa entidad federativa, conforme a la pretensión planteada por el Ministerio Público, y aplicar las sanciones que procedan en el caso concreto.

La Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Tabasco indica en su artículo 4 que corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General, la ejecución de las sanciones penales, así como la coordinación en el control de las instituciones de prevención y tratamiento del interno y la atención científica que se le otorgue desde el momento de su aprehensión, salvo las que se expresamente se reserven para otra autoridad.

#### ORDENAMIENTO INTERNACIONAL.

Tratado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Sobre el Cumplimiento de Sentencias Penales: El Tratado en referencia se encuentra inspirado en facilitar la readaptación de los





reos, permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del cual son nacionales.

El Tratado consta de 25 artículos, dentro de los cuales se regulan el compromiso de concederse la cooperación más amplia en la materia de cumplimiento de sentencias penales de personas condenadas a privación de libertad o a medidas de seguridad, los fines del tratado, los requisitos que deben observarse para formularse la solicitud de traslado, autoridades coordinadoras para cada Estado, las condiciones en que se aplicará el tratado, ante qué autoridad se presenta la solicitud de traslado, acceso a la información sobre gestiones realizadas, deberes de los Estados, medidas legislativas, derechos de los trasladados, entre otros.

El veintiuno de abril de dos mil seis, se efectuó el traslado de 23 personas que se encontraban cumpliendo condenas en la República de México, una de ellas en el estado de Tabasco, bajo el amparo del tratado en mención, realizándose los pasos siguientes en el trámite:

1. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, remite al Juez de Ejecución para el conocimiento y efectos subsiguientes los expedientes enviados por el Director General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. El Juez de Ejecución recibió los expedientes y analizó de conformidad con lo establecido en el Tratado entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Cumplimientos de Sentencias Penales.
3. El Juez de Ejecución confirma vía telefónica y fax la nacionalidad de las personas en las municipalidades respectivas.
4. El Juez de Ejecución dicta resolución por medio de la cual declara procedente la solicitud de traslado.
5. El día de la recepción de las personas el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos entrega los procesos de traslado originales con los pases de ley respectivo, los informes médicos que se practicaron y a las personas, se elabora el acta de traslado, siendo suscrita por las autoridades mexicanas y guatemaltecas, la cual origina la decisión del Juez de Ejecución señalarle a los condenados el Centro donde cumplirán las penas impuestas.
6. El Juez de Ejecución emite resolución del computo de la pena correspondiente, así como los oficios en donde informa al centro de cumplimiento de condena la pena impuesta, el delito, a la Unidad de Antecedentes Penales del Organismo Judicial, para realizarse las anotaciones respectivas, así como al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
7. Posteriormente se notifican las resoluciones al Ministerio Público y Defensa

Pública para aprobar el cómputo respectivo y si ya tuvieran derecho a algún beneficio esperar que se inicie el incidente respectivo.

### CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO:

La Convención en mención se origina del buen deseo de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de cooperar para asegurar una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación social de las personas sentenciadas

La Convención contiene de 19 artículos, dentro de los cuales se regulan las definiciones de tópicos relacionados con la convención, principios generales, condiciones para la aplicación de la convención, suministro de información, procedimiento para el traslado, negativa de traslado, derechos de las personas trasladadas, forma de cumplimiento de la sentencia, revisión de la sentencia y efectos en el Estado receptor, aplicación de la convención en casos especiales, tránsito, autoridades centrales, alcance de la convención, entre otros.

### COMENTARIOS SOBRE PUNTOS RELEVANTES DEL TRATADO Y CONVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTOS DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO Y LEGISLACIÓN INTERNA ENTRE EL ESTADO DE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El Tratado y la Convención tienden a complementarse y no a contraponerse, como se hace pensar el nombre del título del presente trabajo, tal como se señala en el artículo 12 de la Convención, el cual establece "Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las partes".

La intención del Tratado, como de la Convención, es la de readaptar y rehabilitar a las personas condenadas, lo cual estimo que resultan deseos y no realidades, toda vez que el ordenamiento interno guatemalteco lo señala formalmente, pero al ser contrastados con la realidad de las cárceles, es fácil advertir que las mismas no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para que los reclusos logren su retorno a su comunidad.

El artículo 4 numeral 2 del Tratado, dispone como Autoridades Coordinadoras para Guatemala al Organismo Judicial y al Ministerio de Gobernación. Respecto al Organismo Judicial en materia penal, se encuentra integrado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, Salas de las Cortes de Apelaciones, Tribunales de Sentencia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Ejecución y Juzgados de Paz, correspondiéndoles a cada uno determinada competencia. En el presente caso, estimo que corresponde a un Juez de Ejecución ser la Autoridad Coordinadora y no a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que a dicha judicatura es a la que corresponde, en el Estado de Guatemala, la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione (ver artículos 51, 492, 493, 494, 495 y 498 del Código Procesal Penal), debiendo limitarse la Cámara a recibir y trasla-





dar las solicitudes al Juez de Ejecución para que resuelva lo procedente.

La Autoridad Central para Guatemala en la Convención es la Corte Suprema de Justicia<sup>8</sup>, lo cual no considero idóneo, en virtud que estimo que misma a tenor de la Convención, no pasará de ser un ente de recepción y traslado de las solicitudes, toda vez que en el Estado de Guatemala al Juez de Ejecución corresponde la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione (ver artículos 51, 492, 493, 494, 495 y 498 del Código Procesal Penal).

El Tratado como la Convención señalan (artículos 17 y 8 respectivamente) que el Estado Traslادante mantendrá jurisdicción exclusiva, respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole y que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales, lo cual considero que al ingresar la persona condenada se sujeta a la legislación del Estado receptor, ya que si no fuera así se vulneraría la soberanía del Estado, toda vez que se pierde la decisión que el mismo debe ejercer en su territorio. En ese orden de ideas, para Guatemala resulta violatorio a los artículos 141, 142 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Para concluir tanto el Tratado como la Convención demuestran –para Guatemala- la necesidad de crear una ley de ejecución de sentencias provenientes del extranjero en materia penal, o bien incluir un apartado al Código Procesal Penal, ya que no cuenta con un ordenamiento que haga claro y ágil el traslado de personas condenadas en el extranjero en materia penal. Además de crear una Ley del Sistema Penitenciario que cumpla con los fines contenidos en el artículo 19 de la Constitución de la República de Guatemala.

#### BIBLIOGRAFÍA

##### LIBROS

1. Landrove Díaz, Gerardo "Las Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Tecnos, Tercera Edición, 1991.
2. Larios Ochaita, Carlos "Derecho Internacional Público", Volumen 1 Editorial Llerena, Quinta Edición, 1998.
3. Mapelli Caffarena, Borja y Terradillos Basoco, Juan "Las Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Civitas, Tercera Edición, 1996.
4. Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes "Derecho Penal, Parte General", Editorial Tirant lo Blanch, Tercera Edición, 1998.

##### DICCIONARIOS

1. Ossorio, Manuel "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales", Editorial, Heliasta, 1981.

<sup>8</sup> <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-57.html>

  
Gilberto González Marro  
ABOGADO Y NOTARIO



66



24 DE 35 HOJAS

*Gilberto Gómez Morán*  
ABOGADO Y NOTARIO



16 2

Julio 2006

TERCERA INSTANCIA

Número 2

*Pablo Gómez Morán*  
ABOGADO Y NOTARIO

## CONTENIDOS

Reflexiones sobre el Amparo .....	3
Antecedentes del Amparo y del Hábeas Corpus .....	7
Bases Constitucionales de 1823, Constitución Federal y sus reformas .....	13
Antecedentes de la Institución del Amparo (1872-1965) .....	20
Estatuto Fundamental de Gobierno hasta la Actualidad .....	25
Naturaleza Jurídica del Amparo .....	29
Presupuestos del Amparo .....	34
El Amparo y Vías a Agotar .....	42
Legitimación en el Amparo .....	50
La Acción del Amparo Preventivo .....	56
Funestas restricciones del Amparo Guatemalteco .....	63
Los Derechos Sociales como Instituciones Jurídicas .....	72
Eficacia del Amparo en los Derechos Humanos Sociales .....	76
Legitimación Activa del Procurador de los Derechos Humanos en Defensa de los Derechos Humanos .....	81
Bosquejo Histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos Sociales y el surgimientos del Amparo de estos Derechos .....	91
Los Derechos Humanos: Económicos, Sociales y Culturales y su tutela, por medio del Amparo .....	99
Conclusiones .....	110

HOJAS

DE

27

Consejo Editorial: Marco Antonio Cornejo Marroquín / Marco Vinicio Mejía Dávila / Marvin Rabanales García. Administración: Sandra Elizabeth Vargas Aldana. Correspondencia y Canje: Avenida Reforma 13-70 zona 9, Edificio Real Reforma, nivel 6, Ciudad de Guatemala. Correo Electrónico: sandra\_vargas747@hotmail.com. Editado en Guatemala, Latinoamérica.





## EFICACIA DEL AMPARO EN LOS DERECHOS HUMANOS SOCIALES

HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA  
MÉNDEZ

76

N

**Condiciones previas.**  
La naturaleza de los derechos humanos reposa en su íntima relación con el significado de dignidad de las personas, es decir, derechos que nacen o se desprenden de la condición de ser humano y que son imprescindibles para su desarrollo, en las condiciones que exige su naturaleza. Dichos derechos son, al mismo tiempo, las condiciones del desarrollo de esa dignidad.

Los derechos sociales son definidos por Castro Cid como "un conjunto de exigencias que los individuos o los grupos plantean a la sociedad y al Estado para que éstos les proporcionen los medios que hacen posible el disfrute de una existencia humana digna"<sup>42</sup>. El tratadista Contreras Peláez indica que los derechos sociales son "aquellos derechos en que se concreta, mediante diversos tipos de prestaciones, la colaboración de los poderes públicos en la satisfacción de las necesidades básicas"<sup>43</sup>.

### Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estos derechos tienen, como punto central, garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los

<sup>42</sup> Castro Cid, Benito. "Estado social y crisis de los derechos económicos, sociales y culturales". Revista Derechos y Libertades, Madrid, Año, III, febrero 1998, Universidad Carlos III-Boletín Oficial del Estado N6, página 22.

<sup>43</sup> Contreras Peláez, Francisco J. "Derechos Sociales: Teoría e Ideología". Madrid, Editorial Tecnos, 1994, página 47.

pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos; de allí que también sean denominados derechos de segunda generación. Se caracterizan porque requieren de la actuación del Estado para que los seres humanos puedan tener acceso a estos derechos, acorde con las condiciones económicas de cada sociedad.

La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada por las posibilidades reales de cada país; de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía entre un país desarrollado y otro en desarrollo. Se puede decir que estos derechos son programáticos, es decir, prescripciones que involucran una guía o programa que los estados deben acatar, pero sólo en la medida de sus posibilidades. Se puede exigir al Estado, en la medida de los recursos que efectivamente tenga, pero esto no significa en modo alguno que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones, el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. Sobre este tema deben verificarse los indicadores de desarrollo integral (desnutrición, niñez abandonada, analfabetismo, etcétera) en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos en razón de la justicia social.

Los derechos económicos, sociales y culturales, se pueden señalar, entre otros, los siguientes: derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la protección y asistencia a los menores y a la familia, derecho a la familia.

### Cuestiones generales de las políticas públicas.

Las políticas públicas pueden entenderse como el conjunto de decisiones por medio de las cuales se determina de manera ordenada y planificada los objetivos, las estrategias, las acciones y las responsabilidades para promover el bienestar de la población.

Las políticas públicas deben inspirarse en el pacto social, por el cual los gobernantes asumen la obligación de cumplir con las aspiraciones colectivas. La base de estas políticas está constituida por los principios constitucionales y específicamente por los derechos humanos y las obligaciones que éstos comprenden.

También se puede decir que la política pública es el resultado de un proceso de planteamiento o planificación que consiste, fundamentalmente, en explicitar ordenadamente las prioridades de la sociedad, asignar recursos en función a éstas, evaluar los resultados y hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía.

### Las políticas públicas con una visión de derechos humanos.

Las políticas públicas deben tener una visión de derechos humanos; a través de la misma es posible reafirmar que el ser humano es fin de cualquier política o decisión estatal, lo cual se encuentra acorde con que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común<sup>44</sup>. Se puede afirmar que la visión de los

<sup>44</sup> Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

26 DE 35 HOJAS

Edilberto Gómez Marro  
ABOGADO Y NOTARIO



77



derechos humanos implica un principio ético por el cual el Estado debe garantizar el respeto efectivo de los mismos, por medio de las políticas públicas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos..."<sup>45</sup>; además: "Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad"<sup>46</sup>. Se puede afirmar que la dignidad no es sólo un derecho humano, sino también un principio orientador general para la actividad de los órganos estatales privados.

### El Amparo como mecanismo eficaz en la defensa de derechos sociales.

Los seres humanos gozan por naturaleza de un conjunto de libertades básicas, es decir, le son inherentes a las personas. Esas libertades básicas requieren garantías para asegurar su disfrute y no verse restringidas o violadas.

Las garantías son el marco que asegura el libre goce y ejercicio de las libertades fundamentales y están especialmente diseñadas contra los agentes del Estado, que suelen ser sus principales violadores. Ese conjunto de libertades básicas y sus garantías constituyen los derechos de autonomía o de personalidad que se corresponden con los derechos civiles: derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad, al libre tránsito, etcétera.

Los derechos sociales son un conjunto de normas que obligan al Estado a prestar una serie de medios o servicios públicos dirigidos a las personas que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Es decir, se sostienen por la acción directa del Estado.

El Amparo representa el instrumento o garantía constitucional, dirigido a la tutela o protección de los derechos fundamentales de la persona, con excepción de la libertad individual. Resulta viable contra cualquier género de violación, generada por los poderes públicos hacia los derechos cívicos constitucionales o contenidos en otras leyes, que en su momento, el legislador constituyente consideró dignos de protección especial.<sup>47</sup>

La Constitución de la República de Guatemala, instituyó el Amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido; señalando expresamente que no existe ámbito que no sea susceptible de Amparo; procediendo siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos

<sup>45</sup> Artículo 1.

<sup>46</sup> Artículo 22.

<sup>47</sup> Sierra González, Arturo José. "Derecho Constitucional Guatemalteco", Piedra Santa, 2000, páginas 168 y siguientes.

que la Constitución y las leyes garantizan.<sup>48</sup> El artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, señala cuál es el objeto del Amparo, regulando dicho artículo varios supuestos en que procederá el Amparo.

El Amparo se instituyó para la protección de los derechos tanto individuales como sociales, como se puede extraer de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad: "...Nuestra Constitución agrupa los derechos humanos dentro del Título II de la misma, pero claramente se distingue que en el capítulo I, bajo acápite de Derechos Individuales, figuran los que la doctrina divide en civiles y políticos, mientras que en el Capítulo II, denominado Derechos Sociales, agrupa los derechos humanos que se conocen como económicos-sociales-culturales..."<sup>49</sup>

Dado lo extenso de los derechos sociales, me referiré específicamente al de la salud, contenido en el artículo 93 de la Constitución de la República de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ha manifestado, respecto a dicho derecho, que: "...Con gran amplitud la Constitución reconoce el derecho a la salud y a la protección de la salud, por el que todo ser humano pueda disfrutar de un equilibrio biológico y social que constituya un estado de bienestar en relación con el medio que lo rodea; implica el poder tener acceso a los servicios que permitan el mantenimiento o la restricción del bienestar físico, mental y social. Este derecho, como otros reconocidos en el texto, pertenece a todos los habitantes, a los que se garantiza la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los mismos. Constituye la prerrogativa de las personas de disfrutar de oportunidades y facilidades para lograr su bienestar físico, mental y social; y corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar su pleno ejercicio con las modalidades propias de cada país, lo que implica que el Estado debe tomar medidas adecuadas para la protección de la salud individual como colectiva, y que se pongan al alcance de todos, los servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Implica, también, que se adopten las providencias adecuadas para que los habitantes puedan ejercer este derecho y colaborar en la solución de los problemas de la salud general..."<sup>50</sup>

El Estado de Guatemala tiene la obligación de proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Si tomamos la doctrina dominante respecto a la vida dependiente, ésta inicia desde el momento de la anidación del óvulo fecundado en el útero materno<sup>51</sup>, lo cual nos lleva a reflexionar que el Estado debe implementar políticas públicas de prevención y curación de enfermedades.

El derecho humano social a la salud, no sólo se enmarca en prevenir enfermedades y curarlas, sino que debe ir más allá de ese simple marco, creando el Estado políticas públicas que tiendan a garantizar el bienestar físico y mental y satisfacer sus necesidades básicas, no solamente en

<sup>48</sup> Artículo 265.

<sup>49</sup> Gaceta No. 8, expediente No. 87-88, página No. 184, sentencia: 26-05-88.

<sup>50</sup> Gaceta No. 28, expedientes acumulados 355-92 y 359-92, página No. 19, sentencia: 12-05-93.

<sup>51</sup> Varios autores, "Tercera Instancia", Revista Jurídica, No. 1, enero 2006-junio 2006, página 60.



07  
lo individual, sino en lo colectivo. En ese sentido, el Estado de Guatemala no cumple con ese derecho, ya que el mismo es amenazado y violado, en virtud que como puede determinarse de los registros del Instituto Nacional de Estadística, éste señala que en el año 2004, de un total de 10,038, murieron por causa de síndrome diarreico agudo 873 niños<sup>52</sup>; incumpliendo el Estado con su labor de garantizar y proteger el derecho humano social a la salud.

El Amparo resulta medio eficaz para garantizar el derecho social a la salud, toda vez que el mismo se instaura para proteger a las personas contra la amenaza de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiere ocurrido. Ambos supuestos son casos en que procede el Amparo.

Resulta interesante preguntarnos: ¿contra qué autoridad pública se solicita el Amparo?; debiendo respondernos ante el poder público, que en el presente caso, es contra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por no implementar las políticas públicas necesarias para proteger y garantizar el derecho social a la salud.

Ahora, ¿quién es el sujeto legitimado para solicitar el Amparo?; respondiéndonos, el Procurador de Derechos Humanos, en virtud que tiene entre sus facultades, supervisar la administración pública, promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de derechos humanos, y promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que se procedente, entre otras<sup>53</sup>.

Para concluir, ¿qué deberá declarar la sentencia de Amparo? Estimo que, como puntos esenciales, están los siguientes: a) Dejar en suspenso la política pública que se esté implementando, la cual resulta deficiente; pero, si el Amparo fuera originado por la falta de una política, se ordenará elaborar una y llevarla a la práctica, fijándole las bases para la misma. Y fijar un plazo razonable para elaborar e implementar la política pública eficiente.

#### Bibliografía

Castro Cid, Benito. "Estado social y crisis de los derechos económicos, sociales y culturales", Revista Derechos y Libertades, Madrid, Año, III, febrero 1998, Universidad Carlos III-Boletín Oficial del Estado N6.

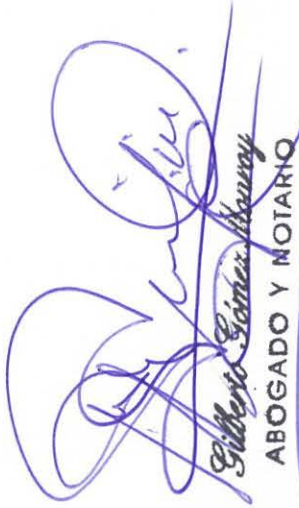
Contreras Peláez, Francisco J. "Derechos Sociales: Teoría e Ideología", Madrid, Editorial Tecnos, 1994.

Sierra González, Arturo José. "Derecho Constitucional Guatemalteco", Piedra Santa, 2000.

Varios autores, "Tercera Instancia", Revista Jurídica, No. 1, enero 2006-junio 2006.

<sup>52</sup> [http://www.ine.gob.gt/content/bol\\_sem/bol\\_9.html](http://www.ine.gob.gt/content/bol_sem/bol_9.html).

<sup>53</sup> Artículos 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

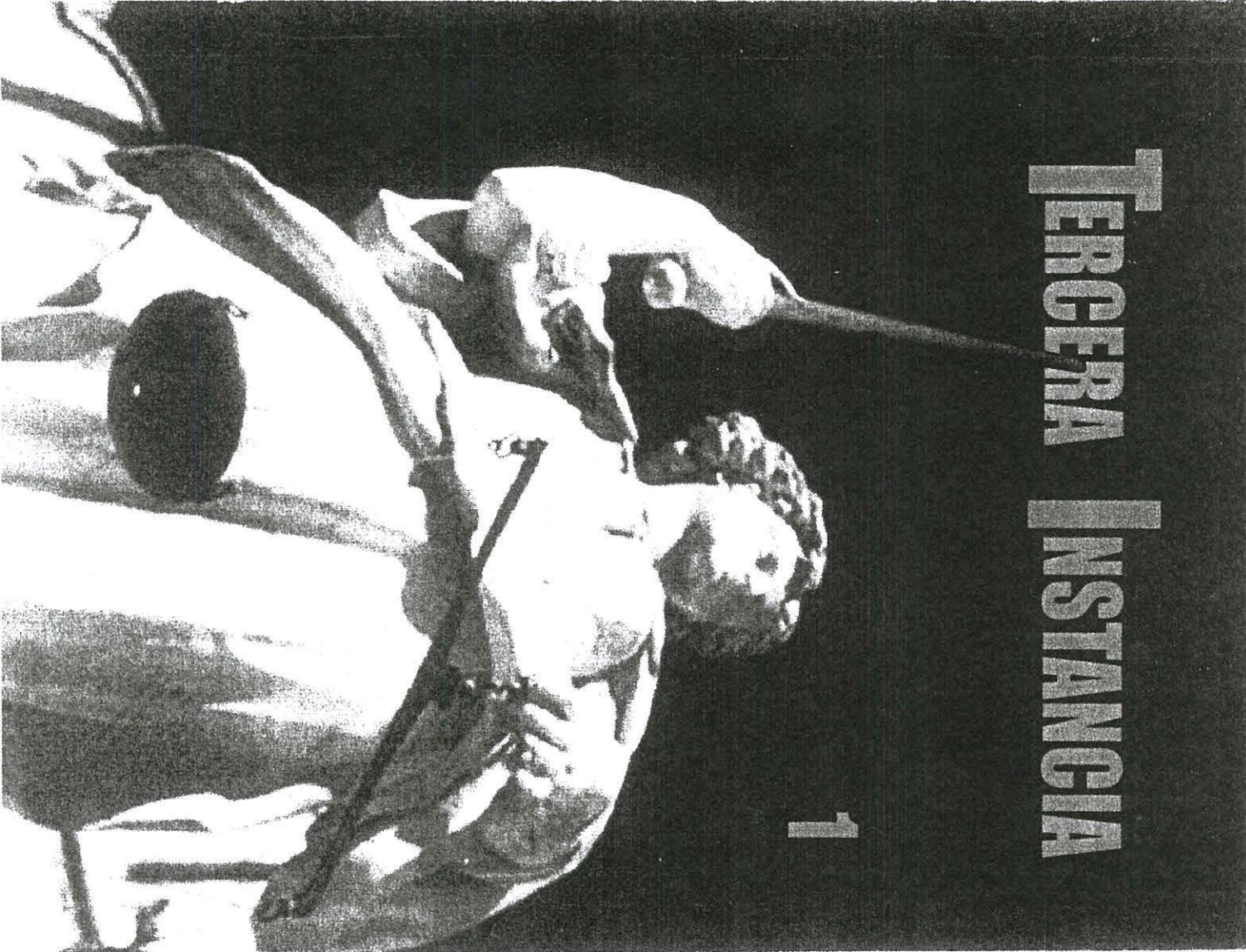
  
Gilberto Gómez Huay  
ABOGADO Y NOTARIO

28 DE 35 HOJAS





7/11/18



# TERCERA INSTANCIA

1



29 DE 35 HOJAS

Gilberto Gómez Morrey  
ABOGADO Y NOTARIO

72

CONTENIDOS

Limen .....	1
El impacto de los monopolios en Guatemala .....	2
Razonamientos por Analogía .....	11
La obediencia debida .....	20
América Latina frente al Derecho Internacional y Constitucional .....	28
Aspectos generales de la Adopción .....	39
Participación política de la Mujer Guatemalteca .....	47
Bienes Jurídicos protegidos en el Código Penal	
y en la Ley contra el Lavado de Dinero .....	57
Vertientes de la Lógica Jurídica: Historia y Naturaleza .....	64
Falacias No Formales. ....	70
Hábeas Data .....	77
Principios Generales del Proceso Penal .....	85
La Eficacia de los Derechos Humanos de la Niñez	
y Adolescencia en Guatemala .....	94
Del Tribunal Constitucional y de las consecuencias	
de su interpretación del Artículo 186. ....	104
Roscoe Pound y la Transculturación Jurídica .....	112
La Violencia Intrafamiliar en el Departamento de Sacatepéquez .....	118
Participan en este número .....	127

30 DE 30 HOJAS

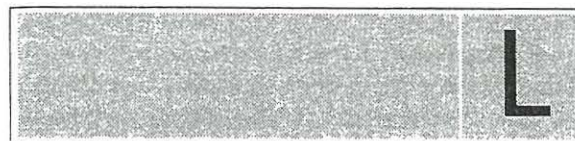
Consejo de Redacción: Lucrecia Elinor Barrientos Tobar / Marco Vinicio Mejía Dávila / Sandra Elizabeth Vargas Aldana. Curador de la Edición: Marco Vinicio Mejía Dávila. Diagramación: Miguel Chirry. Correspondencia y Canje: Avenida Reforma 13-70 zona 9, edificio Real Reforma, nivel 6, ciudad de Guatemala. Correo electrónico: sandra.vargas747@hotmail.com.

Impreso en Guatemala, Latinoamérica.





73 D



L a concepción de bienes jurídicos cuando es normativa, no significa que sea estática. Al contrario, dentro de las finalidades constitucionales esa concepción debe estar y está abierta al cambio social y al progreso científico.

Lo anterior, lleva a compartir la definición que da Roxin de los bienes jurídicos: "son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines para el funcionamiento del propio sistema."

Por otro lado, si bien es cierto que la Constitución guatemalteca señala que el Estado tiene como deber garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, no debe entenderse que sólo esos bienes jurídicos son llamados a ser garantizados por el Estado, ya que tan sólo son bienes que como mínimo el Estado tiene el deber de proteger e incluso puedan ser superados, siempre y cuando se vea dentro de la perspectiva que coadyuvan a la convivencia social.

Considero necesario delimitar el ámbito del Derecho Positivo que trato de exponer con relación a los bienes jurídicos que debe garantizar el Estado, centrándonos en una parte de la totalidad de objetos de conocimiento. El Derecho Penal tiene como exigencia la protección de determinados bienes jurídicos. Únicamente me referiré a los bienes jurídicos protegidos en el título I del libro segundo del Código Penal; y a los tutelados por la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, éste último, por la relativa novedad

Héctor Ricardo Echeverría Méndez

## BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS EN EL CÓDIGO PENAL Y EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO





de su creación en Guatemala y en los demás países del orbe. Analizar el bien jurídico que protege cada tipo penal implicaría escribir un voluminoso manual de la parte especial del Código Penal guatemalteco, el cual da lugar a hablar mucho de él debido a la particular técnica legislativa empleada en la creación de cada figura delictiva.

### NOCIONES PREVIAS.

Es criterio unánime que el Derecho Penal tiende a proteger determinados bienes jurídicos con el fin de mantener y proteger la convivencia pacífica dentro de la sociedad. Francisco Muñoz Conde, penalista español, afirma que el Derecho Penal como conjunto normativo cumple una función de mantenimiento y protección de un sistema de convivencia. Sólo dentro del sistema y desde ese sistema puede explicarse. La función de la norma penal, como la de cualquier institución, sólo puede comprenderse en referencia a un sistema social de convivencia.

Agrega el tratadista citado que "la norma penal funciona protegiendo las condiciones elementales mínimas para la convivencia y motivando, al mismo tiempo, a los individuos para que se abstengan de dañar esas condiciones elementales. La norma penal tiene, por tanto, una doble función: protectora y motivadora. Protección y motivación o, mejor dicho, protección a través de la motivación, son las dos funciones inseparables e interdependientes de la norma penal. La protección supone la motivación y sólo dentro de los límites en los que la motivación puede evitar determinados resultados, puede alcanzarse la protección de las condiciones elementales de convivencia."

En ese sentido, dentro de la función de protección que cumple la norma penal se encuadra el concepto de bien jurídico. Muñoz Conde explica que: "A la norma penal, igual que a las demás normas jurídicas, le incumbe una función eminentemente protectora. La diferencia entre la norma penal y las demás normas jurídicas en esta materia radica en la especial gravedad de los medios empleados por la norma penal para cumplir esta misión y en que sólo interviene o debe intervenir en los casos de ataques muy graves a la convivencia pacífica en la comunidad."

### CONCEPTO DE BIEN JURÍDICO.

Muñoz Conde, sostiene que la necesidad de la convivencia –condensada en la idea freudiana de que la sociedad frustra, pero satisface al mismo tiempo las necesidades humanas individuales–, supone la protección de esa convivencia, pues sólo en ella puede la persona individual autorrealizarse y desarrollarse. La autorrealización humana necesita de unos presupuestos existenciales que, en tanto son de utilidad para el hombre, se denominan bienes y, concretamente, en tanto son objeto de protección por el Derecho, bienes jurídicos. Concluye que bienes jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social.

### EL BIEN JURÍDICO EN EL CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA.

El Código Penal, como es sabido, cuenta con una parte especial comprendida en el libro segundo. En principio, se puede decir que el legislador trató de ubicar o

clasificar en cada título las figuras delictivas que protegen un bien jurídico determinado. Así, el título I denominado "De los delitos contra la vida y la integridad de la persona", comprende los siguientes tipos penales: Homicidio, Homicidio cometido en estado de emoción violenta, Homicidio en riña tumultuaria, Homicidio preterintencional, Homicidio culposo, Inducción o ayuda al suicidio, Infanticidio, Suposición de muerte, Parricidio, Asesinato, Ejecución extrajudicial, Aborto procurado, Aborto con o sin consentimiento, Aborto calificado, Aborto terapéutico, Aborto preterintencional y Aborto culposo.

Los anteriores delitos se encuentran previstos en los tres primeros capítulos del título I. Su finalidad se encamina a proteger el bien jurídico de la vida humana, a excepción de la suposición de muerte, que en nada la lesiona. Además, me parece atinado el comienzo de la parte especial del Código Penal guatemalteco, ya que la vida humana como bien jurídico supremo que protege la norma penal debe estar al inicio de los delitos que conforman la ley penal de nuestro país, técnica legislativa que se observa en la mayoría de códigos penales de mundo. Los anteriores son bienes jurídicos individuales por afectar directamente a la persona individual o física.

Ahora bien, el Código Penal no hace ninguna distinción entre los delitos que atentan contra la vida según el estado en que se encuentre el individuo en un momento determinado de su vida. Al respecto, me parece apropiado citar al profesor sevillano que se ha venido citando, quien se refiere a delitos que atentan contra la vida humana independiente y delitos que atentan contra la vida humana dependiente. Sobre el particular, Muñoz Conde dice: "En los delitos contra la vida humana independiente se tutela la vida desde el nacimiento hasta la muerte. a) El momento en que comienza la vida humana independiente es discutido. Para unos, la vida humana comienza ya en el momento del parto. Otros exigen la respiración autónoma del recién nacido y, finalmente, otros requieren la total separación del claustro materno. Para Gimbernat (en Quintano, I, 1, p.504-505) lo decisivo es que la criatura haya salido totalmente al exterior, independientemente de que haya sido cortado el cordón umbilical o que el niño haya respirado, "pues la conducta aparece como más reprobable, si el autor mata a un ser que percibe directamente, caso del homicidio o del infanticidio, que si causa la muerte de quien se sabe en el claustro materno, pero sin que se haya establecido una relación visual inmediata –aborto–: en el primer caso se precisa una mayor energía criminal que en el segundo". Este criterio que podríamos llamar de la "percepción visual" parece, de cara a la práctica, bastante fácil de constatar y puede utilizarse como criterio diferenciador entre la vida humana independiente y la dependiente, y, al mismo tiempo, se puede combinar con la tesis tradicional de que la vida humana independiente comienza desde el momento del corte del cordón umbilical. Normalmente, "percepción visual" y corte de cordón umbilical se darán conjuntamente, pero conviene acentuar el primer aspecto, pues, precisamente, la muerte se puede provocar antes de que se corte el cordón umbilical, una vez que el niño ha salido completamente al exterior..."

Según la clasificación que efectúa Muñoz Conde, los delitos comprendidos en el capítulo III del título I del libro segundo del Código Penal sobre el Aborto, atentarían contra el bien jurídico de la vida humana dependiente.





52

Muñoz Conde, al tocar el tema del comienzo de la vida humana dependiente, expone: "La vida dependiente, igual que la independiente, está sometida a unos límites temporales que condicionan su protección jurídico-penal. La separación del claustro materno del ya nacido es el límite que separa la vida dependiente y la vida ya independizada. [...] Mayores dificultades presenta la determinación del comienzo de la vida dependiente. En épocas precientíficas anteriores al desarrollo experimentado por la Medicina y la Biología en el último siglo, se resolvía el problema acudiendo a criterios filosóficos o teológicos como el de la "animación", según el cual la vida comienza en el momento en que el cuerpo se une con el alma. La comprobación científica de que la reproducción humana realmente surge a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide permitió fijar el comienzo de la vida en ese momento, llamado de la fecundación. La posterior evolución de la Medicina ha obligado, sin embargo, a revisar este criterio y a fijar el comienzo de la vida en otros momentos posteriores tales como la anidación en el útero del óvulo ya fecundado, el comienzo de la actividad cerebral en el feto, etc., que son más determinantes de la existencia de algo más que un mero proceso biológico. Una vez más nos encontramos en este problema, como en tantos otros, con un silencio de la propia naturaleza que no ofrece, por lo menos en los primeros meses del embarazo, datos inequívocos sobre el comienzo de la vida humana como algo digno de protección jurídica aunque sea todavía en su fase de dependencia. La doctrina dominante se inclina por admitir el comienzo de la vida humana en el momento de la anidación o de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, a los 14 días de la fecundación."

Sobre el delito de Aborto, Guatemala no contempla lo que en España se denomina Aborto Ético y el Aborto Eugenesico o Embriopático, no penados por la ley penal. El primero, el Código Penal español lo define de la siguiente manera: "Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado". El Eugenesico o Embriopático, lo define así: "Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto".

La regulación sobre los dos abortos no punibles transcritos con anterioridad obedece a una escala valorativa propia del país que la ha dictado, aspecto en el que también pueden darse posiciones encontradas entre lo que es la ética y el credo religioso que se practique. Así, por ejemplo, en lo que concierne a la Iglesia Católica, su Santidad Juan Pablo II, siempre mantuvo la postura de no permitir el aborto humano.

Claro que hay delitos contra la vida humana que por tener una carácter de delito en masa o por la importancia de la persona dentro del Estado, no están regulados en el primer título del libro segundo del Código Penal, como el caso "DE LOS DE TRASCENDENCIA INTERNACIONAL", regulados en el capítulo IV, del título XI del libro

segundo, entre los que se contempla el Genocidio, la Muerte de un jefe de Estado extranjero, en los que se atenta también en contra de la vida humana. De igual manera, en el título XII "DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN INSTITUCIONAL", se prevé en el capítulo II "DE LOS DELITOS CONTRA LOS PRESIDENTES DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO", el caso de muerte de alguno de ellos. A mi juicio, su regulación en títulos aparte del título primero que se refiere a los delitos contra la vida, se encuentra correcta y de acuerdo a la técnica legislativa, dado el carácter especial de quienes figuran como sujetos pasivos del delito.

Corresponde ahora el turno de los delitos contra la integridad de la persona, entre los cuales figuran en el primer título del libro segundo del Código Penal, los siguientes: Agresión, Disparo de arma de fuego, Lesiones específicas, Lesiones gravísimas, Lesiones graves, Lesiones leves, Lesión en riña, Lesiones culposas, Contagio venéreo, delito deportivo, Abandono de niños y de personas desvalidas, Abandono por estado afectivo, Omisión de auxilio, Responsabilidad de conductores, Conducción de vehículos de transporte colectivo sin licencia, y Responsabilidad de otras personas.

Como puede notarse, el delito de contagio venéreo y los últimos tres tipos penales citados son delitos de peligro, especialmente los que van en contra la seguridad del tránsito, ya que según sus elementos no atentan directamente contra la vida o la integridad de la persona.

#### EL BIEN JURÍDICO EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS.

El primer considerando del Decreto número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala (Ley contra el lavado de dinero u otros activos) se encuentra descrito el bien jurídico que se protege a través de esa ley penal especial. Dicho considerando dice: "Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, de manera que se proteja la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco"

Del considerando citado los bienes jurídicos que se tutelan serían: la economía nacional y el sistema financiero guatemalteco.

Juana Del Carpio Delgado al referirse al delito de blanqueo de bienes (o lo que es lo mismo para el caso de Guatemala: lavado de dinero) manifiesta: "Para la determinación del bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de bienes, es necesario recurrir a las diferentes elaboraciones doctrinales que se han formulado en torno a la teoría del bien jurídico protegido por la norma penal y establecer esos límites en su intervención; sobre todo si tenemos en cuenta que la violación de la norma penal, aun imprudentemente como es el caso del delito que nos ocupa, tiene como consecuencia la pérdida de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos como pueden ser la libertad o el derecho a ejercer una determinada profesión, lo que muchas veces supone una pena más grave por sus consecuencias para un determinado tipo de personas, que la privativa de libertad."



70 2

La misma autora explica las diferentes posiciones doctrinarias respecto a la determinación del bien jurídico protegido en el blanqueo de dinero o bienes, expresando: "Como un delito de carácter pluriofensivo, es decir, que protege a más de un bien jurídico, lo considera Vidales Rodríguez (sic). Para esta autora el delito de "legitimación de capitales", como así lo denomina, supone inicialmente un atentado contra la Administración de Justicia, en la medida en que, a través de la conversión y la transferencia de los capitales ilícitamente obtenidos, de alguna manera se está dificultando que el delito previo en el que tienen su origen los bienes sea descubierto. Pero, para Vidales Rodríguez, cuando el sujeto pretende darle una apariencia de legalidad a los capitales, generalmente tendrá que recurrir a otros delitos que atentan contra el orden socioeconómico, como pueden ser la evasión de capitales, la creación de sociedades ficticias, la falsificación de balances, etcétera. De este modo, el ataque al orden socioeconómico se constituye como un medio a través del cual se lleva a cabo la conducta "legitimadora de capital". Pero es que, además, -agrega- la "legitimación de capitales" supone la lesión a otros intereses económicos que no encuentran protección en la norma penal como, por ejemplo, la compraventa de inmuebles en determinadas zonas de alguna ciudad o la libre competencia."

En un segundo término, Del Carpio Delgado presenta el orden socioeconómico como el bien jurídico protegido en el blanqueo de lo que ella llama de bienes, lo cual explica de la manera siguiente: "En este último grupo tenemos a quienes consideran que el bien jurídico protegido por este delito es el orden socioeconómico. Y ciertamente esta interpretación puede verse favorecida por el cambio de ubicación sistemática que realiza el nuevo Código Penal (que lo incluye entre los delitos contra el orden socioeconómico) en relación con la regulación anterior (que lo incluía entre los delitos contra el patrimonio -art. 546 bis f) -y entre los delitos contra la Salud pública -arts. 344 bis h) e i)-. Sobre esta base, sin descartar que a través de este delito se estén protegiendo mediatamente otros bienes jurídicos como puede ser la Administración de Justicia, primordialmente se tutela el orden socioeconómico. En este grupo también podemos incluir a otros autores que si bien no se han manifestado expresamente a favor de que sea el orden socioeconómico el bien jurídico protegido, sí lo hacen tácitamente cuando expresan que las conductas contenidas en el artículo 301 del nuevo Código Penal son de naturaleza estrictamente socioeconómica. Y también quienes consideran que se trata de un "delito que afecta al orden socioeconómico, puesto que se trata del ingreso de capitales -normalmente en grandes cantidades-generadas sin los normales costos personales o financieros o industriales, ni carga tributaria, que dan lugar a una desestabilización de las condiciones mismas de la competencia y el mercado. O cuando expresan que de los delitos que se encuentran regulados en el Título XII el blanqueo de bienes es uno de los que se puede considerar como atentatorios contra el orden socioeconómico."

Me parece que el bien jurídico tutelado es el orden socioeconómico y no la Administración de Justicia, pues no debe olvidarse que el delito de Lavado de dinero u otros activos, es primordialmente económico, de orden socioeconómico, cuyo concepto me parece más amplio que el de economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero.

## Conclusiones

1. En Guatemala no existe en materia criminal un criterio jurisprudencial que señale cuándo inicia la vida humana dependiente y cuándo la independiente.
2. El bien jurídico protegido por el delito de Lavado de dinero u otros activos es el orden socioeconómico.

## Recomendaciones

1. Es importante para los efectos de la aplicación de la ley penal especial que se discuta y se deje sentado el criterio que determine el momento en que inicia la vida humana dependiente y la independiente.
2. La regulación del delito aborto debe mantenerse en la legislación guatemalteca, a efecto de proteger la vida humana que la madre lleva en el vientre.

## Bibliografía

1. Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal. Parte General, Tirant lo blanch, Valencia, 1998.
2. Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.
3. Roxin Claus, "Derecho Penal", Parte General, Tomo I, Editorial Civitas, 1997.





77  
8

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que las treinta y cuatro fotocopias que anteceden impresas únicamente en el anverso son **AUTENTICAS**, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, directamente de los documentos originales y que reproducen lo siguiente: **a)** Publicación en la Revista Advocatus Ius, año dos, número dos, junio dos mil catorce, del artículo titulado "Derecho Penal, Sociedad e Individuo", elaborado por HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ; **b)** Publicación en la Revista Advocatus Ius, año uno, número uno, diciembre dos mil trece, del artículo titulado "Estado y Derecho Penal", elaborado por HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ; **c)** Publicación en la Revista Tercera Instancia, número tres, octubre de dos mil seis, del artículo titulado "Tratado versus Convención", elaborado por HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ; **d)** Publicación en la Revista Tercera Instancia, número dos, julio dos mil seis, del artículo titulado "Eficacia del Amparo en los Derechos Humanos Sociales", elaborado por HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ; y **e)** Publicación en la Revista Tercera Instancia, número uno, enero de dos mil seis – junio dos mil seis, del artículo titulado "Bienes Jurídicos Protegidos en el Código Penal y en la Ley Contra el Lavado de Dinero", elaborado por HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ. En fe de lo cual numero, firmo y sello las treinta y cuatro hojas que anteceden y la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

  
Gilberto Gómez Monroy  
ABOGADO Y NOTARIO

35 DE 35 HOJAS





## ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

Otorga el presente diploma a

***Héctor Ricardo Echeverría Méndez***

por su participación en el **Curso: "Actualización sobre Derechos de la Niñez (Interés Superior del Niño)"**, impartido el ocho y veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales, con un total de quince horas de capacitación presencial.

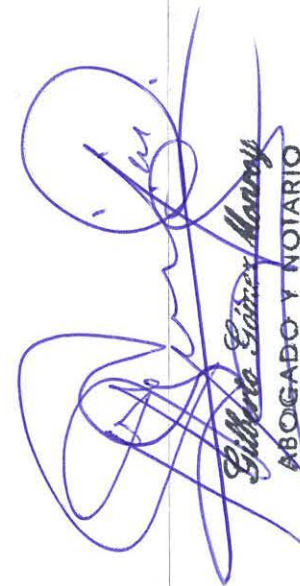
Guatemala, septiembre de 2016



M.A. Dora Lizett Nájera Flores de Flores  
Directora



Acreditación Internacional Norma de Calidad RIAEJ NCR 1000:2011



Silvana Echeverría Méndez  
ABOGADO Y NOTARIO

1 DE 4 HOJAS







Se extiende el presente  
**DIPLOMA** a:

**Hector Echeverria**

Por su participación en el curso de capacitación sobre:

**"LA UTILIZACIÓN DE LA PRUEBA CIENTÍFICA EN LA INVESTIGACIÓN DEL  
DELITO Y EN EL PROCESO PENAL".**

**Organizado por la Iniciativa de Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los  
Estados Unidos ABAROLI**

**Guatemala, 29 de Marzo al 1 de Abril de 2016**

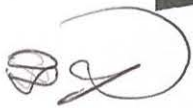


Tania Montoya de Amaya  
Directora ABA-ROLI  
Programa Regional para el Fortalecimiento  
de la Capacidad Forense en América Central



2 DE 4 HOJAS

*Gilberto Gomez Morrey*  
ABOGADO Y NOTARIO



# Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto Italo - Latino Americano, Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y Embajada de Italia en Guatemala

otorgan el presente diploma a:

*Hector Ricardo Echeverría Méndez*

Por haber participado en el "SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERINSTITUCIONALES SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO", impartido del 8 al 12 de junio del año en curso, con una duración de quince horas presenciales.

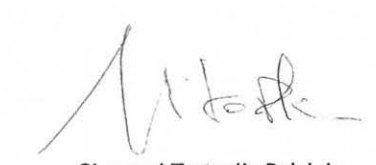
Guatemala junio de 2015

  
Dr. José Felipe Baquix  
Presidente  
Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia

  
Msc. Thelma Esperanza Aldana Hernández  
Fiscal General de la República y Jefa  
Ministerio Público

  
Fabrizio Pignatelli Della Leonessa  
Embajador de Italia en Guatemala

  
Giorgio Malfatti di Monte Tretto  
Secretario General  
Instituto Italo - Latino Americano

  
Giovanni Tartaglia Polcini  
Magistrado Antimafia y Consultor jurídico  
del MAECI de Italia  
Coordinador Científico del Proyecto



3 DE 4 HOJAS



<p>Curso de Alta Formación</p> <p><b>"SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERINSTITUCIONALES SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO"</b></p> <p>ha tenido una duración de 5 días lo que equivale a 15 horas lectivas con el siguiente contenido:</p>	
Temática 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premisa metodología</li> <li>• Programa formativo</li> <li>• Líneas guía inspiradoras de la intervención</li> <li>• Nociones de incautación preventiva</li> <li>• Procedimiento de destinación de bienes incautados y finalidades de destinación. Parte I</li> </ul>
Temática 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de destinación de bienes incautados y finalidades de destinación. Parte II</li> <li>• Fuentes de activación de la investigación patrimonial</li> </ul>
Temática 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Técnicas de Investigación. Los instrumentos normativos: el Modelo Italiano</li> <li>• Técnicas de Investigación. Aspectos prácticos – operativos</li> <li>• Investigaciones que mueven de la personas para llegar al patrimonio</li> <li>• Profundización: Las investigaciones Bancarias</li> </ul>
Temática 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigaciones que mueven de la personas para llegar al patrimonio. Parte I</li> <li>• Investigaciones que mueven de la personas para llegar al patrimonio. Parte II</li> </ul>
Temática 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigaciones que mueven de la personas para llegar al patrimonio. Parte III</li> <li>• Balance y perspectivas</li> </ul>



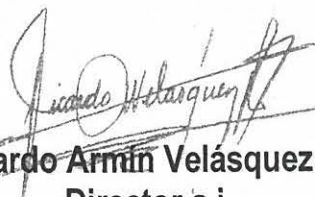


## ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

otorga el presente diploma a

*Héctor Ricardo Echeverría Méndez*

por haber participado en la conferencia magistral sobre Lavado de Activos “Experiencia y Métodos en Investigación de Estructuras Dedicadas a este Tipo de Delitos” y Extinción de Dominio “Diseño de Investigaciones Especializadas en Identificar Patrimonios Ilícitos y Experiencias Exitosas”, dictada por el Dr. Carlo Cataudella en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia el 27 de octubre de 2014, con una duración de dos horas.



Lic. Ricardo Armin Velásquez Rivera  
Director a.i.



Guatemala, octubre de 2014



ABOGADO  
RICARDO GONZÁLEZ MORALES

4 DE 4 HOJAS







La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL)  
de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala  
y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia

otorga el presente diploma a

**Héctor Ricardo Echeverría Méndez**

por su participación de cuatro horas en la capacitación denominada

**“Teoría Jurídica del Delito y Aspectos de la Criminalidad Organizada y Narcotráfico”**

impartida por la Dra. Mariona Llobet, experta en la material penal, egresada de  
la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España.

Ciudad de Guatemala el 20, 21, 22, 25 y 26 de marzo de 2013.

  
Alberto Rodríguez  
Director

  
Dr. Cesar Barrientos Pellecer  
Magistrado Vocal II, Presidente



5 DE 4 HOJAS

  
Silvana Gami  
ABOGADO

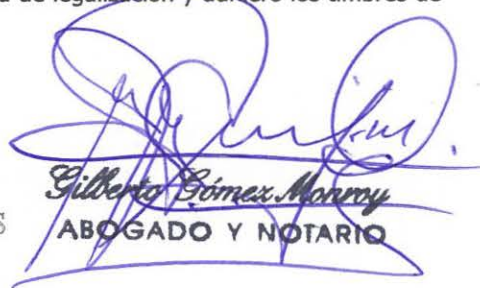


83

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que las cinco fotocopias que anteceden impresas la primera, segunda, cuarta y quinta únicamente en el anverso y la tercera en ambos lados son **AUTENTICAS**, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, directamente de los documentos originales y que reproducen lo siguiente: **a)** Diploma de participación en el Curso "Actualización sobre Derechos de la Niñez (Interés Superior del Niño)", otorgado por la Escuela de Estudios Judiciales Unidad de Capacitación Institucional, Unicef, y el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, a favor de Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Guatemala, septiembre de dos mil dieciséis; **b)** Diploma de participación en el curso de capacitación sobre "La Utilización de la Prueba Científica en la Investigación del Delito y en el Proceso Penal", otorgado por el Programa Regional para el Fortalecimiento de la Capacitación Forense en América Central, Colegio de Abogados de los Estados Unidos ABAROLI, a favor de Hector Echeverría, Guatemala, veintinueve de marzo al uno de abril de dos mil dieciséis; **c)** Diploma de participación en el "Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias Interinstitucionales Sobre Extinción de Dominio", impartido del ocho al doce de junio de dos mil quince, otorgado por el Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto Italo-Latino Americano, Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y Embajada de Italia en Guatemala, a favor de Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Guatemala, junio de dos mil quince; **d)** Diploma de participación en la conferencia sobre Lavado de Activos "Experiencia y Métodos en Investigación de Estructuras Dedicadas a este Tipo de Delitos" y Extinción de Dominio "Diseño de Investigaciones Especializadas en Identificar Patrimonios Ilícitos y Experiencias Exitosas", otorgado por la Escuela de Estudios Judiciales Unidad de Capacitación Institucional, a favor de Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Guatemala, octubre de dos mil catorce; **e)** Diploma de participación en la capacitación denominada "Teoría Jurídica del Delito y Aspectos de la Criminalidad Organizada y Narcotráfico", otorgado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados de América en Guatemala y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, a favor de Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Guatemala, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco y veintiséis de marzo de dos mil trece. En fe de lo cual numero, firmo y sello las cinco hojas que anteceden y la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

4 DE 4 HOJAS

  
**Gilberto Gómez Morán**  
ABOGADO Y NOTARIO







Unibersidad San Pablo de Guatemala  
y  
Unibersidad Rural de Guatemala



Por Cuanto:

*Héctor Ricardo Echeverría Méndez*

Se destacó en defensa de su tesis de graduación, previo a obtener el título de Magister Artium en  
Gestión Jurisdiccional;

Por tanto:

En el cumplimiento a lo establecido en los Reglamentos de Evaluación de ambas casas de estudio, se le otorga

**Mención Honorífica Cum Laude**

Correspondiente a las Facultades de Derecho y Justicia y Ciencias Jurídicas y Sociales,  
de ambas universidades.

Dado en la ciudad de Guatemala a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil trece.

  
UNIVERSIDAD  
**SAN PABLO**  
GUATEMALA  
RECTORIA  
Dr. Ricardo Francisco Antillón Morales  
Rector

  
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA  
RECTOR  
Dr. Fidel Reyes Lee  
Rector



1 DE 14 HOJAS

  
Guillermo Gómez Méndez  
ABOGADO Y NOTARIO



# LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES

otorga el presente diploma a

*Héctor Ricardo Echeverría*

por su aporte académico como **Juez Docente** dentro del **XII Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Paz en la modalidad b-learning 2013**, realizado del 25 de enero al 26 de julio de 2013 en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales.

Guatemala, 9 de agosto de 2013

**Gabriel Medrano Valenzuela**  
Presidente del Organismo Judicial y  
de la Corte Suprema de Justicia



**Ricardo Armin Velásquez Rivera**  
Director a.i.  
Unidad de Capacitación Institucional



*Silvia Gómez Méndez*  
ABOGADO Y NOTARIO

2 DE 14 HOJAS



ABOGADO  
2019  
GUATEMALA, C.A.



# LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES

## UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO JUDICIAL

otorga el presente diploma a:

*Héctor Ricardo Echeverría Méndez*

Por su destacado aporte como **Juez Docente** dentro del **IX Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Primera Instancia en la modalidad b-learning 2012-2013**, realizado del 6 del julio de 2012 al 18 de febrero de 2013 en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales.

Guatemala, 11 de marzo de 2013

*Gabriel Antonio Medrano Valenzuela*  
ABOGADO Y NOTARIO

*Gabriel Antonio Medrano Valenzuela*  
Gabriel Antonio Medrano Valenzuela  
Presidente del Organismo Judicial y  
de la Corte Suprema de Justicia



*Ricardo Armin Velásquez Rivera*  
Ricardo Armin Velásquez Rivera  
Director a.i.  
Unidad de Capacitación Institucional



*[Handwritten signature]*

LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES  
UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO JUDICIAL

otorga el presente diploma a:

*Hector Ricardo Echeverría Méndez*

Por su destacado aporte como **Juez Docente** dentro del **XI Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Paz**, en la **modalidad semipresencial b-learning 2011**, realizado en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales, del treinta de mayo al dos de diciembre de dos mil once.

Guatemala, 16 de diciembre de 2011.

*Erick Alfonso Alvarez Mancilla*

Dr. Erick Alfonso Alvarez Mancilla  
Presidente del Organismo Judicial y de la  
Corte Suprema de Justicia en funciones



*Ricardo Armín Velásquez Rivera*

Lic. Ricardo Armín Velásquez Rivera  
Encargado del Despacho de Dirección



*Handwritten signature*



NUMARIO

4 DE 14 HOJAS

ABOGADO Y NOTARIO



5686  
019  
ABOGADO Y  
NOTARIO

5 DE 14 HOJAS

*[Signature]*  
ABOGADO Y NOTARIO

# Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones

OTORGA EL PRESENTE

## Diploma de Reconocimiento

EN EL DÍA DEL ABOGADO

A: Magistrado Hector Ricardo Echeverría Méndez

Por su valiosa contribución en el Despacho Judicial y  
defensa de la independencia judicial

Guatemala, 24 de Septiembre de 2011.

*[Signature]*  
PRESIDENTE INSTITUTO DE MAGISTRADOS  
CORTE DE APELACIONES  
ORGANISMO JUDICIAL



*[Signature]*  
SECRETARIO INSTITUTO DE MAGISTRADOS  
CORTE DE APELACIONES  
ORGANISMO JUDICIAL



# La Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia



UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación,  
colaboración y disciplina, para la formación de las  
futuras generaciones.

Otorga el presente Diploma a:

Lic. Héctor Ricardo Echeverría Méndez

Lic. Carlos Enrique Samayoa Cifuentes

Decano

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia



Guatemala 12 de diciembre de 2009

4 DE 14 HOJAS

*[Signature]*  
ABOGADO Y NOTARIO

*[Signature]*  
49





El Licenciado Bonerge Mejía

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Otorga el presente  
Diploma de Reconocimiento

A: Lic. Héctor Echeverría Méndez

Por su valiosa labor en el desarrollo de las respectivas actividades docentes en el presente ciclo lectivo.

“Id y enseñad a todos”

Dado en la Ciudad Universitaria,

a los veintiocho días del mes de junio del año ~~dos~~ mil seis



Lic Bonerge Mejía

Gilberto Gómez Morrey  
ABOGADO Y NOTARIO





La Primera Promoción de Alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y  
Sociales, Sección "A"

Universidad Mariano Gálvez, extensión Antigua Guatemala,  
tiene el honor de otorgar el presente diploma de:

*RECONOCIMIENTO AL MÉRITO Y AGRADECIMIENTO POR NUESTRA  
VALIOSA FORMACIÓN A:*

LIC. HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA

La Antigua Guatemala, 20 de noviembre de 2004

Representante de la Sección "A"  
Promoción 1999-2004

9424930  
2019

8 DE 14 HOJAS

BOGADO Y NOTARIO

21



92  
8

LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ  
DE GUATEMALA  
A TRAVES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DE  
LA ANTIGUA GUATEMALA



OTORGA  
DIPLOMA DE HONOR

A

*Lic. Héctor Echeverría*

Por su meritoria labor en la organización del Quinto Encuentro Social, Cultural y Deportivo de los Centros Universitarios de esta Casa de Estudios Superiores, celebrado del 27 al 29 de octubre, en la Ciudad Colonial de la Antigua Guatemala, Monumento de América y Patrimonio de la Humanidad.

La Antigua Guatemala, octubre del año 2,000.

Licenciado Mario Rubén García  
COORDINADOR CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LA ANTIGUA GUATEMALA

Licenciado Edwin Rubén Uribe Corona  
COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO

Licenciado Manfredo Osorio Bolaños  
DIRECTOR CENTROS UNIVERSITARIOS

1966 - 2000

XXXIV AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION SUPERIOR



**"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES"**



9 DE 14 HOJAS



# La Universidad del Istmo y la Facultad de Derecho

Otorgan el presente diploma de reconocimiento a:

**Lic. Héctor Echeverría**

Por su valioso aporte en la clase de Derecho Procesal Penal III  
como conferencista invitado el 7 de octubre del 2016,  
en las instalaciones de la Universidad.

Guatemala de la Asunción, octubre 2016

**Licda. Leticia Andrea Morales Díaz**  
Secretaria de Consejo de Facultad  
Universidad del Istmo



93





11 DE 14 HOJAS

*[Signature]*  
ABOGADO Y NOTARIO



## FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DEL ISTMO

*Otorgan el presente diploma a:*

*Lic. Héctor Echeverría*

*Por su valiosa colaboración como ponente del tema **La Inconstitucionalidad en Materia Penal.**  
Impartido el 18 de octubre del año en curso, a los estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Derecho.*

*Guatemala de la Asunción, octubre 2013.*

*[Signature]*

*Licda. Leticia Andrea Morales Díaz  
Secretaria del Consejo de Facultad*



*[Signature]*  
94



# La Universidad del Istmo y la Facultad de Derecho

Otorgan el presente diploma de reconocimiento a:

**Lic. Héctor Echeverría**

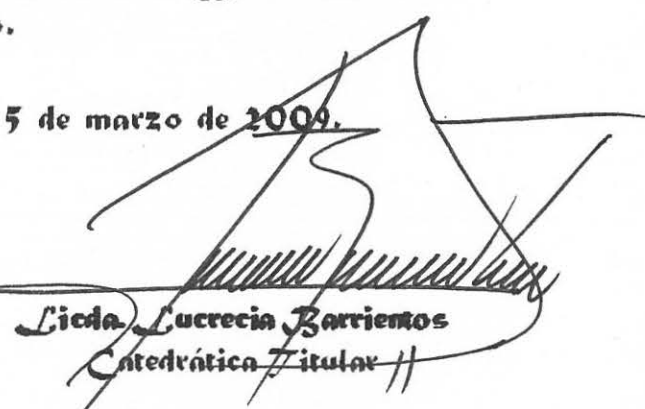
Por su colaboración como conferencista invitado del tema  
**'Apelación especial en materia penal'**, impartido a los estudiantes  
del curso de **Derecho Procesal Penal III** de la **Licenciatura en  
Derecho**.

Guatemala de la Asunción, 5 de marzo de 2009.

  
**Lic. Guido D. Ricci Mundi**  
Decano



FACULTAD DE DERECHO

  
**Licda. Lucrecia Barrios**  
Catedrática Titular //

  
**Gilberto Gómez Mayorga**  
ABOGADO Y NOTARIO

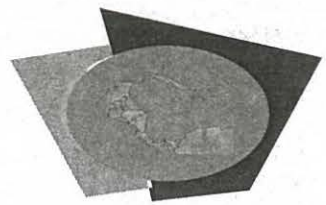
12 DE 14 HOJAS

45





CONSEJO GENERAL  
DEL PODER JUDICIAL



C  
AECI

**Las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y República Dominicana,  
El Consejo General del Poder Judicial de España y  
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)**

otorgan el presente diploma a:

***Héctor Ricardo Echeverría Méndez***

Por su participación como Moderador en los cursos **"El proceso penal. Los modelos procesales penales"** y **"La oralidad en el Proceso Penal"**, de la X Escuela Judicial para Centroamérica y el Caribe "Juan Carlos I" 2006 en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala. Del 12 al 16 de junio, con 32 horas lectivas

La Antigua Guatemala, 16 de junio de 2006

*[Signature]*

Exma. Sra. Da. Ma. Angeles García García  
Vocal Consejo General  
del Poder Judicial de España

  
Centro de Formación de la Cooperación  
Española en La Antigua Guatemala  
Agencia Española de Cooperación  
Internacional

Hble. Sra. Mercedes Flórez  
Directora del Centro de Formación  
Agencia Española de Cooperación Internacional

*[Signature]*

Hble Sr. José Francisco De Mata Vela  
Miembro Permanente Consejo Rector de la  
Escuela Judicial "Juan Carlos I"

*[Signature]*  
ABOGADO Y NOTARIO

13 DE 14 HOJAS

*[Handwritten mark]*

# PROGRAMA

## LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES

### Del 12 al 16 de junio de 2006

“Los Grandes Modelos”

“Los avances del Sistema Acusatorio en América Latina y su impacto en las garantías fundamentales de los ciudadanos”

Análisis del grado de implementación del Sistema Acusatorio en los distintos países representados. Preparación Individual de los Informes Nación.

Informe Nación: Exposición del posicionamiento procesal de cada país

Informe Nación: Exposición del posicionamiento procesal de cada país continuación

El Sistema Acusatorio y su régimen de garantías relativas a la dinámica del proceso (I): Resolución colectiva de un cuestionario

El Juez y su función garante de los Derechos Fundamentales durante el proceso (I):

Su función garante en la adopción de Medidas Cautelares o Medidas de Coerción  
Resolución colectiva de un cuestionario

El Juez y su función garante de los Derechos Fundamentales durante el proceso (II):  
Su función garante respecto a Medidas de Investigación particularmente ingerentes  
“Las intervenciones corporales como instrumento de investigación criminal”

Resolución colectiva de un cuestionario

El Sistema Judicial de Garantías constante la Ejecución de la Pena.  
Resolución colectiva de un cuestionario

“El proceso penal y las reformas procesales de la región”

“El juicio oral como espacio escénico y como espacio de garantías.

Informe Nación sobre las singularidades del principio de oralidad en los distintos países comparecientes.

Taller: La escena y los actores del juicio oral. La “escena” del juicio oral. Símbolos, salas, posiciones de las partes y lenguaje. Implicaciones prácticas del principio de igualdad de armas. La libertad de expresión de las partes. Especial referencia a la libertad del letrado defensor. Las potestades disciplinarias del tribunal. La administración racional y razonable de los tiempos procesales durante el desarrollo del juicio.

Taller: la publicidad del acto del juicio oral. La presencia de los mass media. Límites a la Audiencia Pública. Análisis de casos prácticos.

Talle III: la prueba en el juicio oral. Los problemas relacionados con la práctica probatoria. El tratamiento de las nulidades probatorias. Los mecanismos de interrogatorio cruzado. La información de derechos al acusado. El uso “probatorio” del silencio o de las explicaciones inverosímiles del acusado. Las exenciones a los deberes de declarar. El acceso de la prueba parcial al acto del juicio. Las facultades probatorias del tribunal ¿neutralidad o pasividad?

Talle IV: Las víctimas en el juicio oral. Especial referencia a las víctimas y a su posición en el acto del juicio oral y el proceso en general. Derecho a la participación y a la información. Tratamiento victimológico durante la práctica de prueba. Algunos supuestos críticos. Víctimas especialmente vulnerables-menores de edad e incapaces- y víctimas particularmente victimizadas- delitos contra la vida, la dignidad y la libertad sexual.

Análisis de casos prácticos presentados por los asistentes al curso a partir de cada realidad nacional.

Taller de Jurisprudencia: del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte de San José y de los diversos Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas, española, centroamericanas y caribeñas.

Conclusiones y valoración final del encuentro.

Análisis de casos prácticos presentados por los asistentes al curso a partir de cada realidad nacional.

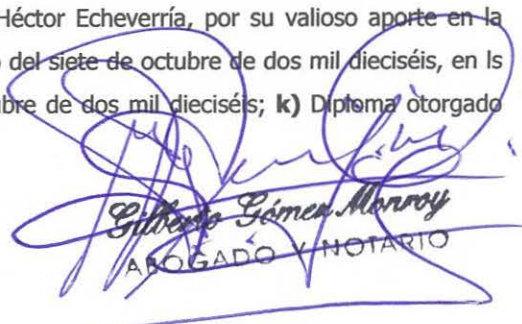
Taller de Jurisprudencia: del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte de San José y de los diversos Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas, española, centroamericanas y caribeñas.

Conclusiones y valoración final del encuentro.



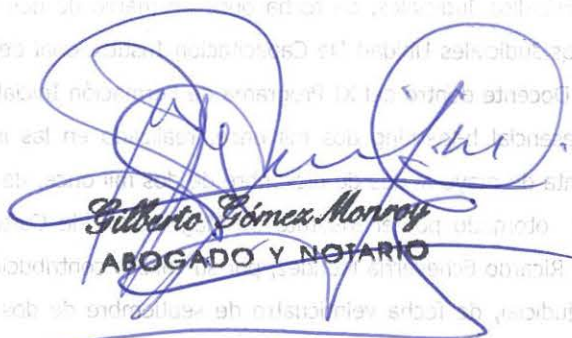
97

En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que las trece fotocopias que anteceden impresas de la primera a la décima segunda únicamente en el anverso, y la décima tercera en ambos lados, son **AUTENTICAS**, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, directamente de los documentos originales y que reproducen lo siguiente: **a)** La mención honorífica Cum Laude, otorgada a Hector Ricardo Echeverría Méndez, por la Universidad San Pablo de Guatemala y Universidad Rural de Guatemala, por haberse destacado en la defensa de su tesis de graduación, previo a obtener el título de Magister Artium en Gestión Jurisdiccional, de fecha veintiséis del mes de abril del año dos mil trece; **b)** Diploma otorgado a Hector Ricardo Echeverría, por la Escuela de Estudios Judiciales, por su aporte académico como **Juez Docente** dentro del XII Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Paz en la modalidad b-learning dos mil trece, realizado del veinticinco de enero al veintiséis de julio de dos mil trece, en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales, de fecha nueve de agosto de dos mil trece; **c)** Diploma otorgado a Hector Ricardo Echeverría Méndez, por la Escuela de Estudios Judiciales Unidad de Capacitación Institucional Del Organismo Judicial por su destacado aporte como Juez Docente dentro del IX Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Primera Instancia en la modalidad b-learning dos mil doce-dos mil trece, realizado del seis del julio de dos mil doce al dieciocho de febrero de dos mil trece en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales, de fecha once de marzo de dos mil trece; **d)** Diploma otorgado por La Escuela De Estudios Judiciales Unidad De Capacitación Institucional del Organismo Judicial por su destacado aporte como Juez Docente dentro del XI Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Paz, en la modalidad semipresencial b-learning dos mil once, realizado en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales, del treinta de mayo al dos de diciembre de dos mil once, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once; **e)** Diploma otorgado por el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones de Reconocimiento a Magistrado Hector Ricardo Echeverría Méndez, por su valiosa contribución en el Despacho Judicial y defensa de la independencia judicial, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil once; **f)** Diploma otorgado por La Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia de la Universidad Panamericana a Licenciado Héctor Ricardo Echeverría Méndez, como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación, colaboración y disciplina, para la formación de las futuras generaciones, de fecha doce de diciembre de dos mil nueve; **g)** Diploma de Reconocimiento otorgado por El Licenciado Bonerge Mejía, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a Licenciado Héctor Echeverría Méndez, por su valiosa labor en el desarrollo de las respectivas actividades docentes en el presente ciclo lectivo, de fecha veintiocho de junio de dos mil seis; **h)** Diploma otorgado por La Primera Promoción de Alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sección "A", de la Universidad Mariano Gálvez, de la extensión Antigua Guatemala, a Licenciado Héctor Ricardo Echeverría, de fecha veinte de noviembre de dos mil cuatro; **i)** Diploma de Honor otorgado por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala a Licenciado Héctor Echeverría por su meritoria labor en la organización del Quinto Encuentro Social, Cultural y Deportivo de los Centros Universitarios de esta Casa de Estudios Superiores, celebrado del veintisiete al veintinueve de octubre, en la Ciudad Colonial de la Antigua Guatemala, Monumento de América y Patrimonio de la Humanidad, de fecha octubre del año dos mil; **j)** Diploma de reconocimiento otorgado por la Universidad del Istmo y la Facultad de Derecho, a Licenciado Héctor Echeverría, por su valioso aporte en la clase de Derecho Procesal Penal III, como conferencista invitado del siete de octubre de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Universidad, Guatemala de la Asunción, octubre de dos mil dieciséis; **k)** Diploma otorgado

  
Gilberto Gómez Morro  
ABOGADO Y NOTARIO

por la Facultad de Derecho Universidad Del Istmo, a Licenciado Héctor Echeverría, por su valiosa colaboración como ponente del tema La Inconstitucionalidad en Materia Penal, impartido el dieciocho de octubre del año en curso, a los estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Derecho, Guatemala de la Asunción, octubre de dos mil trece; **l)** Diploma de reconocimiento otorgado por La Universidad del Istmo y la Facultad de Derecho, a Licenciado Héctor Echeverría, por su colaboración como conferencista invitado del tema "Apelación especial en materia penal", impartido a los estudiantes del curso de Derecho Procesal Penal III de la Licenciatura en Derecho, Guatemala de la Asunción, cinco de marzo de dos mil nueve; **m)** Diploma otorgado por Las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y República Dominicana, El Consejo General del Poder Judicial de España y La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), a Héctor Ricardo Echeverría Méndez, por su participación como moderador en los cursos "El proceso penal. Los modelos procesales penales" y "La oralidad en el Proceso Penal", de la X Escuela Judicial para Centroamérica y el Caribe "Juan Carlos I" dos mil seis en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, del doce al dieciséis de junio, con treinta y dos horas lectivas, La Antigua Guatemala, dieciséis de junio de dos mil seis. En fe de lo cual numero, firmo y sello las trece hojas que anteceden y la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

  
**ABOGADO Y NOTARIO**







ORGANISMO JUDICIAL  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
GUATEMALA, C. A.

Certificación de Puestos  
1868-2019 SJAS/bmsc

EL INFRASCRITO COORDINADOR I DE LA UNIDAD  
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEL ORGANISMO JUDICIAL

CERTIFICA:

Que para el efecto se tuvo a la vista el expediente de:  
donde consta la siguiente información:

HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ

Movimientos					
No.	Movimiento	Cargo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	Nombramiento	Oficial III	Secretaría de la Corte Suprema, Guatemala	11/08/1997 08:40 hrs.	17/04/2000 09:15 hrs.
2	Ascenso	Asistente Profesional de Magistratura	Corte Suprema de Justicia con Servicio en la Vocalía XII	17/04/2000 09:15 hrs.	15/05/2000 08:00 hrs. Renuncia
3	Nombramiento	Letrado	Corte Suprema de Justicia con servicio en la Vocalía XI	02/11/2001 08:00 hrs.	08/05/2002 08:15 hrs.
4	Confirmación	Letrado	Corte Suprema de Justicia con servicio en la Vocalía XI	08/05/2002 08:15 hrs.	15/02/2008 13:00 hrs. Renuncia
5	Nombramiento	Letrado	Corte Suprema de Justicia con servicio en la Vocalía XIII	16/01/2015 08:00 hrs.	18/01/2018 10:00 hrs.
6	Ascenso	Subsecretario	Presidencia, Guatemala	18/01/2018 10:00 hrs.	15/10/2018 14:30 hrs. Renuncia
7	Nombramiento	Letrado	Corte Suprema de Justicia con servicio en la Vocalía XI	16/01/2019 15:15 hrs.	*Vigente

\*Sin Observaciones

Licencias y Suspensiones			
No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Motivo
1	22/07/1998	21/08/1998	Licencia con goce de sueldo por Examen Técnico Profesional
2	21/02/2000	03/05/2000	Suspensión IGSS por Accidente

Y para los usos que a la parte interesada convengan, se extiende la presente el día diecisiete del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve.

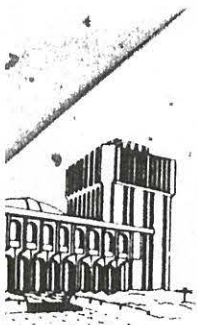
  
Bertha María Santa Cruz  
Oficinista I

Unidad de Administración de Recursos Humanos

  
Vo.Bo. Licda. Susana Judith Arriaga Sandoval  
Coordinador I  
Unidad de Administración de Recursos Humanos







49  
P

**ORGANISMO JUDICIAL  
GUATEMALA C. A.**

**SERVICIOS PERSONALES CUARENTA Y OCHO GUION DOS MIL UNO**

**DIAGONAL POJ (SP 48-2001/POJ).** En la ciudad de Guatemala, el día veintinueve de diciembre del dos mil, comparecen, por una parte, la Licenciada **GLADYS ELIZABETH CHACÓN CORADO**, de cincuenta años de edad, soltera, guatemalteca, Abogada y Notaria, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno (A-1) y de registro trescientos noventa y dos mil doscientos treinta y dos (392,232) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala. Señala como lugar para recibir notificaciones la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial, situada en el primer nivel del Palacio de Justicia, veintiuna calle siete guión setenta, zona uno (21 Calle 7-70 zona 1) de esta ciudad; quien actúa como Gerente de Recursos Humanos del Organismo Judicial, de conformidad con el acuerdo número doscientos noventa y cinco guión A diagonal dos mil guión N punto JRQF punto (295-A/2,000-N.JRQF.) de fecha veintidós de junio del dos mil, y acta de toma de posesión número doscientos cuarenta y ocho guión dos mil (248-2000) de fecha veintiséis de junio del dos mil, autorizado para el presente acto en virtud de la resolución número cuatro mil trescientos veintiséis (4,326), de fecha veintinueve de diciembre del dos mil, que copiada literalmente dice:-----

**PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL:** Guatemala, veintinueve de diciembre del dos mil.-----

Se autoriza a la Licenciada **GLADYS ELIZABETH CHACON CORADO**, Gerente de Recursos Humanos del Organismo Judicial, para que suscriba contrato por servicios personales con el Licenciado **HECTOR RICARDO**



**Notario**

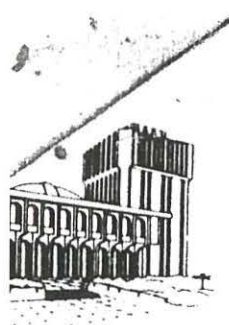
*Gilberto James Murray*  
**ABOGADO Y NOTARIO**



ECHEVERRIA MENDEZ, quien prestará sus servicios profesionales como Letrado de Apoyo Jurídico en el Despacho del Magistrado Vocal Décimo Primero, del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil uno, por TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ QUETZALES (Q.13,310.00) mensuales, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en concepto de honorarios, con cargo al renglón presupuestario correspondiente del Presupuesto de Ingresos y Egresos de este Organismo. Artículo 55, incisos e) y ñ) de la Ley del Organismo Judicial." Aparecen las firmas respectivas. Por la otra parte, comparece **HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ**, de treinta y un años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario y Colegiado número seis mil ciento cuarenta y nueve, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno (A-1) y de registro setecientos ochenta y un mil quinientos treinta (781,530) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con residencia en la Avenida Centro América número quince guión treinta y cinco de la zona uno (Avenida Centro América 15-35, Zona 1), de esta ciudad, lugar que señala para recibir notificaciones y citaciones, quién actúa en nombre propio. Los otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificación indicados, que en lo sucesivo ambos otorgantes en su orden nos denominaremos el "ORGANISMO" y el "CONTRATISTA", y que convenimos en suscribir el presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES conforme a las cláusulas siguientes:\_\_\_\_\_

**PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento

SECCION DE REPRODUCCION ORGANISMO JUDICIAL



100  
P

ORGANISMO JUDICIAL  
GUATEMALA C. A.

en lo que al respecto preceptúa el artículo cuarenta y cuatro (44) numeral uno (1), inciso dos punto dos (2.2) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República y la resolución número cuatro mil trescientos veintiséis (4326) de fecha veintinueve de diciembre del año en curso que se transcribió anteriormente.

**SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO:** El "CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios profesionales, realizando las funciones siguientes: a) Hacer un resumen de los casos que se someten al conocimiento de la Magistratura; b) Investigar la doctrina y la jurisprudencia respecto a cada caso ; c) Elaborar proyecto de resolución conforme instrucciones de la Magistratura ; d) Prestar asistencia en la redacción de las sentencias y demás resoluciones de fondo; e) Llevar el control de los expedientes que conozca la Magistratura, clasificándolos por fechas, casos y partes, elaborando las fichas correspondientes; f) Llevar el control de la jurisprudencia sustentada por la Cámara, elaborando las fichas correspondientes, conforme criterios técnicos; g) Ordenar y clasificar por materia y autores la Bibliografía que requiera la Magistratura, elaborando las fichas respectivas y h) Las que le asigne la Presidencia del Organismo Judicial o la Magistratura en la que desempeña sus labores.

**TERCERA. VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO:** El "ORGANISMO" conviene en pagar al "CONTRATISTA" por los servicios profesionales que preste, la cantidad total de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE QUETZALES (Q.159,720.00) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se hará efectiva por medio de doce pagos

ORGANISMO JUDICIAL



Gilberto Gómez Morrey  
NOTARIO

2 DE 5 HOJAS

Gilberto Gómez Morrey  
ABOGADO Y NOTARIO



de TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ QUETZALES (Q.13,310.00), al vencimiento de cada mes, de enero a diciembre del año dos mil uno. Dicha cantidad debe ser pagada con cargo a la partida y renglón presupuestario que correspondan del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial aprobado para el próximo año. Las partes hacen constar que por la naturaleza del presente contrato, el "CONTRATISTA" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga, ni está sujeto a los descuentos que la Ley obliga a los servidores públicos, en virtud de que los servicios pactados, son de carácter profesional y no crean relación laboral entre las partes, siendo que la retribución acordada, no tiene calidad de "SUELDOS" o "SALARIOS", sino de "HONORARIOS" no sujetos a las prestaciones de carácter laboral, exceptuándose las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia y otras leyes.

**CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del contrato es a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil uno, inclusive y la jornada será de lunes a viernes.

**QUINTA. FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** El "CONTRATISTA" se obliga a prestar a favor del "ORGANISMO", una fianza de cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, que garantizará el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Esta fianza se hará efectiva al "ORGANISMO", cuando ocurra el incumplimiento de dichas obligaciones contractuales y para el efecto el "ORGANISMO" dará audiencia por diez días a la Institución Afianzadora, para que exprese lo que considere legal y pertinente, transcurrido el plazo de la audiencia, sin

SERVICIOS PERSONALES  
No. 48-2001/POJ  
Página 5. *asse*



rescisión acordada entre las partes, c) por caso fortuito o fuerza mayor, y en este caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; y d) El Organismo Judicial podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad para el mismo. \_\_\_\_\_

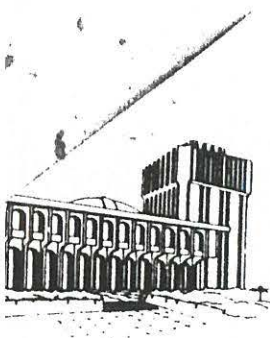
**DECIMA. CONTROVERSIAS:** Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, se someterá a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. \_\_\_\_\_

**DECIMA PRIMERA. APROBACION:** El presente contrato surte sus efectos legales y obliga a las partes, desde el momento en que sea aprobado por la Presidencia de este Organismo. \_\_\_\_\_

**DECIMA SEGUNDA. IMPUESTOS:** Queda entendido que las partes son responsables del pago de los impuestos que, a cada una les corresponda, de conformidad con lo que establece las leyes tributarias respectivas, en relación con el presente contrato. \_\_\_\_\_

**DECIMA TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES:** Forman parte del presente contrato y quedan incorporados al expediente los documentos que sirvieron de base para el faccionamiento del presente instrumento, así como toda la documentación que se produzca hasta la liquidación del presente contrato. -

**DECIMA CUARTA. EVALUACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FINIQUITO:** A) EVALUACION: Los servicios profesionales serán evaluados por el funcionario que designe el "ORGANISMO" debiendo levantarse el acta correspondiente al finalizar el plazo del contrato. B) LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber recibido el informe final de los servicios prestados, el "ORGANISMO" levantará el acta respectiva de su actuación, en



102  
8

**ORGANISMO JUDICIAL  
GUATEMALA C. A.**

la cual se ordenará la cancelación de la fianza de cumplimiento y el otorgamiento del finiquito. C) FINIQUITO: El finiquito que se otorgue deberá ser recíproco entre las partes.

**DECIMA QUINTA. ACEPTACION DEL CONTRATO.** En los términos y condiciones estipulados, el "ORGANISMO" y el "CONTRATISTA" aceptan el contenido íntegro del presente contrato, y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en cuatro hojas de papel español membretadas del Organismo Judicial.

Licda Gladys Chacón Corado  
Gerente de Recursos Humanos  
del Organismo Judicial

ORGANISMO JUDICIAL



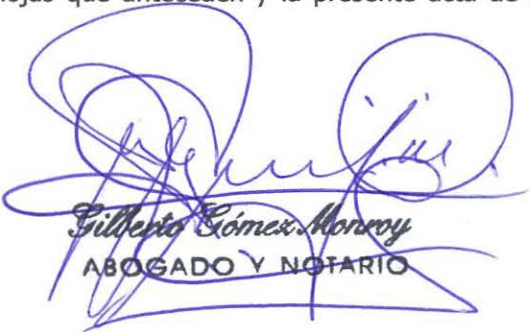
4 DE 5 HOJAS

*Gilberto Gómez Marro*  
ABOGADO Y NOTARIO



En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que la cuatro fotocopias que anteceden impresas la primera, segunda y tercera en ambos lados, y la cuarta únicamente en el anverso son **AUTENTICAS**, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, directamente de la fotocopia del contrato de servicios personales cuarenta y ocho guión dos mil uno diagonal POJ, celebrado en la ciudad de Guatemala, el veintinueve de diciembre del año dos mil, entre la Licenciada Gladys Elizabeth Chacón Corado, Gerente de Recursos Humanos del Organismo Judicial y el Licenciado HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ. En fe de lo cual numero, firmo y sello las cuatro hojas que anteceden y la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

  
**ABOGADO Y NOTARIO**

5 DE 5 HOJAS





# CONSEJO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Guatemala, C.A.



104  
[Firma]

**EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL.**-----

## HACE CONSTAR:

Que el Licenciado **HÉCTOR RICARDO ECHEVERRÍA MÉNDEZ** integró el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, en su calidad de Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, durante el período del veinte de enero de dos mil diecisiete al trece de febrero del dos mil diecinueve, según consta su primera intervención en el Acta número cero uno guión dos mil diecisiete (01-2017), contenida en los folios del cero tres mil setecientos veinticuatro (3724) al cero tres mil setecientos veintinueve (03729); y su última intervención en el Acta número cuatro guión dos mil diecinueve (4-2019) contenida en los folios del cero tres mil ochocientos cincuenta y dos (03852) y cero tres mil ochocientos cincuenta y tres (03853).

Y para los usos que al interesado convengan, se extiende, firma y sella la presente certificación, en una hoja de papel bond tamaño carta con membrete del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, el día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.-----



[Firma]

MSc. Otto Aníbal Recinos Portillo  
Secretario del Consejo  
Instituto de la Defensa Pública Penal



105  
P


El Infrascrito Secretario de la Comisión de Postulación que elaboró la nómina que fue entregada al Señor Presidente de la República con el objeto de nombrar al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el período dos mil dieciocho – dos mil veintidós, **HACE CONSTAR:** Que el Licenciado Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Subsecretario de la Presidencia del Organismo Judicial, coordinó las labores del equipo de apoyo técnico-logístico que asistió a esta Comisión para el desarrollo exitoso de todas la sesiones de trabajo.-----  
Y para los usos legales que convengan, extendiendo, firmo y sello la presente constancia en una (1) hoja de papel con membrete de la Comisión. En la Ciudad de Guatemala, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho.-----

Lic. Luis Antonio Ruano Castillo  
Secretario de la Comisión de Postulación



En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que la presente fotocopia impresa en el anverso es **AUTENTICA**, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia, directamente de su original que consiste en Constancia emitida por el Secretario de la Comisión de Postulación que elaboró la nómina que fue entregada al Señor Presidente de la República con el objeto de nombrar al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el período dos mil dieciocho – dos mil veintidós, a favor del Licenciado Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Subsecretario de la Presidencia del Organismo Judicial, con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho. En fe de lo cual firmo y sello la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

  
**ABOGADO Y NOTARIO**







*El Organismo Judicial y la  
Corte Suprema de Justicia  
Otorgan el presente*  
**RECONOCIMIENTO**  
*a*

**HECTOR RICARDO ECHEVERRIA  
MENDEZ**

*Por cumplir cinco años de laborar en este Organismo,  
contribuyendo al fortalecimiento de la  
administración de justicia de Guatemala.*

*[Signature]*

Guatemala, noviembre de 2014

*Erick Alfonso Alvarez Mancilla  
Presidente del Organismo Judicial y de la  
Corte Suprema de Justicia, en funciones*



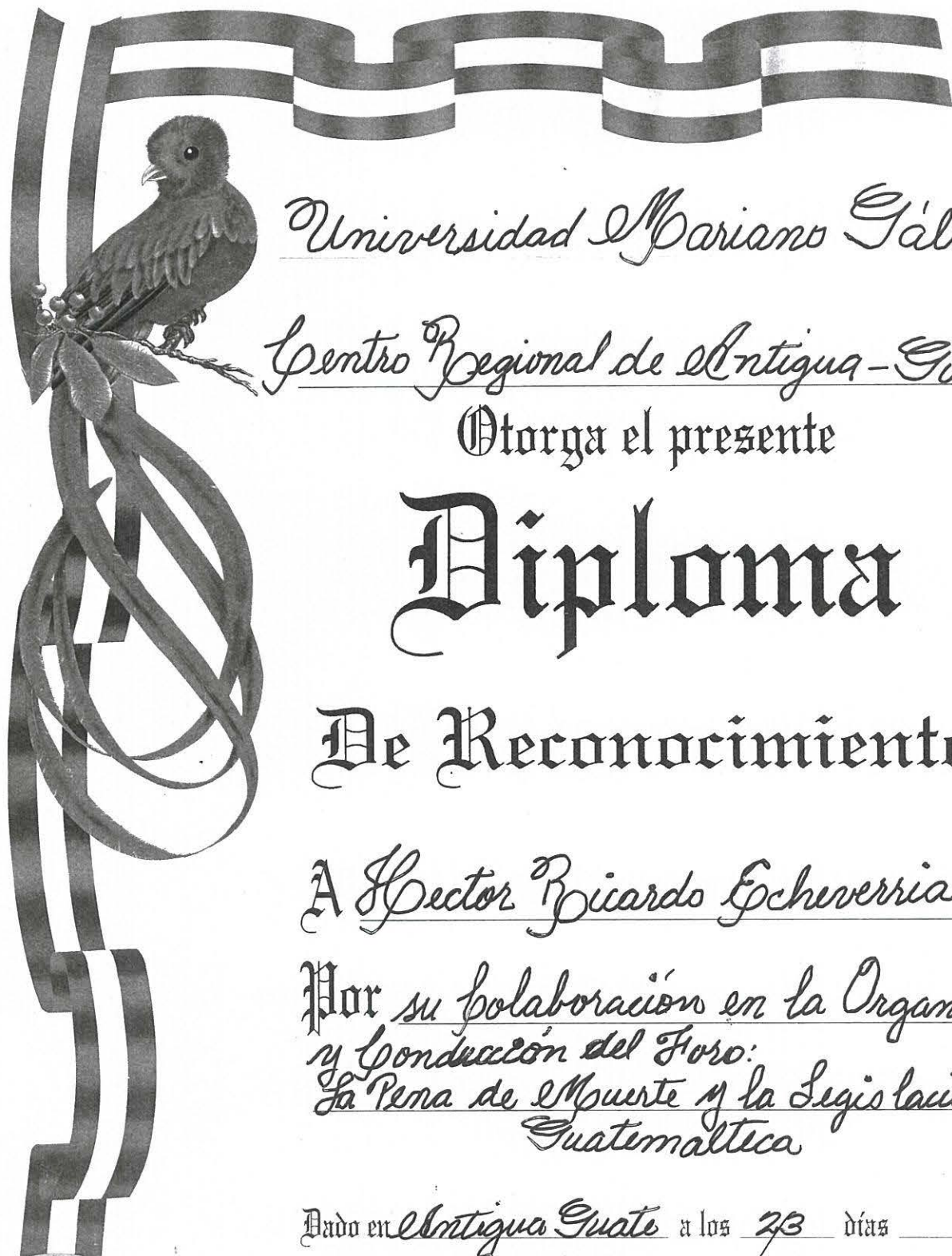
SISTEMA de  
**INTEGRIDAD**  
Institucional

*[Signature]*  
**Gilberto Gómez Moroy**  
ABOGADO Y NOTARIO





107  
12



Universidad Mariano Gálvez

Centro Regional de Antigua - Guatemala

Otorga el presente

# Diploma

## De Reconocimiento

A Hector Ricardo Echeverria Méndez

Por su colaboración en la Organización  
y Conducción del Foro:  
*La Pena de Muerte y la Legislación  
Guatemalteca*

Dado en Antigua Guate a los 23 días  
del mes de Septiembre de 2000.



*[Signature]*

Lic. Juan Fernando Sáenz Barrios  
ABOGADO Y NOTARIO

*[Signature]*  
Tilda.  
Alexia Magali López Arangú  
*[Signature]*  
Gilberto Gómez Morroy  
ABOGADO Y NOTARIO

2 DE 3 HOJAS

Gilberto Gómez Morroy  
ABOGADO Y NOTARIO  
CINCUENTA CENTAVOS DE IMPORTE  
GUATEMALA



En la ciudad de **Guatemala**, el **veintitrés** de **diciembre** de **dos mil diecinueve**, como Notario DOY FE: Que las dos fotocopias que anteceden impresas únicamente en el anverso son **AUTENTICAS**, por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, directamente de los documentos originales y que reproducen: **a)** Reconocimiento otorgado por el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, a favor de HECTOR RICARDO ECHEVERRIA MENDEZ, por cumplir cinco años de labores en este Organismo, contribuyendo al fortalecimiento de la administración de justicia de Guatemala, Guatemala, noviembre de dos mil catorce; **b)** Diploma otorgado por la Universidad Mariano Gálvez del Centro Regional de Antigua Guatemala a Hector Ricardo Echeverria Méndez, por su colaboración en la Organización y Conducción del Foro: La Pena de Muerte y la Legislación Guatemalteca de fecha veintitrés de septiembre de dos mil. En fe de lo cual numero, firmo y sello las dos hojas que anteceden y la presente acta de legalización y adhiero los timbres de ley.

**POR MI Y ANTE MI:**

*Gilberto Gómez Morrey*  
**ABOGADO Y NOTARIO**

3 DE 3 HOJAS



109

## **RESUMEN CURRICULUM VITAE**

### **1. DATOS PERSONALES:**

**Nombre y apellidos completos:** Héctor Ricardo Echeverría Méndez; **Edad:** 50 años; **Profesión:** Abogado y Notario; **No. de Colegiado:** 6149; **Años de ejercicio profesional:** 20 años.

### **2. MÉRITOS ACADÉMICOS:**

**Doctorado en Derecho (Pensum cerrado),** Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de Post Grado. **2013. Maestría en Gestión Jurisdiccional,** Universidad San Pablo de Guatemala y Universidad Rural de Guatemala, Grado Académico: Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional. **2011. Maestría en Derecho Penal,** Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de Post Grado, Grado Académico: Maestro en Derecho Penal. **1999. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,** Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Títulos de Abogado y Notario. **Docente** en Universidad Panamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia del año 2003 al 2019, impartiendo diversos cursos. **Docente** en Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del 2000 a 2004, impartiendo diversos cursos. **Producción doctrinaria** en revistas jurídicas temas relacionados al Derecho. **Participación** en diversos eventos, entre ellos, la "Teoría Jurídica del Delito y Aspectos de la Criminalidad Organizada y Narcotráfico", Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. **2013. Mérito obtenido: Mención Honorífica Cum Laude por Defensa de Tesis** de graduación previo a obtener el Título de Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional. **Conferencias** realizadas en el campo del Derecho, entre ellas, "La Inconstitucionalidad en materia penal", impartida a los estudiantes del tercer año de la Licenciatura de Derecho, Universidad del Istmo. **Participación en actividades académicas como moderador:** "El proceso penal. Los Modelos procesales penales" y "La oralidad en el Proceso Penal", de la X Escuela Judicial para Centroamérica y el Caribe "Juan Carlos I" 2006 en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y República Dominicana, El Consejo General del Poder Judicial de España y La Agencia Española de Cooperación Internacionales (AECI).

**3. MÉRITOS PROFESIONALES:** **Experiencia Judicial:** Magistrado de la Salas de la Corte de Apelaciones, periodo 2009 al 2014. **Experiencia Administrativa:** Representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, 2016 al 2019. Subsecretario de la Presidencia del Organismo Judicial

**4. MÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA:** **Vocación de servicio:** Cumplir cinco años de labor en el Organismo Judicial, contribuyendo al fortalecimiento de la administración de justicia de Guatemala. **Vocación de liderazgo:** Organización y conducción del Foro: La pena de muerte y la legislación guatemalteca. Universidad Mariano Gálvez.

Guatemala, enero de 2020. Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Abogado y Notario.



110  
8  
C

USB (1)

CONTIENE

ARCHIVO

EXPEDIENTE PARA

COMISIÓN DE POSTULACIÓN

C. S. J.

HÉCTOR RICARDO

ECHVERRÍA MÉNDEZ